

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

60ª REUNIÓN — 26ª SESIÓN ORDINARIA — 16 DE OCTUBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES.

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GENOUD, José
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.

OYARZÚN, Juan C.
PARDO, Angel F.
QUINZIO, Bernardo P.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAYERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES. CON AVISO:

HUMADA, Julio C.
LUDUEÑA, Felipe E.
OUDIN, Ernesto R.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
REUTEMANN, Carlos A.
SALUM, Humberto E.
VACA, Eduardo P.

EN COMISIÓN:

DE LA ROSA, Carlos L.
GALVÁN, Raúl A.
GIOJA, José L.
SOLANA, Jorge D.

POR SUSPENSIÓN:

ANGELOZ, Eduardo C.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 5738.)

2. Por invitación del señor vicepresidente de la Nación, el señor senador por Formosa, doctor Alberto Ramón Maglietti, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 5739.)

3. Distinción del Honorable Senado al doctor Guillermo Oliver, investigador del Centro de Referencia de Lactobacilos (CERELA) de Tucumán, padre de la denominada "leche biótica". (Pág. 5739.)

4. Asuntos entrados:

I. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se observa parcialmente el proyecto de ley 24.700 de régimen legal sobre contrato de trabajo sobre retribuciones no contributivas (P.E.-590/96). (Pág. 5741.)

II. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre nuevas funciones de la Subsecretaría de Alimentación dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (P.E.-610/96). (Pág. 5742.)

III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al señor presidente de la Nación a ausentarse del país durante el año 1997 (P.E.-612/96). (Pág. 5743.)

IV. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 5744.)

V. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 5744.)

VI. Comunicaciones de comisiones. (Página 5744.)

VII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 5745.)

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5745.)

IX. Dictámenes de comisiones. (Página 5745.)

X. Peticiones particulares. (Página 5748.)

XI. Proyecto de comunicación de los señores senadores López y Usandizaga por el que se solicitan informes sobre el estado de las gestiones para la construcción del canal "Casas Blancas" entre la Argentina y el Uruguay (S.-2.050/96). (Pág. 5749.)

XII. Proyecto de resolución del señor senador Genoud por el que se repudia el atentado contra el fiscal Pablo Lanusse (S.-2.051/96). (Pág. 5749.)

XIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita un

subsidio para la Municipalidad de San Carlos, Mendoza (S.-2.052/96). (Página 5750.)

XIV. Proyecto de ley del señor senador Branda sobre régimen legal para la reproducción humana asistida (S.-2.053/96). (Pág. 5750.)

XV. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicita la ampliación hasta el 31 de diciembre de 1996 el plazo para recibir reintegros fiscales (S.-2.055/96). (Página 5754.)

XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Reutemann por el que se solicita se declare de interés nacional el Curso Magistral de Perfeccionamiento Instrumental e Interpretativo y de Música de Cámara denominado Cuarto Cámping Musical Internacional La Cumbrecita, a realizarse en Córdoba (S.-2.058/96). (Pág. 5755.)

XVII. Proyecto de resolución del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes sobre los recursos financieros utilizados para la realización del XII Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (S.-2.059/96). (Página 5755.)

XVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Fernández Meijide por el que se solicita al Poder Ejecutivo la derogación del decreto 1.141/96 sobre desregulación de las obras sociales (S.-2.060/96). (Pág. 5756.)

XIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Rivas por el que se expresa satisfacción por los hallazgos arqueológicos de un equipo de investigadores argentinos en Egipto (S.-2.061/96). (Pág. 5758.)

XX. Proyecto de declaración del señor senador Humada por el que se expresa beneplácito y felicitaciones al equipo de investigadores argentinos que descubrieron una fortaleza antigua en Egipto (S.-2.062/96). (Pág. 5758.)

XXI. Proyecto de resolución del señor senador Losada por el que se invita al ministro del Interior para que brinde información sobre un trabajo de investigación realizado por la Policía Federal sobre las villas de emergencia (S.-2.063/96). (Pág. 5759.)

XXII. Proyecto de ley de los señores senadores Losada y Fernández Meijide sobre ampliación del plazo previsto para el cobro de indemnizaciones a los civiles que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo o autoridades

biblioteca del Congreso Nacional (S.-2.124/96). (Pág. 5810.)

LXXXI. Proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicita un subsidio para la Escuela de Educación Especial de Villa Media Agua de Sarmiento, San Juan (S.-2.125/96). (Pág. 5810.)

LXXXII. Proyecto de declaración del señor senador Manfredotti por el que se expresa beneplácito por las medallas obtenidas por estudiantes secundarios en la XI Edición de las Olimpíadas Iberoamericanas de Matemática (S.-2.126/96). (Pág. 5811.)

LXXXIII. Proyecto de resolución de los señores senadores San Millán y Cantarero por el que se declara de interés para el Honorable Senado la realización del Primer Congreso Provincial de Turismo a realizarse en Salta (S.-2.127/96). (Pág. 5811.)

LXXXIV. Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicita un subsidio para el Centro Asistencial "Mi Camino" Cooperativa de Trabajo en Salud Mental (S.-2.128/96). (Pág. 5812.)

LXXXV. Proyecto de resolución del señor senador Quinzio por el que se libra oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que remita original o copia certificada de documentación relacionada con el juicio político seguido a la doctora Beatriz Celia Marino (S.-2.129/96). (Pág. 5812.)

LXXXVI. Proyecto de resolución del señor senador Martínez Almudevar por el que se otorga el auspicio del Honorable Senado para la realización de la Caminata por la Vida, en recordación del Día Internacional de Lucha contra el Sida (S.-2.130/96). (Pág. 5813.)

LXXXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Genoud por el que se solicita la inmediata regularización del envío de fondos de coparticipación federal a las provincias (S.-2.131/96). (Pág. 5813.)

5. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 5813.)

6. Moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Genoud para considerar el proyecto de resolución del que es autor junto con otros señores senadores por el que se invita a los señores ministros del Interior y de Justicia a concurrir al Honorable Senado para informar sobre las graves imputaciones que efectuara el ex ministro de Eco-

nomía, doctor Domingo Cavallo (S.-2.134/96). Moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Moreau para considerar el proyecto de resolución del que es autor sobre creación de una comisión investigadora de ilícitos. (S.-2.098/96). Se rechazan. (Pág. 5817.)

7. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Cantarero referido a la mecánica de cálculo aplicada en el giro de las coparticipaciones de impuestos a las provincias. (S.-2.137/96). Se aprueba. (Pág. 5840.)

8. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir el cuerpo en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 5842.)

9. Manifestaciones de varios señores senadores con respecto al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías. Se levanta la sesión por falta de quórum sobre hábeas data. (Pág. 5842.)

10. Apéndice:

Sanción del Honorable Senado. (Pág. 5898.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 21 del miércoles 16 de octubre de 1996:

I

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: como de costumbre, solicito que establezcamos un horario determinado para iniciar la sesión y, de no formarse quórum, que sea levantada.

Sr. Presidente. — A pedido del señor senador por San Juan, la Presidencia establece el término improrrogable de quince minutos más para intentar la formación del quórum. Si en ese lapso no se lo alcanza, daré por levantada la sesión.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 35.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Para una manifestación en minoría, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: solicito que se prorrogue por diez minutos el tiempo de espera previsto, a fin de dar comienzo a la sesión.

Sr. Presidente. — Muy bien, señor senador.

La Presidencia solicita la colaboración de los auxiliares de bloque a efectos de lograr que los señores senadores ausentes bajen al recinto.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 44:

Sr. Presidente. — Informo a los señores senadores que está a punto de llegarse al límite horario fijado para alcanzar el quórum. En caso de que no se lo logre, se deberá levantar la sesión.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Si eventualmente se levantara la sesión, pido que antes se pase lista.

Sr. Presidente. — Dado que faltan solamente dos senadores para alcanzar el quórum, solicito a los señores auxiliares de bloque que colaboren con la Presidencia para que se llegue al número necesario para comenzar la sesión.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 46:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Formosa doctor Alberto Ramón Maglietti, de la Unión Cívica Radical, a izar la bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Maglietti procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

3

DISTINCION AL DOCTOR GUILLERMO OLIVER

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó dar cumplimiento a la resolución sancionada por el Honorable Senado el 21 de agosto próximo pasado por la cual se declara científico ilustre al doctor Guillermo Oliver, investigador del Centro de Referencia de Lactobacilos (CERELA), de Tucumán, padre de la denominada "leche biótica".

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — *(Lee)*

El Senado de la Nación,

RESUELVE:

1º Declarar científico ilustre, al doctor Guillermo Oliver, investigador del Centro de Referencia de Lactobacilos (CERELA) de Tucumán, padre de la denominada "leche biótica" que ayuda a combatir el flagelo de la

desnutrición infantil y otras enfermedades, tanto en niños como en adultos, contribuyendo de manera efectiva a mejorar la calidad de vida de la población.

2º La declaración consistirá en la entrega de un diploma y una medalla de oro del Senado de la Nación.

3º El acto se realizará en el recinto del Senado de la Nación en presencia de los señores senadores, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el presidente del Conicet, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación y otros invitados que las autoridades consideren pertinentes.

4º El acto será divulgado por la Red de la Presidencia del Senado a todos los medios de difusión del país.

5º Comuníquese.

Sr. Presidente. — Como en las inmediaciones del recinto se encuentra presente el doctor Guillermo Oliver, se lo invitará a pasar...

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Quería referirme a este tema.

Sr. Presidente. — Sí, pero dentro de unos segundos, primero, si hay asentimiento, vamos a invitar a ingresar en el recinto al homenajeado.

—Asentimiento.

—Ingresa en el recinto el doctor Guillermo Oliver y ocupa un lugar en la mesa de ministros.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: creo que éste es un bien merecido homenaje. Debemos colocar al doctor Guillermo Oliver a la altura de los grandes investigadores que tuvo la humanidad; incluso, junto a quienes recibieron premios Nobel. Cito, por ejemplo, a Metchinkoff, que también trabajó en este tema y obtuvo el Premio Nobel en 1908; a Pasteur, que trabajó anónimamente, descubrió el virus de la rabia y logró el suero antirrábico a través de virus atenuados, lo que permitió solucionar los problemas ocasionados por esa patología tan tremenda y terrible.

Creo que es importante la solución que este investigador ha dado para los problemas de las enterocolitis y diarreas agudas y crónicas. La leche biótica, además de favorecer la curación de esas enfermedades, posibilita el desarrollo de la inmunidad en los problemas intestinales y bronquiales y el desarrollo del interferón. Este último es un elemento antivirótico muy importante que, junto con la leche biótica, brinda una solución integral para ese tipo de patologías.

Dejamos planteado que en el artículo 1º se debería señalar un reclamo al Poder Ejecutivo, tal como establece nuestro proyecto de resolución.

Los fundamentos son coincidentes con los señalados por el señor senador por Salta, a los que agregamos situaciones puntuales que se dan en cada una de las provincias.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas. Se necesita mayoría de dos tercios.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Proyecto de resolución

El Honorable Senado de la Nación

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los fines de expresar su preocupación por la mecánica de cálculo aplicada en el giro de las coparticipaciones de impuestos a las provincias, alterando las normas que se venían respetando y produciendo serias dificultades en las previsiones presupuestarias de los entes federales.

De la misma manera interesar al Poder Ejecutivo nacional, para que con la urgencia que el caso impone, se rectifiquen los procedimientos indebidos, se remitan las partidas adeudadas y se liquide para lo futuro de la forma que corresponde según la ley.

Emilio M. Cantarero. — Héctor M. Maya. — Alberto M. Tell. — Olijela del Valle Rivas. — Horacio A. Zalazar. — Julio Argentino San Millán. — Cristina Fernández de Kirchner. — José O. Figueroa. — Carlos A. Verna. — Ricardo A. Branda. — Jorge A. Villaverde. — Bernardo P. Quinzio. — Omar M. Vaquir.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las provincias acaban de recibir con sorpresa las remesas de la coparticipación federal de impuestos, correspondientes al mes de septiembre en las que se disponía un mecanismo de cálculo que variaba el tradicional y acarrearba como consecuencia un deterioro de las partidas, produciendo alteraciones en las finanzas provinciales, toda vez que las previsiones se encontraban con la realidad.

Realmente, la visión que el Honorable Senado de la Nación posee del equipo económico y su permeabilidad a las sugerencias y propuestas de este cuerpo, en la búsqueda de los mejores resultados para el país y que pro-

mueven ponderaciones, se ven menguadas por ese comportamiento, que pensamos accidental y equivocado, intentando por esta vía se corrija tal camino imprudente.

Por las razones expuestas y las que se agregarán al momento del tratamiento, solicitamos la aprobación de presente.

Emilio M. Cantarero. — Alberto M. Tell. — Héctor M. Maya. — Julio A. San Millán. — Horacio A. Zalazar. — Carlos A. Verna. — Cristina Fernández de Kirchner. — José O. Figueroa. — Olijela del Valle Rivas. — Jorge A. Villaverde. — Ricardo A. Branda. — Bernardo P. Quinzio. — Omar M. Vaquir.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

Tiene la palabra el señor Avelín, a quien le pido disculpas porque no había percibido su pedido de palabra.

Sr. Avelín. — Señor presidente: brevemente quiero apoyar este proyecto, que es importante porque las provincias viven asfixiadas y es interesante que exista el respaldo y el aporte de la Nación para resolver problemas económicos y sociales.

8

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. — A continuación pasamos a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político.

— Son las 21 y 17.

— A las 21 y 20:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

9

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. — Pasamos ahora a los órdenes del día. En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías, y el complemento, en relación a siete proyectos de ley: el primero, del señor senador Menem; el segundo, de la señora senadora Fernández Mei-

de; el tercero, del señor senador López; el cuarto, del señor senador Berhongaray; el quinto, del señor senador Romero Feris; el sexto, del señor senador Alasino, y el séptimo, venido en revisión, sobre hábeas data. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.208 y complemento.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senador:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías han considerado los expedientes: S.-111/96, "Menem: proyecto de ley sobre hábeas data", S.-230/96, "Fernández Meijide: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-563/96, "López: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-773/96, "Berhongaray: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-1.384/95, "Romero Feris: proyecto de ley sobre hábeas data"; S.-2.006/95: "Alasino: proyecto de ley sobre hábeas data"; C.D.-30/96: "Proyecto de ley en revisión sobre hábeas data" y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° — *Objeto.* La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos de carácter personal asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, electrónicos o manuales, para garantizar el honor y la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

Art. 2° — *Definiciones.* A los fines de la presente ley se entiende por:

- *Datos de carácter personal:* información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- *Datos sensibles:* son los que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- *Archivo, registro, base o banco de datos:* indistintamente, designan al conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto

de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.

- *Tratamiento de datos:* operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos de carácter personal, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- *Responsable de archivo, registro, base o banco de datos:* persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.
- *Datos informatizados:* los datos de carácter personal sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- *Titular de los datos:* toda persona física, ciudadano argentino o extranjero, o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos son objeto del tratamiento de que trata la presente ley.
- *Ficha personal:* contenido de la información de una persona, que permite su identificación y definir sus antecedentes y actividades de cualquier tipo.
- *Usuarios de datos:* toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

CAPÍTULO II

Principios generales relativos a la protección de datos

Art. 3° — *Archivos de datos - Licitud.* La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establecen la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

Art. 4° — *Calidad de los datos:*

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para las que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos serán exactos y deben actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.

5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser cancelados y sustituidos, o en su caso completados, de oficio cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recabados.

Art. 5º — *Consentimiento:*

1. El tratamiento de datos de carácter personal es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, juntamente con las advertencias previstas en el artículo 6º de la presente.

2. No será necesario el consentimiento cuando:
 - a) Los datos se obtengan de fuentes accesibles al público;
 - b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado;
 - c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono;
 - d) Deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento;
 - e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39, de la ley 21.526.

Art. 6º — *Información.* Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

- a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios;
- b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;
- c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
- d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;
- e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos.

Art. 7º — *Categoría de datos:*

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.
2. Los datos indicados en el apartado anterior sólo pueden ser recabados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros.
4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Art. 8º — *Datos relativos a la salud.* Los hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas y los profesionales vinculados a la ciencia médica pueden recabar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos.

Art. 9º — *Seguridad de los datos:*

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. No se deben registrar datos de carácter personal en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

Art. 10. — *Deber de confidencialidad:*

1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Art. 11. — *Cesión:*

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados

con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

2. La cesión de datos a terceros debe ser comunicada a los titulares en la primera oportunidad en que ello ocurra. El consentimiento para la cesión es revocable.

3. El consentimiento no es exigido cuando:

- a) Así lo disponga una ley;
- b) En los supuestos previstos en el artículo 5º inciso 2;
- c) El establecimiento del archivo responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho fichero con el de terceros. En tal caso la cesión será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justificó;
- d) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
- e) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos; en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
- f) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean indistinguibles.

4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Art. 12. — *Transferencia internacional:*

1. Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la República Argentina.
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

- a) Colaboración judicial internacional;
- b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica;
- c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;
- d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;
- e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organis-

mos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

CAPÍTULO III

Derechos de los titulares de datos

Art. 13. — *Derecho de información.* Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros bases o bancos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

Art. 14. — *Derecho de acceso:*

1. El titular tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes.
2. El requerido deberá asegurarse de la identidad del peticionante y cumplir con dicha obligación dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimará insuficiente, quedará expedita la acción especial de amparo prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

Art. 15. — *Contenido de la información:*

1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.
2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
3. El acceso, a opción del titular, podrá instrumentarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo a tal fin.

Art. 16. — *Derecho de rectificación, actualización o cancelación:*

1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificadas, actualizadas, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.
2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, cancelación o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a

tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de verificado el error o falsedad.

3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de amparo prevista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
5. La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.
7. Los datos de carácter personal deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.

Art. 17. — Excepciones:

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos, pueden denegar el acceso, rectificación o la cancelación en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
2. La información sobre datos de carácter personal también puede ser denegada, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.

Art. 18. — Comisiones legislativas. Las comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso de la Nación, o las que las sustituyan, tendrán acceso a los archivos o bancos de datos referidos en el artículo 23 inciso 2 por razones fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales comisiones.

Art. 19. — Gratuidad. La rectificación, actualización o cancelación de datos de carácter personal inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

Art. 20. — Impugnación de valoraciones personales:

1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración sobre conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos de carácter personal que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.
2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos.

CAPÍTULO IV

Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos

Art. 21. — Registro de archivos de datos. Inscripción.

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
 - a) Nombre y dirección del responsable;
 - b) Características y finalidad del archivo;
 - c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
 - d) Forma de recolección y actualización de datos;
 - e) Destino de los datos y entidades a los que pueden ser transmitidos;
 - f) Modo de interrelacionar la información registrada;
 - g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
 - h) Tiempo de conservación de los datos;
 - i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos de carácter personal de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

Art. 22. — Archivos, registros o bancos de datos públicos:

1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, y anotado en el correspondiente

registro que a tal fin habilite el organismo de control.

2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:

- a) Características y finalidad del archivo;
- b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
- c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
- d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos de carácter personal que contendrán;
- e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
- f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
- g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación.

3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.

4. La cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público, no podrá efectuarse a archivos, registros o bancos de datos privados sin el consentimiento del titular de los datos o en virtud de una ley que lo autorice.

Art. 23. — *Supuestos especiales:*

1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos de carácter personal que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquéllos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.

2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.

3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios

para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

Art. 24. — *Archivos, registros o bancos de datos privados.* Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21.

Art. 25. — *Prestación de servicios informatizados de datos de carácter personal:*

1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aún para su conservación.
2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

Art. 26. — *Prestación de servicios de información crediticia:*

1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos de carácter personal que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos diez años.

Art. 27. — *Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad:*

1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de

consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.

2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso, que comprenderá también los datos que hubieren sido dados de baja y la fuente de donde han sido obtenidos, sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.

Art. 28. — *Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas:*

1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos, no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna en particular.

CAPÍTULO V

Control

Art. 29. — *Órgano de control.* El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
- b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
- c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
- d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registro o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
- e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que se le requieran;

- f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
- g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley.

Art. 30. — *Códigos de conducta:*

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos de carácter personal que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.
2. Dichos códigos deberán ser inscritos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

CAPÍTULO VI

Sanciones

Art. 31. — *Sanciones administrativas:*

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de usuarios públicos; en cualquier caso, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación de la autorización del archivo, registro o banco de datos.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción.

Art. 32. — *Sanciones penales:*

1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:
 1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar maliciosamente datos falsos en un archivo de datos de carácter personal.
 2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero maliciosamente información falsa contenida en un archivo de datos de carácter personal.
 3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.

4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación penal para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

2. Incorporase como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente:

Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a tres años el que maliciosamente e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accederle, de cualquier forma, a un banco de datos de carácter personal.

CAPÍTULO VII

Acción especial de amparo

Art. 33. — *Legitimación activa:*

1. La acción de amparo especial de protección de los datos personales (o de hábeas data) procederá para tomar conocimiento de los datos de carácter personal almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, así como también su finalidad y los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata y de la inclusión de aquellos que tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
2. Podrá ser ejercida por el afectado y sus sucesores, por sí o por intermedio de apoderado.
3. Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.
4. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante del Defensor del Pueblo.

Art. 34. — *Legitimación pasiva.* La acción procederá respecto de los usuarios de datos públicos o privados. En este último supuesto procederá si tuviera la posibilidad de generar y proveer informes.

Art. 35. — *Competencia.* Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Procederá la competencia federal.

- a) Cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y
- b) Cuando los archivos de datos se encuentren interconectados, en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

Art. 36. — *Procedimiento aplicable.* La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la pre-

sente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.

Art. 37. — *Requisitos de la demanda:*

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos, así como el nombre del responsable del mismo.

En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.

2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta, de qué modo afecta sus derechos, y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.
3. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
4. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Art. 38. — *Trámite:*

1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Art. 39. — *Confidencialidad de la información:*

1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el supuesto en que se afecte el secreto de las fuentes de información periodística.
2. Los archivos, registros o bancos de datos públicos sólo podrán invocar las excepciones autorizadas por la presente ley, o los establecidos en una ley específica. En tales casos deben acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal.

El juez apreciará con criterio restrictivo toda oposición al envío de informes sustentado en tales causas, debiendo expedirse dentro del segundo día de planteada la excepción.

La resolución judicial que insista con la remisión de los datos será apelable dentro del segundo día de notificada. El escrito de apelación será fundado.

3. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En el último caso, será elevado el expediente al tribunal de alzada dentro del día de ser concedido.

Art. 40. — Contestación del informe. Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó a información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

Art. 41. — Sentencia:

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida —en su caso— la prueba, el juez dictará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, cancelada, actualizada o declararla confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.
4. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, que deberá llevar un registro al efecto.

Art. 42. — Ambito de aplicación. Las normas de la presente ley contenidas en los capítulos I, II, III y IV, y artículo 32 son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional.

Se invita a las provincias a adherir a las normas de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.

La jurisdicción federal regirá respecto de los registros, archivos, bases o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjurisdiccional, nacional o internacional.

Art. 43. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

Art. 44. — Disposición transitoria. Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a proporcionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme con lo dispuesto en el artículo 21 dentro del plazo que a tal efecto establezca la reglamentación.

Art. 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de septiembre de 1996.

Jorge R. Yoma. — Eduardo Menem. — Augusto Alasino. — Angel F. Pardo. — Julio C. Humada. — Deolindo F. Bittel. — Julio A. San Millán. — Ernesto R. Oudin. — José O. Figueroa. — Héctor M. Maya. — Alberto M. Tell. — Juan R. Aguirre Lanari.

En disidencia parcial:

José Genoud. — Raúl A. Galván. — Alcides H. López. — Antonio T. Berhongaray. — Comodoro H. Storani. — Graciela Fernández Meijide.

En disidencia:

Pedro G. Villarreal.

Disidencia parcial de la senadora Gracie'a Fernández Meijide

Señor presidente:

Ante todo deseo destacar mi entera satisfacción por la existencia de una voluntad contemporizadora en la comisión, ligada al tratamiento del instituto en cuestión. No sólo la apreciación de las diversas propuestas legislativas de diputados y senadores, sino la permeabilidad manifestada en esta comisión para la elaboración de los sucesivos predictámenes, me sugieren alentar el presente estilo de trabajo, que en definitiva, fortalecerá un republicano criterio interpretativo de la reforma constitucional realizada en 1994.

No obstante ello, me permito disentar con algunos aspectos puntuales del presente dictamen de comisión sugiriéndose a la vez, ciertos cambios de redacción, como ser:

Sobre el artículo 2: (datos sensibles).

En cuanto a la definición de datos sensibles sería conveniente agregar al final de su enumeración la expresión "y similares", pues si bien la enumeración de lo que es dato sensible es amplia en este dictamen, sigue resultando taxativa. Esto mismo cabe para la enunciación existente en el artículo 33.

En el artículo 10 inciso 2º (relevamiento del deber, de confidencialidad).

Creemos necesario agregar un párrafo que expresamente establezca que el relevamiento del secreto profesional sólo podrá efectuarse por resolución judicial. Tengamos presente que las expresiones utilizadas en este artículo para fijar las causales del relevamiento del secreto profesional como ser "seguridad pública", "defensa nacional" y "salud pública" son per se vagas, imprecisas.

Artículo 11 punto 3 punto b).

No se debe poder transferir datos a terceros sin consentimiento del titular con la misma amplitud del artículo 5º punto 2. Esto permitiría por ejemplo, que los datos recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, sean transferidos a particulares (v. gr. información de la DGI) o datos que importen ser mantenidos en reserva como la dirección o el teléfono de una persona, en el caso del teléfono espe-

cialmente de los de tipo celular, pues en este supuesto importaría una verdadera disposición sobre los bienes del titular de los datos.

Artículo 12 inciso b) (transferencia internacional de datos por investigación epidemiológica).

Sería necesario agregar un párrafo que también condicione la transferencia internacional de datos mediante un mecanismo de disociación adecuada y que torne identificable al titular del dato. Este agregado de texto posibilitará mantener una congruencia en todo el articulado de la ley, es decir, entre la causal descripta en el reciente artículo e inciso en correlación, supuesto que se contempla en el punto e) inciso 3 del artículo 11 (cesión) incorporado al presente dictamen.

Artículo 14 (derecho de acceso).

En su inciso 2 habría que mejorar la redacción, contemplándose también la denegatoria de acceso por invocación de las causales de excepción establecidas en el artículo 17. De lo contrario se podría facilitar una interpretación restrictiva en sede judicial sobre el alcance del derecho de acceso y los motivos de fundamentación del recurso de amparo. De introducirse esta modificación podríamos armonizar la nueva redacción, con el sentido establecido en el supuesto contemplado en el artículo 39 inciso 2 del dictamen (confidencialidad de la información).

La modificación que sugerimos es la siguiente: artículo 14 inciso 2 ... vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido alegándose o no las causales de excepción establecidas en el artículo 17, o si evacuado el informe éste se estima insuficiente, quedará expedita la acción especial de amparo prevista en esta ley.

Finalmente cabe acordar sobre este artículo que la redacción del presente dictamen, no especifica si los sucesores —y hasta qué grado— pueden hacer uso del derecho que asiste en este artículo, lo mismo sobre la presentación por medio de representantes legales (tutores, curadores y apoderados). Además está previsto en el artículo 33 inciso 2 para la acción de amparo cual sería absurdo, que no pueda pedir el dato quien puede ejercer la acción de amparo. Por otra parte aún en este último supuesto no se encuentra prevista la posibilidad de presentación por medio de representantes legales de los incapaces, por lo cual éstos quedarían afuera de las regulaciones de la ley (mejores, insanos, etcétera).

Artículo 17.

Si bien la legislación comparada los recepta, nuestra Constitución Nacional reformada no incluye datos ligados a la "seguridad nacional", por lo que incluirlos en la ley constituye una violación del derecho a la intimidad. Además, no debemos dejar de tener presente el problema de la vaguedad conceptual propia de este tipo de expresiones.

La problemática de la vaguedad conceptual de los términos podría posibilitar una arbitraria restricción del ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.

Artículo 23 (supuestos especiales).

Creemos que las modificaciones introducidas al dictamen en lo que se refiere a este artículo, y a partir

de las observaciones formuladas por los representantes de la SIDE acerca de facilitar al referido organismo, la colección de datos de personas que, eventualmente, puedan integrar marcos referenciales afectantes de la seguridad y defensa de la Nación (ejemplo: terrorismo, narcotráfico, etcétera) no son incompatibles con el sentido que tuvo la redacción original del dictamen de comisión. Sería conveniente preservar la redacción mantenida en la media sanción de la Cámara de Diputados que condiciona el tratamiento de datos en estos supuestos especiales, a la prevención dado un peligro real y cierto. No es exacto que estas expresiones generen controversias impredecibles respecto a cómo se encuadra la existencia o no de ese peligro, que debe ser real y cierto. La alusión al peligro real y cierto tiene que ver con situaciones fácticas que efectivamente evidencian una posible afectación de bienes jurídicos tutelados penalmente a partir del principio de la tipicidad.

Si la regulación legislativa sobre tratamiento de datos, posibilita la manipulación de información ante eventuales marcos referenciales de organizaciones delictivas por parte de los servicios de inteligencia del Estado, se terminaría legitimando la ruptura de una tradición argentina de derecho penal liberal de garantía, basado en la acción concreta (artículo 19 de la Constitución Nacional) para pasarse a un derecho penal de autor, propio de los estados totalitarios.

Por todo lo expuesto, es que insistimos con la redacción —en este punto— del artículo 26 del proyecto venido de la Cámara de Diputados.

Graciela Fernández Meijide.

Disidencia total del senador Pedro Guillermo Villarroel

Señor presidente:

El presente dictamen tiene por objeto fundar mi disidencia con el proyecto de ley reglamentario de la acción de hábeas data (artículo 43 último párrafo de la Constitución Nacional). Brevemente, y más allá de los argumentos que se expondrán en el debate, las objeciones generales sobre el proyecto propuesto son las siguientes:

—Técnicamente, no se propone un proyecto de ley sobre hábeas data, sino la regulación del régimen legal de los bancos de datos, marco dentro del cual se incorpora el hábeas data. Dicha técnica legislativa configura una norma innecesariamente extensa y farragosa, que atenta contra las exigencias de claridad y sencillez que hubiera requerido la reglamentación de la garantía constitucional. Lo mismo debe decirse del lenguaje empleado en la redacción del proyecto.

—Las excepciones previstas en materia de exigencia del consentimiento para el tratamiento de datos personales son demasiado amplias, desvirtuándose así el principio.

—No se establecen sanciones ante la falta de información a los titulares de los requisitos exigidos por la ley.

—Se autoriza el recabamiento de datos sensibles cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley, hecho que permite al legislador vaciar de contenido el principio.

— También en materia de consentimiento para la cesión de datos personales, las excepciones establecidas son tan amplias que desvirtúan el principio, que es el de su exigencia.

— Se establecen requisitos irrazonables para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización y cancelación de los datos personales. Particularmente graves son las excepciones para el ejercicio de esos derechos, que incluyen la posibilidad de denegación en supuestos tan laxos como la protección de la defensa de la Nación, el orden y la seguridad pública, o la protección de derechos e intereses de terceros. La amplitud de tales criterios significa prácticamente la denegación del ejercicio de los derechos examinados. En el mismo sentido, los requisitos a los que se somete el tratamiento y cancelación de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública son de imposible control, ya que precisamente en estos supuestos se deniega el derecho al acceso.

— La ley establece una serie de requisitos de inscripción de bancos de datos. Sin embargo, no dispone expresamente que los bancos de datos existentes quedan también sujetos a los requisitos y obligaciones de inscripción, hecho que convalidaría la existencia de todo banco de datos anterior a la sanción de la ley, aunque no haya cumplido con los parámetros fijados por ella.

— Una grave falencia del proyecto de ley es la de no definir correctamente el órgano de control que ella misma crea, difiriendo aspectos fundamentales de su regulación a la reglamentación. La ley no define aspectos tan relevantes como su ubicación institucional, su conformación, su estructura jerárquica, la independencia de sus miembros, sus atribuciones para requerir información de otros órganos, etcétera. Esta deficiente regulación abre una gran incertidumbre respecto a las posibilidades reales de ejercicio del derecho de acceso y rectificación de la información, en especial cuando se trata de bancos de datos públicos.

— Por último, se establecen requisitos procedimentales injustificados para la presentación de la acción de hábeas data (llamada acción especial de amparo). Entre ellos, la carga de demostrar que la información es discriminatoria, y de qué forma afecta los derechos del actor, exigencias a todas luces innecesarias ya que para el tratamiento de información prohibida o errónea constituye de por sí una violación del derecho establecido por el artículo 43 último párrafo de la Constitución Nacional.

En particular, las objeciones al proyecto son las siguientes:

Artículo 1º: es innecesaria la disyunción “electrónicos o manuales”.

Artículo 2º:

— En la definición de “datos de carácter personal”, es innecesaria la disyunción “determinadas o determinables”.

— En las definiciones de “archivo” y “tratamiento de datos”, es innecesaria la disyunción “electrónicos o no”. En la última, debe cambiarse el término “relacionamiento” por “relación”.

— Es inconveniente el empleo del mismo término para designar al “titular” de un banco de datos y al “titular” de un archivo, uso que se presta a confusión.

— En la definición del titular de los datos, se habla de “ciudadano argentino o extranjero”, cuando correspondería hablar de “habitante”. La norma constitucional habla de “toda persona”.

— En la definición de usuario de datos, es innecesaria e impropia la expresión “a su arbitrio”.

Artículo 3º: la redacción del artículo es defectuosa. Si se refiere a la formación de archivos, es evidente que será lícita cuando se inscriba debidamente. Si se refiere a la operación del archivo, también es obvio que será lícita si se ajusta a la ley. En ambos casos, una norma semejante es innecesaria.

Artículo 4º: “adecuado” y “pertinente” son sinónimos, y por lo tanto la mención de ambos requisitos es redundante. La norma parece prohibir además la recolección de datos descalificada como “desleal y fraudulenta”, sin definir estos términos. Evidentemente, tal descalificación será adecuada cuando la recolección se realice en forma contraria a los requisitos de la ley, lo que hace innecesarias las menciones anteriores.

Artículo 5º:

— Inciso 1: debe reemplazarse la expresión “otro medio que permita se le equipare”, por “otro medio fehaciente”.

— Inciso 2: las excepciones frente a las cuales el consentimiento es innecesario son demasiado amplias:

a) En lugar de “fuentes accesibles al público”, debería decirse “fuentes de acceso público irrestricto”;

b) la excepción es insostenible, ya que su amplitud (“cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado”) brinda al Estado en forma casi irrestricta la posibilidad de no recabar el consentimiento del titular de los datos.

Artículo 6º: subrepticamente, se introduce la noción de respuestas de carácter “obligatorio”, y de consecuencias de la negativa a responder. La noción es confusa. Si se la vincula con el artículo 6º, parece referirse más bien a datos que pueden ser objeto de tratamiento, y datos que no pueden ser objeto de tratamiento, más que a respuestas “obligatorias” o “facultativas”. Sin embargo, mal pueden preguntarse respecto a datos cuyo tratamiento es prohibido por la ley. La norma no establece consecuencias ni sanciones por el incumplimiento de los requisitos establecidos en ella.

Artículo 7º:

— Inciso 2: amén de prohibir que se obligue a alguien a proporcionar datos sensibles, debe prohibirse también el tratamiento de dichos datos, aunque no se obtengan del titular. La excepción que se establece (“cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley”) es injustificada y peligrosa: la prohibición debe ser absoluta. Si se suma a esta excepción la amplia posibilidad de obtener datos sin el consentimiento del titular, las posibilidades de vulneración del derecho a la intimidad son enormes, y poco habría modificado al respecto la reforma constitucional de 1994.

—Inciso 3: en lugar de “revelen”, debe decirse “revela”, ya que la proposición subordinada califica a “información”. El agregado referido a la Iglesia Católica, asociaciones religiosas y organizaciones políticas y sindicales resulta irrelevante, ya que sin registrar la voluntad de pertenencia de una persona a estas organizaciones, su participación en ellas es imposible. Es evidente que los registros de estas organizaciones no constituyen bancos de datos destinados a proporcionar informes, y, por ende, quedan fuera de las obligaciones impuestas por la ley.

Artículo 9º: no se define el término “desviaciones”, cuyo significado merece ser determinado en el artículo 2º. Son innecesarias además las expresiones “intencionales o no”, y “ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado”. En el inciso 2, en lugar de “No se deben registrar”, debe decirse “no deben registrarse”.

Artículo 10: no se establece quién autorizaría a revelar al obligado del deber de confidencialidad. ¿Se trata de la autoridad administrativa o judicial?

Artículo 11: la regulación de la cesión de datos es defectuosa, y desvirtúa los principios que parece establecer en el primer inciso.

—Inciso 1: poco dice la expresión “los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario”, la cual, además de disponer algo obvio, no establece ninguna limitación, ya que la medida del interés legítimo del cedente y del cesionario será determinada por ellos mismos.

—Inciso 2: donde dice “la cesión de datos a terceros” debe decir “la intención de ceder datos a terceros”, ya que, de lo contrario, el consentimiento requerido llega tarde, es decir, después de producida la cesión.

—Inciso 3: las excepciones a la exigencia del consentimiento del titular de los datos en caso de cesión son amplísimas, y ello desvirtúa absolutamente la importancia del consentimiento. Además, la norma incurre en redundancias. El inciso a) autoriza como excepción los casos en que una ley lo exija, con lo que se da pie al legislador a derogar el requisito cuantas veces quiera. El inciso b) remite al artículo 5º, inciso 2, hecho que, además de ampliar de modo exagerado los supuestos en los que no se exige el consentimiento, supone defectos de técnica legislativa. Como hemos visto, uno de los supuestos del artículo 5º inciso 2) (el b), se refiere a los casos en los que se recaben datos para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, lo que autoriza prácticamente al Estado a no requerir nunca el consentimiento del titular de los datos. Por otro lado, el supuesto d) del artículo 5º inciso 2 (excepción fundada en una relación contractual), repite el contenido del inciso c) de este artículo 6º inciso 3. Del mismo modo, los incisos d) y e) del artículo 6º inciso 3 quedan comprendidos en el ya referido supuesto del artículo 5º inciso 2 b). Por último, los incisos e) y f) del artículo 6º inciso 3 hablan de un proceso de “disociación” de la información, término que debería ser definido en el

artículo 2. En resumen, el establecimiento de excepciones de tal amplitud implica desvirtuar el principio de exigencia del consentimiento de tal modo que prácticamente deja de ser la regla.

Artículo 12:

—Inciso 2 d): parece autorizarse al Estado a adoptar tratados internacionales que permitan la transferencia de datos de carácter internacional hacia países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la Argentina. Lo que debe hacer la norma justamente es vedar esa posibilidad, y no establecer que la firma de tratados contrarios a la protección establecida por la ley prevalecen por sobre ésta.

—Inciso 2 e): este inciso fue agregado a instancias de los representantes de los organismos de inteligencia. La solución es innecesaria y desaconsejada: la posibilidad de cooperación internacional ya estaba prevista en los incisos a) (colaboración judicial internacional) y d) (transferencia de datos prevista en tratados internacionales). Esta nueva variante permite la realización de acuerdos internacionales a los propios organismos de inteligencia, sin las garantías formales que supone la existencia de un tratado internacional o la concreta investigación realizada a partir de una causa judicial.

Artículo 14:

—Inciso 1: la norma habla de los “bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes”. La redacción se presta a confusión: debería hablarse de los “bancos de datos públicos y de los privados destinados a proporcionar informes”, ya que, de acuerdo a la norma constitucional, el derecho de acceso se refiere a todo banco de dato público.

—Inciso 2: en lugar de establecerse que “(e) l requerido deberá asegurarse de la identidad del peticionante”, debe decirse que “(e) l peticionante deberá acreditar su identidad”. Además de ello, si bien en el caso de bancos de datos privados es pertinente la “intimación fehaciente” de la que habla el artículo en el supuesto de bancos de datos públicos dicha exigencia es totalmente innecesaria, ya que basta con la iniciación de la respectiva petición administrativa.

—Inciso 3: es absolutamente injustificado el sujetar el ejercicio del derecho de acceso a condiciones temporales, asignando la carga de demostrar un interés legítimo al peticionante en caso de pretender ejercerlo antes del plazo establecido. El costo o la molestia de repetir el mismo informe es mínimo, y el acceso constante significa una medida de contralor disuasora contra la posibilidad de tratamiento de datos prohibidos u otras irregularidades. Por otro lado, será la propia administración o banco de datos privado el que califique a priori la existencia de un interés legítimo suficiente, hecho que generará controversias judiciales innecesarias.

Artículo 15:

—Inciso 3: la expresión “medios de imagen” es poco ortodoxa, siendo innecesaria su mención dado el carácter genérico de la expresión “u otro idónea a tal fin”.

Artículo 16: la regulación de este artículo es deficiente, sin entenderse claramente cuál es el régimen que establece. No se emplea en el artículo la categoría de datos sensibles (cfr. artículos 2º y 7º), con lo que no queda claro qué datos son susceptibles de supresión (¿todos?). Parece absurdo, por ejemplo, conceder al interesado la posibilidad de suprimir su fecha o lugar de nacimiento.

También se utilizan indistinta y sobreadundantemente los términos "supresión" y "cancelación", sin aclararse si se usan como sinónimos o si se trata de conceptos distintos. Recordemos que el término que emplea la constitución es el de "supresión".

Dada la falta de empleo de la categoría de datos sensibles, se somete a rectificación, actualización o supresión sólo a los datos "erróneos o falsos". Debe agregarse también la posibilidad de supresión de los datos sensibles, que están sujetos a una prohibición de registro (cfr. artículo 7º inciso 2), independientemente de su corrección o verdad.

Con respecto al plazo para el cumplimiento de la obligación, el dictamen final de la Comisión introdujo una modificación que empeora la situación del peticionante. De acuerdo al dictamen anterior, se habilitaba al afectado a entablar la acción de hábeas data ante el incumplimiento de la obligación por parte del responsable del banco de datos en un plazo de quince días desde la intimación fehaciente —solución que criticáramos por innecesaria— en caso de reclamo ante un banco de datos público. La modificación dispone que el afectado puede deducir la acción de hábeas data ante el incumplimiento de la obligación del responsable del banco de datos dentro de los cinco días hábiles de verificado el error o falsedad. Sin embargo, la verificación del error o falsedad queda a cargo del responsable del banco de datos —ya que a él se dirige la intimación—, de modo que el incumplimiento de la verificación por parte del responsable del banco de datos, además de depender de su discrecionalidad, hace que el plazo no comience a correr jamás. Debe preferirse la situación anterior, en la que, al menos, la fecha de intimación fehaciente —o el inicio del reclamo administrativo, de acuerdo a la solución que propugnáramos para el caso de banco de datos públicos— establecía un dato cierto a partir del cual computar el plazo. La verificación del error o falsedad depende del responsable del banco de datos, y no reviste certeza alguna para el peticionante, ya que para ello depende de la comunicación que efectúe el responsable del banco de datos.

El inciso 5 agrava la confusión, ya que se establece que la supresión no procede cuando "pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos". Dicha norma se presta a múltiples críticas. En principio, la supresión de datos sensibles debe proceder en todo caso, independientemente de la consideración de ulteriores razones por el responsable del banco de datos. En segundo término, la fórmula de la excepción es sumamente ambigua, y da lugar a interpretaciones caprichosas. No se entiende cómo puede la supresión afectar los intereses legítimos del afectado,

si quien pide la cancelación es el propio afectado, quien está en mejor posición para decidir cuáles son sus propios intereses que el responsable del banco de datos o un juez. Tampoco parece acertado autorizar al responsable del banco de datos a juzgar sobre la posibilidad de que la supresión cause perjuicios a terceros, como criterio para negarse a la cancelación de datos. Debería exigirse al menos la citación del o de los presuntos terceros afectados. Por último, parece inconcebible la existencia de una obligación de conservar datos; prohibidos, erróneos o falsos. En suma, una deficiente técnica legislativa —falta de definición clara de qué datos pueden suprimirse— hace que se establezcan excepciones que parecen alcanzar a todo dato personal, incluso los sensibles, falsos o consignados erróneamente.

En el inciso 6, es inconveniente permitir al responsable del banco de datos proveer información sujeta a un procedimiento de supresión o rectificación. ¿Cuál puede ser la finalidad de entregar información que se sabe puede ser rectificada o suprimida?

Finalmente, en el inciso 7, donde dice "relaciones contractuales" debe decir "cláusulas" o "disposiciones" contractuales.

Artículo 17: se trata de uno de los artículos más graves de la ley, ya que establece excepciones tan amplias a los derechos de acceso, rectificación o supresión que los desvirtúan totalmente, tornándolos prácticamente inocuos. En principio, cabe destacar que se trata de los casos en los que el ejercicio de los derechos mencionados resulta más importante, es decir, de los casos que dan sentido al ejercicio del derecho: cuestiones vinculadas a la defensa nacional, orden y seguridad públicos, a los que se agregan además la protección de derechos o intereses de terceros. El artículo 43 de la Constitución Nacional no establece distinciones al respecto del tipo de bancos de datos a los que se puede acceder, de modo que la restricción es palmariamente inconstitucional, por constituir una reglamentación irrazonable que altera el ejercicio del derecho, vulnerando el artículo 28 de la norma fundamental. La pretensión de mantener ocultos ciertos datos es propia de los Estados policiales y contrarían el principio de publicidad de los actos gubernamentales característico del estado de derecho, amén de constituir un resabio de la cultura inquisitiva. En todo caso, el sentido de la norma constitucional es clara al respecto: el derecho de acceso a los bancos de datos es amplísimo y la posibilidad de supresión se refiere a los casos de falsedad y discriminación. Mal puede un estado de derecho asumir la pretensión de conservar datos falsos o discriminatorios; por el contrario, de garantizarse el acceso, por más que el interesado legre conocer los datos que se consignan sobre él, no podrá exigir su supresión o rectificación si los mismos son verdaderos y su tratamiento no está prohibido por tratarse de datos sensibles. Además de ello, quien decide que el pedido del interesado debe ser rechazado es el propio responsable del banco de datos: siendo excesivamente laxa la definición del criterio de la excepción, no cabe más que esperar un uso constante de esta facultad, traducida en la desvirtuación absoluta del derecho. Ello implicará nuevamente

una inflación de acciones judiciales innecesarias; con el agravante de que el régimen de la acción de hábeas data establecido por el artículo 39 otorga al responsable del banco de datos la posibilidad de oponerse al envío de la información requerida por el juez, bajo la sola cita de los extremos que hacen aplicable la excepción legal. Como hemos dicho, los "extremos que hacen aplicable la excepción legal" consisten en el sólo encuadramiento del caso por parte del responsable del banco de datos en un supuesto de tal laxitud como la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos o intereses de terceros. Ante este régimen, difícilmente pueda accederse a la información que, paradójicamente, puede ser errónea, falsa o de registro prohibido por tratarse de datos sensibles.

Lo mismo cabe decir sobre la excepción del inciso 2 del artículo, que autoriza la denegación cuando "se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas". Tal excepción es injustificada, no sólo por su amplitud, sino por la falta de vinculación directa del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, que se dirigen a información ya registrada en bancos de datos, es decir, producto de algún tipo de investigación o procedimiento de obtención anterior a la investigación en curso de acuerdo al inciso.

En síntesis, el artículo establece excepciones de tal amplitud, que difícilmente haya casos en los que la autoridad pública no pueda aducirlas para denegar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos.

Artículo 20: amén de los defectos de redacción, la solución que da el artículo es inconveniente, dado que para eludir la disposición legal basta con no mencionar en la motivación de una decisión judicial o acto administrativo el hecho de que está fundada únicamente en el "perfil" del interesado. Por el contrario, la norma debe disponer la prohibición de realización de definiciones de "perfil" o "personalidad" del interesado a través del tratamiento informatizado de datos. Tampoco queda claro qué significa que las decisiones judiciales o actos administrativos "impliquen apreciación o valoración de conductas humanas", expresión de tal latitud que por ejemplo, parece aplicarse a toda decisión judicial. Por último, la norma parece incorporar un nuevo supuesto de nulidad de las sentencias judiciales (cfr. inciso 2), supuesto que merecería un tratamiento legislativo más riguroso.

Artículo 21: se repite la ambigüedad señalada en ocasión de comentar el artículo 14.1. No queda claro si se trata sólo de los bancos de datos privados destinados a proporcionar datos, o si la obligación de registro se impone también sobre los bancos de datos públicos, caso en el cual debe aclararse que no les es aplicable el calificativo "destinados a proporcionar informes" que, de acuerdo a la norma constitucional sólo se refiere a los bancos de datos privados. La norma tampoco acla-

ra qué sucede con los bancos de datos ya existentes, y sobre la necesidad de cumplir con los requisitos del artículo 22 para continuar en funcionamiento.

El inciso 2 i), que establece que el registro de archivos de datos debe comprender, entre la información requerida, la forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de datos, es sobreabundante e inconveniente. Sobreabundante, ya que dichas formas, condiciones y procedimientos surgen de la propia ley; inconveniente, ya que la norma parece autorizar a cada banco de datos a reglamentar por sí el ejercicio de los derechos comentados. A lo sumo, la norma puede exigir que el banco de datos identifique a quién deben dirigirse las peticiones de acceso, rectificación, actualización o supresión.

Artículo 22:

— Inciso 2 d) es innecesaria la disyunción "informatizado o no".

— Inciso 2 g) en lugar de "reclamaciones", debe decirse "reclamos".

Artículo 23:

— Inciso 2: se trata de otra norma que presenta serias falencias. En principio, parece tener como fin fijar límites para el tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales y de inteligencia, estableciendo como requisito la necesidad de la información para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas. Como se ve, los supuestos límites son absolutamente imprecisos: basta con que los organismos citados actúen dentro de sus facultades para que puedan tratar datos personales sin consentimiento de los afectados. La redacción anterior del inciso, aunque pasible de las críticas que efectuamos más abajo, fijaba un criterio más preciso: la prevención "de un peligro real y cierto para la defensa nacional, seguridad pública o para la represión de delitos". La norma dispone además una serie de condiciones que el organismo debe cumplir en tales casos.

A pesar de la intención limitadora del artículo, la norma está destinada a ser poco efectiva. A la laxitud del criterio elegido, se suma el hecho de que será el propio organismo responsable del banco de datos el que decida en el caso concreto cuando se da el supuesto de hecho que lo autoriza a tratar datos personales sin consentimiento del afectado, es decir, que "resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas". A esto se agrega que se trata justamente de aquellos casos en los que, de acuerdo al artículo 17 inciso 1, el responsable del banco de datos puede denegar el acceso al afectado, con lo que mal puede el interesado controlar el cumplimiento de los requisitos por parte del organismo de marras. Más aún, ejercida la acción de hábeas data (amparo especial, según la llama la ley), el responsable del banco de datos puede oponerse al envío de informes al juez (cfr. artículo 39 inciso 2), bajo el argumento de existir una excepción legal, provista justamente por los artículos 17 incisos 1 y 2, y 23 inciso 2. Nótese que el responsable

del banco de datos puede oponerse a enviar los informes requeridos al juez, con los que mal puede el juez controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 23 inciso 2, sin siquiera tener en vista los informes correspondientes. De modo que los requisitos establecidos por el artículo 23 inciso 2 parecen más bien un ilusorio llamado a la autodisciplina por parte de los responsables de bancos de datos, sin mayor control externo. Lo mismo puede decirse de la cancelación ordenada por el artículo 23, inciso 3, que quedará sujeta a la discrecionalidad del propio responsable del banco de datos. En síntesis, la interpretación sistemática de esta norma con los artículos 17 inciso 1 y 39 inciso 2 trae como resultado la facultad incontrolada de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales y de inteligencia de actuar en secreto y decidir por sí qué registros se llevan, sin posibilidad de acceso o rectificación por parte de las personas afectadas. Esta reglamentación es, por ende, inconstitucional, ya que establece excepciones reglamentarias donde la norma constitucional no distingue entre tipos diversos de banco de datos. Como ya hemos dicho, es justamente en estos casos cuando más se justifica el ejercicio de los derechos de acceso, supresión, rectificación y actualización. El presente proyecto frustra completamente el mandato del constituyente.

Artículo 28:

—Inciso 2: donde dice “identificar a persona alguna en particular”, debe decirse “identificar a persona alguna”, o “identificar a ninguna persona en particular”.

Artículos 29 y 30: como dijimos en el comentario general del proyecto de ley, el defecto principal de estos artículos, que regulan el funcionamiento del organismo de control, es el de ser absolutamente insuficientes. La creación de un órgano legal al que se asigna una importante parte del contralor de la actividad de los bancos de datos y en consecuencia un rol fundamental en la defensa de los derechos de los afectados, carece de datos mínimos como ser a qué repartición estatal pertenecerá, quién designa a sus miembros, qué garantías de independencia tendrá, con qué facultades contará para imponer sus decisiones sobre bancos de datos públicos y privados infractores, etcétera. Diferir semejante definición a la reglamentación implica un serio defecto de técnica legislativa y una renuncia por parte del organismo de contralor dependen en última instancia

Nótese además que de una estricta reglamentación del organismo de contralor dependen en última instancia las posibilidades de vigencia de un derecho individual. Esta reglamentación debería entonces realizarla el Congreso, y no delégarla graciosamente.

En particular, tampoco se explica el inciso g), en el que se autoriza al organismo a constituirse en querellante en sede penal ante la violación de la ley. Esto importa una duplicación innecesaria de funciones estatales, ya que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de las acciones públicas previstas por la ley. La figura del querellante tiene sentido cuando, además del interés público representado por el Ministerio Público, existe un interés privado en la aplicación de la ley penal

por parte de un particular damnificado, pero no en casos como éste, en el que el organismo de control también persigue un interés público.

Artículo 31:

—Inciso 1: más allá de la intención del legislador, no queda claro cómo hará el organismo de control para imponer multas, clausurar o cancelar la autorización de bancos de datos públicos.

Artículo 32: debe eliminarse de los incisos 1 y 2 del artículo 117 bis proyectado del Código Penal la expresión “maliciosamente”, innecesaria por tratarse de delitos dolosos. Como se sabe, la prueba de la malicia, un elemento de ánimo, dificulta de modo ostensible la aplicación de la ley penal en estos casos. En el inciso 4 proyectado, es innecesario agregar que se trata de un funcionario público “en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, también debe eliminarse del proyectado artículo 157 bis del Código Penal la expresión “maliciosa e ilegítimamente”, por las razones ya dadas en el caso del término “maliciosamente”, y por ser “ilegítimamente” sobreabundante; ya que de ser legítima la actuación, evidentemente la conducta no será punible por estar justificada.

Artículo 33: en lugar de denominarse la acción regulada “hábeas data” —aunque paradójicamente es el título de la ley y de los diversos antecedentes parlamentarios— se la designa como acción especial de amparo, elección inconveniente por prestarse innecesariamente a confusiones.

—Inciso 1: nuevamente se induce a confusión hablándose de “bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes”, mientras la norma constitucional se refiere a todos los bancos de datos públicos, y, en el caso de ser privados, a los destinados a proporcionar informes. Más grave aún es modificar injustificadamente la economía legislativa del proyecto, refiriéndose a los ya definidos datos sensibles como datos que “tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología”. De acuerdo al artículo 7º, el solo registro de datos sensibles está prohibido, más allá de la intención discriminatoria o no que se le asigne. En esta norma, se endilga al peticionante la carga de probar que la inclusión de dichos datos es discriminatoria, cuando en rigor de verdad es suficiente —y mucho más sencillo— demostrar en forma objetiva la inclusión de datos sensibles —y por ende, de registro prohibido—, frente a las dificultades de probar las intenciones discriminatorias del responsable del archivo.

Artículo 35: la redacción correcta del primer párrafo sería la siguiente: “será competente para entender en esta acción, a elección del actor, el juez de su domicilio, el del domicilio del demandado, o el del lugar en el que el hecho se exteriorice o pudiera tener efecto”.

Artículo 37:

—Inciso 1: es innecesario que el peticionante identifique el nombre del responsable del archivo, bastando con la identificación del archivo.

—Inciso 2: se trata de un requisito particularmente grave, ya que se establece sobre el peticionante la carga de probar extremos innecesarios y peligrosamente indeterminados. El inciso parte de la confusión de dos hipótesis distintas, que son la de ejercicio del derecho de acceso —para el que es suficiente señalar las razones por las cuales el peticionante presume que en un banco de datos obra información referida a su persona—, y los de supresión, actualización o rectificación —casos en los que, obviamente, el peticionante ya conoce el contenido de la información que obra en el archivo, y pretende la modificación de su tratamiento—. De modo que la norma debe establecer una disyunción entre las dos hipótesis: para la primera, basta con alegar fundadamente acerca de la posibilidad de que en un banco de datos obra información personal del peticionante. Para la segunda, en cambio, es necesario demostrar: a) que la información es falsa, b) que la información es inexacta, o c) que se trata de datos sensibles, es decir, de datos de registro prohibido de acuerdo al artículo 7º inciso 1. Para este último caso, constituye una carga excesiva y frustrante el requisito de probar por qué resulta discriminatoria la información, de acuerdo al comentario ya realizado al artículo 33 inciso 1. Mucho peor aún es exigible al peticionante que pruebe “de qué modo se afectan sus derechos”, cuando la propia norma constitucional establece el derecho de acceso, rectificación, supresión, actualización o confidencialidad de los datos personales que obren en bancos de datos. Basta entonces con demostrar, en caso de acceso, la posibilidad de existencia de datos personales en un banco de datos, y, en caso de supresión, rectificación, actualización o confidencialidad, con señalar la existencia de información sensible, falsa o inexacta, que de por sí resulta violatoria del derecho a la intimidad, privacidad, honor y dignidad personal, razón por la cual el constituyente incluyó esta garantía en la Constitución. El propio registro de información sensible, falsa o errónea resulta violatorio de los derechos del afectado. Con respecto al último agregado, que requiere al peticionante “justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley”, además de ser redundante, está redactado de modo confuso e impropio. El artículo 16 inciso 3 ya establece que el incumplimiento por parte del responsable del banco de datos de las obligaciones de facilitar el acceso, suprimir, rectificar, actualizar o someter a confidencialidad la información respectiva, da lugar a la acción de hábeas data, de modo que lo que correspondería establecer simplemente es que el peticionante acredite la presentación del reclamo administrativo o bien la intimación correspondiente, si el banco de datos fuera privado, manifestando la falta de cumplimiento de la obligación por parte del responsable del banco de datos.

Inc. 3: en línea con lo dicho anteriormente, debe hablarse del carácter “sensible” —o bien “prohibido” o “ilícito”— de los datos registrados, y no de su carácter “discriminatorio”, calificación de difícil demostración.

En resumen, la regulación de este artículo establece una carga innecesariamente gravosa sobre la persona del peticionante, que al señalamiento concreto de existencia de datos personales en un banco de datos, o bien

de registro de datos sensibles, inexactos o falsos, debe agregar la producción de prueba innecesaria y compleja. Sería recomendable una modificación profunda de la norma.

Art. 39. — Como ya hemos adelantado, el inciso 2 de este artículo cierra el círculo de indemnidad de los organismos de seguridad, inteligencia y defensa, ya que les permite como defensa oponerse al mero pedido de informes por parte del juez mediante la invocación de excepciones autorizadas en la propia ley o en otra ley específica. De este modo, el juez puede no enterarse jamás de la existencia o del contenido de la información solicitada, aunque éste sea prohibido, falso o erróneo. Lo que corresponde en este caso es la remisión de los informes al juez, para que éste los examine con carácter reservado y sin dar traslado al peticionante. De este modo, el juez puede juzgar convenientemente sobre la corrección de la subsunción del caso particular en la excepción legal por parte del responsable del banco de datos. Huelga reiterar que, a mi criterio, las excepciones legales son demasiado laxas, con lo que, pese a la posibilidad de control judicial más amplio que propugno, el derecho sigue sujeto a disposición discrecional por parte de los organismos mencionados, en contraposición con la norma constitucional. Comentario aparte merece la posibilidad abierta de que cualquier ley establezca excepciones a la posibilidad de acceso y corrección de los datos, hecho que vacía de contenido al precepto constitucional.

Por último, tampoco es justificado conceder la apelación de la resolución judicial que insista en el envío de los datos en ambos efectos, ya que la remisión de la información al juez no implica de por sí el acceso, supresión o modificación de los datos a favor del interesado, sino simplemente la posibilidad de que el juez tome conocimiento de ellos. La apelación debería concederse al solo efecto devolutivo.

Artículo 41.

—Inc. 2: se usan simultáneamente “suprimida” y “cancelada”, cuando se trata de sinónimos, debiendo preferirse el término “suprimida”. Falta mencionar la posibilidad de otorgar a la información carácter confidencial. Donde dice “declararla”, debe decir “declarada”.

Por dichas razones, señor presidente, es que disiento con el presente proyecto de ley.

Pedro G. Villarroel.

ANTECEDENTES

Texto del proyecto presentado por el senador Menem

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos de carácter personal asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, electrónicos o manuales, para garantizar el honor y la inti-

midad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

Art. 2º — *Definiciones.* A los fines de la presente ley se entiende por:

- *Datos de carácter personal:* información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- *Archivo, registro, base o banco de datos:* indistintamente, designa al conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- *Tratamiento de datos:* operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos de carácter personal, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- *Responsable de archivo, registro, base o banco de datos:* persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.
- *Datos informatizados:* los datos de carácter personal sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- *Titular de los datos:* toda persona física, ciudadano argentino o extranjero con residencia legal en el país, o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el mismo, cuyos datos sean objeto del tratamiento de que trata la presente ley.
- *Ficha personal:* contenido de la información de una persona, que permite su identificación y definir sus antecedentes y actividades de cualquier tipo.
- *Usuario de datos:* toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

CAPÍTULO II

Principios relativos a la protección de datos

Art. 3º — *Archivos de datos - Licitud.* La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren legalmente autorizados, observando en su operación los principios que ésta establece y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

Art. 4º — *Calidad de los datos:*

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser lícitos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para las que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos serán exactos y deben actualizarse en el caso que ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser cancelados y sustituidos, o en su caso completados, de oficio cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios y pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recabados.

Art. 5º — *Consentimiento:*

1. El tratamiento de datos de carácter personal es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado en forma conjunta con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, juntamente con las advertencias previstas en el artículo 6º de la presente.
2. No será necesario el consentimiento cuando:
 - a) Los datos se obtengan de fuentes accesibles al público;
 - b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado;
 - c) Deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento.

Art. 6º — *Información.* Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y clara:

- a) La finalidad para la que serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios;
- b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de

que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

- c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente;
- d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos;
- e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos.

Art. 7º — *Categoría de datos:*

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos relativos a sus convicciones religiosas, opiniones políticas, origen racial o comportamiento sexual.
2. Los datos indicados en el apartado anterior sólo pueden ser recabados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley, o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. No pueden formarse archivos, bancos o registros de datos que tengan por finalidad exclusiva el almacenamiento de datos de carácter personal relativos a los aspectos señalados en el punto 1 de este artículo, salvo que hubieren sido suministrados voluntariamente por sus titulares, con pleno conocimiento de su destino y utilización.
4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Art. 8º — *Datos relativos a la salud.* Los hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas y los profesionales vinculados a la ciencia médica pueden recabar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos.

Art. 9º — *Seguridad de los datos:*

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. No se deben registrar datos de carácter personal en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

Art. 10. — *Deber de sigilo:*

1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Art. 11. — *Cesión:*

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
2. La cesión de datos a terceros debe ser comunicada a los titulares en la primera oportunidad en que ello ocurra. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
 - a) Así lo disponga una ley;
 - b) Se trate de datos recogidos de fuentes de acceso público;
 - c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono;
 - d) El establecimiento del archivo responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho fichero con el de terceros. En tal caso la cesión será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justificó;
 - e) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;
 - f) Tratándose de datos personales relativos a la salud, cuando sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos;
 - g) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información de modo que los datos sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Art. 12. — *Transferencia internacional:*

1. Es prohibida la transferencia de datos de carácter personal de ningún tipo con países u

organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección equiparables a los de la República Argentina.

2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
 - a) Colaboración judicial internacional;
 - b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica;
 - c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable.

CAPÍTULO III

Derechos de las titulares de datos

Art. 13. — *Derecho de información:* Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.

Art. 14. — *Derecho de acceso:*

1. El titular tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes. El requerido deberá asegurarse de la identidad del peticionante y cumplir con dicha obligación dentro de los quince días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción especial de amparo prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.

Art. 15. — *Contenido de la información:*

1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen.
2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
3. La información debe suministrarse por escrito.

Art. 16. — *Derecho de rectificación, actualización o cancelación:*

1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, suprimidos o sometidos a

confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos.

2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, cancelación o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de diez días hábiles de verificado el error o falsedad.
3. El incumplimiento de esta obligación dentro de los quince días corridos de la intimación fehaciente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de amparo prevista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro del tercer día hábil de efectuado el tratamiento del dato.
5. La cancelación no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información de que se trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.
7. Los datos de carácter personal deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable o usuarios del banco de datos y el titular de los datos.

Art. 17. — *Excepciones:*

1. Los responsables o usuarios de bancos de datos, pueden denegar el acceso, rectificación o la cancelación en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
2. La información sobre datos de carácter personal también puede ser denegada, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser motivada.

Art. 18. — *Gratuidad.* La rectificación, actualización o cancelación de datos de carácter personal inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

Art. 19. — Impugnación de valoraciones personales:

1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración sobre conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos de carácter personal que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado.
2. Los actos que resulten contrarios a la directiva precedente serán insanablemente nulos.

CAPÍTULO IV**Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos****Art. 20. — Registro de archivos de datos. Inscripción:**

1. Todo archivo, registro, base o banco de datos destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
 - a) Nombre y dirección del responsable;
 - b) Características y finalidad del archivo;
 - c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
 - d) Forma de recolección y actualización de datos;
 - e) Destino de los datos y entidades a los que pueden ser transmitidos;
 - f) Modo de interrelacionar la información registrada;
 - g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
 - h) Tiempo de conservación de los datos;
 - i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
3. Ningún usuario de datos podrá poseer datos de carácter personal de naturaleza distinta a los declarados en el registro.

Art. 21. — Archivos, registros o bancos de datos públicos:

1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, y anotado en el correspondiente registro que a tal fin habilite el organismo de control.
2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:
 - a) Características y finalidad del archivo;

- b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
 - c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
 - d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos de carácter personal que contendrán;
 - e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
 - f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
 - g) Las oficinas ante las que se pud'esen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.
 4. La cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público, no podrá efectuarse a archivos, registros o bancos de datos privados sin el consentimiento del afectado o en virtud de una ley que lo autorice.

Art. 22. — Supuestos especiales:

1. Lo dispuesto en el artículo 20 y en los puntos 1 y 2 del artículo anterior no es aplicable cuando se trate de archivos pertenecientes a la Secretaría de Informaciones del Estado, Policía Federal, Dirección General Impositiva, u otros organismos de seguridad, en la medida necesaria para el cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas, o cuando la ley establezca el secreto de los datos y de su mismo almacenamiento.
2. La obtención y almacenamiento de datos personales para fines policiales y de defensa se limitarán a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para la prevención de la seguridad pública, la defensa nacional o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos deberán ser específicos.
3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

Art. 23. — Archivos, registros o bancos de datos privados. Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 20.

Art. 24. — Prestación de servicios informatizados de datos de carácter personal:

1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos de carácter per-

sonal, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, ni aun para su conservación.

2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien prestan tales servicios, cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

Art. 25. — Prestación de servicios de información crediticia:

1. En la prestación de servicios de información crediticia, sólo pueden tratarse datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente, datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos, se notificará al afectado, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los datos que hubiesen sido incluidos, y se le informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en la presente ley.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos de carácter personal que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos diez años.

Art. 26. — Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad:

1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar información relativa a nombres, ocupación, domicilio y teléfonos, cuando los mismos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso, que comprenderá también los datos que hubieren sido dados de baja y la fuente de donde han sido obtenidos, sin cargo alguno.

3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos de que se trata en el presente artículo.

Art. 27. — Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas:

1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos, no resulta posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna en particular.

CAPÍTULO V

Control

Art. 28. — Órgano de control. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Asistir y asesorar a personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
- b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
- c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
- d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registro o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
- e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que se le requieran;
- f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
- g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la presente ley.

Art. 29. — Códigos de conducta:

1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de

titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos de carácter personal que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley.

2. Dichos códigos deberán ser inscritos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

CAPÍTULO VI

Sanciones

Art. 30. — Sanciones administrativas:

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de usuarios públicos; en cualquier caso, de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), clausura o cancelación de la autorización del archivo, registro o banco de datos.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción.

Art. 31. — Sanciones penales:

1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar maliciosamente datos falsos en un archivo de datos de carácter personal.
2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero maliciosamente información falsa contenida en un archivo de datos de carácter personal.
3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

CAPÍTULO VII

Acción especial de amparo

Art. 32. — Legitimación activa:

1. La acción de amparo especial de protección de los datos personales (o de *habeas data*) proce-

derá para tomar conocimiento de los datos de carácter personal almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, así como también su finalidad y los casos en que se presume la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata y de la inclusión de aquellos que tiendan a discriminar a las personas afectadas por razones de raza, religión, sexo o ideología, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.

2. Podrá ser ejercida por el afectado y sus sucesores por sí o por intermedio de apoderado.
3. Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que designe al efecto.
4. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante del Defensor del Pueblo.

Art. 33. — *Legitimación pasiva*. La acción procederá respecto de los usuarios de datos públicos o privados. En este último supuesto procederá si tuviera la posibilidad de generar y proveer informes.

Art. 34. — *Procedimiento aplicable*. La acción de *habeas data* tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.

Art. 35. — Requisitos de la demanda:

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos, así como el nombre del responsable del mismo. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y de qué modo afecta sus derechos.
3. Al solo efecto de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.

Art. 36. — Trámite:

1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o bancos de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.

2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.

Art. 37. — Confidencialidad de la información:

1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el supuesto en que se afecte el secreto de las fuentes de información periodística.
2. Los archivos, registros o bancos de datos públicos sólo podrán invocar las excepciones autorizadas por la presente ley, o los establecidos en una ley específica. En tales casos deben acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal.

El juez apreciará con criterio restrictivo toda oposición al envío de informes sustentado en tales causales, debiendo expedirse dentro del segundo día de planteada la excepción.

La resolución judicial que insista en la remisión de los datos será apelable dentro del segundo día de notificada. El escrito de apelación será fundado.

3. La apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En el último caso, será elevado el expediente al tribunal de alzada dentro del día de ser concedido.

Art. 38. — Contestación del informe. Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 12 a 14 de la ley.

Art. 39. — Sentencia.

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, cancelada, actualizada o declararla confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.

Art. 40. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo Menem.

**Texto del proyecto presentado por la senadora
Fernández Meijide**

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TITULO I

Legitimación

Artículo 1º — Sujetos de legitimación activa. Están legitimados para iniciar acción de amparo bajo la modalidad del hábeas data todas las personas físicas o jurídicas incluyéndose las previstas en el artículo 33 *in fine* del Código Civil residentes en la República Argentina y los sucesores de las personas físicas sean en línea directa o colaterales hasta el segundo grado por un período de 5 años posteriores a su deceso. Podrán efectuar la presente acción en nombre de sus representados los apoderados con poder general de administración y disposición respecto de sus poderdantes, representantes legales de menores, tutores, curadores o albaceas, afectados por datos referidos a ellos o a sus representados que consten en registros o bancos de datos públicos o privados.

Art. 2º — Sujetos de legitimación pasiva pública. Toda dependencia o ente autárquico del Estado nacional, de los estados provinciales o municipales u organismos vecinales respecto de quienes podrá interponerse la presente acción.

Art. 3º — Sujetos de legitimación pasiva privada. Igualmente podrá interponerse esta acción con relación a todo particular, ya sea persona física o jurídica incluyéndose las previstas en el artículo 33 *in fine* del Código Civil, o los sucesores de las personas físicas hasta el segundo grado en línea directa colaterales que mantengan registros o bancos de datos que hubiesen poseído sus causantes, incluyendo los registros o bancos de datos que posean los medios de comunicación periodísticos en cualquiera de sus archivos, respetándose las garantías de reserva del secreto de la fuente informativa y de libertad de prensa.

TITULO II

Definiciones

Art. 4º — A los fines de la presente ley los términos empleados en ella serán entendidos con el siguiente contenido:

- a) **Datos.** Se entenderá por "datos" la información referente a las personas descriptas por el artículo 1º que sea recopilada de forma manual, mecánica, magnética o por cualquier otro medio creado o a crearse que cumpla los mismos fines, en archivos o bancos de datos;
- b) **Datos personales.** Son aquellos datos individuales sobre circunstancias personales u objetivas de una persona física o jurídica, determinada o determinable, incluyéndose los relativos a domicilios, números telefónicos, casillas de correo

- o similares. Cualquier información referente a una persona identificada o identificable. Asimismo la información sobre las condenas firmes en causas criminales, dentro del período de resguardo legal y archivada por la autoridad competente;
- c) *Datos sensibles*. Se considerarán datos sensibles aquellos datos que siendo de índole personal consistan en información referente a:
1. El origen racial o étnico del titular de los datos.
 2. Sus opiniones políticas, gremiales o creencias religiosas o de otra clase.
 3. Su salud física o mental.
 4. Su vida sexual.
 5. Sus asuntos familiares que no sean relativos a relaciones de parentesco o estado civil, régimen económico y condición de sostén de la familia.
 6. Sus condenas efectivamente cumplidas en causas criminales después de vencido el plazo legal de guarda por la autoridad competente.
 7. Si ha sido objeto de sospecha con relación a un delito o acusada por razón de ese delito no habiendo sido condenada; y
 8. Otros datos que pudieran posibilitar cualquier tipo de discriminación o impedir el libre ejercicio de sus derechos.
- d) *Datos equívocos o de dudosa exactitud*. Son aquellos datos personales cuya exactitud es discutida por el interesado, no pudiéndose demostrar por parte de los legitimarios activos o pasivos la exactitud o inexactitud de dichos datos;
- e) *Datos falsos*. Son aquellos datos personales de los que puede demostrarse su falsedad;
- f) *Archivos*. Son conformados por la acumulación de datos, artículos y todo tipo de documentación, incluyendo los microfilmados, generalmente en originales o copias autenticadas referentes a determinada persona, así como también testimonios filmicos, sonoros, fotográficos o similares;
- g) *Registros*. Son confeccionados en planillas o fichas, figurando testimoniados los datos correspondientes a uno o varios individuos sin poseer en su respaldo documentación integrada al registro. Los registros, así como también los bancos de datos pueden servir de referencia a un archivo;
- h) *Bancos de datos*. Similares a los registros se caracterizan por un grado de sistematización mayor, teniendo varios accesos de búsqueda. Pueden ser manuales o computarizados;
- i) *Modificar*. Todo cambio en el contenido de datos almacenados;

- j) *Suprimir*. Eliminar, destruir, hacer irreconocibles datos almacenados, sea cual fuere el procedimiento idóneo para ello;
- k) *Rectificar*. Reemplazar datos erróneos o de dudosa exactitud o falsos por datos verdaderos;
- l) *Actualizar*. Modificar en los registros o bancos los datos que con el transcurso del tiempo, o por un cambio en las circunstancias, se han convertido en erróneos o falsos;
- m) *Confidencialidad*. Mantener reserva de datos personales *erga omnes*, salvo autorización expresa de las personas con legitimación activa.

Las definiciones contenidas en el presente no deberán entenderse como una enunciación taxativa y en caso de duda respecto de los límites de su contenido deben entenderse en sentido amplio en favor de los derechos tutelados por esta ley, con la única limitación de los derechos y garantías de terceros amparados por la Constitución Nacional.

TITULO III

Derechos tutelados

Art. 5º — A las personas descritas en el artículo 1º de la presente ley se les garantiza el goce de los siguientes derechos:

- a) A ser informado por todo titular o responsable de archivos, registros o banco de datos, si éstos tienen en su poder información de los que aquéllos sean titulares;
- b) A la información y conocimiento de la finalidad principal del uso de los datos;
- c) A la intimidad en materia de datos personales, respecto de la recolección, tratamiento, conservación, utilización y revelación de los mismos;
- d) A la privacidad, honor u otros derechos constitucionales, explícitos o implícitos para la suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos;
- e) A exigir la confidencialidad de sus datos personales, su modificación, rectificación o supresión;
- f) A la eliminación de datos sensibles que permitan cualquier tipo de discriminación;
- g) A que se destruyan los datos personales almacenados cuando el almacenamiento fuere ilícito o cuando desaparecieran los supuestos de hecho originariamente existentes para el almacenamiento.

TITULO IV

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Datos personales

Art. 6º — Los datos personales podrán ser suprimidos cuando la finalidad por la que se almacenan sea dudosa, falsa o extemporánea. Las personas incluidas en

el artículo 1º podrán también solicitar al juez, en su caso, la suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de estos datos.

Art. 7º — Los datos personales deberán ser exactos y cuando sean inexactos o erróneos deberán ser rectificadas o suprimidos. Los datos personales serán eliminados cuando su conocimiento ya no fuere necesario para el cumplimiento de los fines del almacenamiento destruyéndose los mismos a pedido de las personas sujetos de legitimación activa, no existiendo razón para presumir que con la destrucción se perjudique otros intereses dignos de protección.

Art. 8º — No se considerará que datos de índole personal se estén guardando para una o más finalidades específicas y lícitas.

Art. 9º — Los datos personales, sea cual fuere su finalidad o finalidades, no se guardarán por más tiempo que el necesario para el cumplimiento de esas finalidades.

Art. 10. — Los poseedores de archivos, registros y bancos de datos públicos o privados deberán informar de forma fehaciente al titular de los datos personales, y a su pedido, sobre el almacenamiento de los mismos.

Art. 11. — Podrá interponerse la presente acción contra las dependencias, entes o personas referidas en los artículos 2º y 3º para obtener informes respecto del contenido y finalidad de los datos, suprimir, rectificar, exigir su confidencialidad o actualizar los datos que éstos posean para fines de utilización propia o destinada a la transmisión a terceros, a título oneroso o gratuito.

CAPÍTULO II

Datos sensibles. Disposiciones generales

Art. 12. — Los datos sensibles deberán ser eliminados de los registros o bancos de datos sean estos públicos o privados por el mero pedido de la parte interesada cuando no sea esencial a la finalidad por la que se almacenan o cuando sea prohibida su guarda por ley.

TÍTULO V

Responsabilidad

Art. 13. — Serán pasibles de la pena prevista en el artículo 249 del Código Penal aquellos funcionarios que estando bajo su cargo los registros o bancos de datos públicos obstruyan, denieguen, retarden, o incumplan las órdenes judiciales que requieran la información de los datos, su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos o impidan su posterior verificación.

Art. 14. — Serán pasibles de la pena prevista en el artículo 239 o en su caso 275 del Código Penal las personas contenidas en el artículo 3º (*Legitimación pasiva privada*) que estando bajo su cargo los registros o bancos de datos privados utilizarlos para fines propios o ajenos, obstruyan, denieguen, retarden, o incumplan las órdenes judiciales que requieran la información de

los datos, su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos o impida su posterior verificación.

TÍTULO VI

Requisitos previos al inicio de la presente acción

Art. 15. — Las personas sujetas de legitimación activa deberán requerir los informes de forma fehaciente a los legitimarios pasivos sobre la información respecto de su persona o de sus representados contenida en los registros o bancos de datos.

Art. 16. — Los sujetos de legitimación pasiva están obligados a contestar los requerimientos de las personas que solicitan información dentro del plazo de los treinta días dentro de los cuales deberán notificar de forma fehaciente el lugar, día y hora en que se suministrará la información. En caso de no responder al requerimiento dentro del plazo establecido por el presente artículo, se considerará por denegada la información solicitada.

Art. 17. — Las personas que sean legitimarias activas podrán exigir del mismo modo en que se les suministre la información, la exhibición de la documentación original, podrán retirar copias que le serán provistas y certificadas por las personas de legitimación pasiva respecto de la información suministrada y de la documentación original.

Las copias deberán ser selladas en cada una de sus hojas con un sello que identifique la dependencia, ente o personas que sean sujetos de legitimación pasiva privada.

Art. 18. — Si los sujetos legitimados pasivamente no contestaren al requerimiento en el plazo de los treinta días, se negasen al cumplimiento de los requisitos del artículo anterior o resultase verosímil la inexactitud, falsedad u ocultamiento de datos, las personas referidas en el artículo 1º de la presente ley podrán solicitar la acción de amparo con la modalidad del hábeas data una vez vencido dicho plazo.

Art. 19. — Cuando prima facie los datos fueran erróneos, inexactos o falsos, el juez deberá ordenar la suspensión de los mismos a pedido de parte, bajo el procedimiento de medida cautelar.

Art. 20. — En los casos que revista urgencia la tramitación de la presente acción como consecuencia del daño inminente o efectivo que pudiera provocarse al accionante, el juez deberá evaluar la situación invocada, concediendo el recurso sin la existencia del trámite previo.

Art. 21. — *Requisitos de la demanda.* La acción debe ser interpuesta por escrito, procurando individualizarse con la mayor precisión los datos que refieran al registro o banco de datos, específicamente en lo que refieran a su domicilio, nombre o nombres de los encargados del mismo. De solicitar informes a registros o bancos públicos, deberá tratar de individualizarse la dependencia, organismo o ente a que se refiera, o de la que dependan individualizando en lo posible a su titular o algún superior jerárquico de quien dependa.

Art. 22. — *Razonabilidad de la petición.* Bastará que el accionante alegue razones por las cuales entiende que el registro o banco de datos obre información referente a su persona, para que el juez evalúe la razonabilidad con criterio amplio y en consecuencia otorgue la admisibilidad de la acción al solo efecto de poder requerir la información.

Art. 23. — El contenido de la información exigida a las personas de legitimación pasiva será puesta en conocimiento del juez interviniente, en forma escrita entregada en sobre cerrado, quien lo revelará al accionante.

Art. 24. — El procedimiento para activar la garantía asegurada por la presente ley, contra el accionar de un sujeto de legitimación pasiva pública se regirá por la ley 16.986, en todo lo no previsto en la presente ley.

Art. 25. — El procedimiento para activar la garantía asegurada por la presente ley, contra el accionar de un sujeto de legitimación pasiva privada se regirá por el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meijide.

**Texto del proyecto presentado
por el senador López**

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto

Artículo 1º — La presente ley rige el funcionamiento de todos aquellos registros y/o centros y/o bancos de datos públicos o privados destinados a suministrar informes a terceros, sea que cuenten con ficheros, catálogos, archivos en general, automatizados o no, en los cuales se almacenen datos personales que puedan recuperarse, excepto cuando se llevaran exclusivamente con fines de uso individual.

Art. 2º — A los fines de la presente ley se entenderá por dato toda aquella información, acerca de las personas, que sea susceptible de ser registrada y puesta en relación directa o indirecta con individuos determinados.

CAPÍTULO II

De la recolección y elaboración de datos

Art. 3º — La recolección, elaboración y registro de datos personales debe sujetarse a los siguientes requisitos:

- a) Los datos no deberán recolectarse por medios ilícitos;
- b) Sólo podrán registrarse datos personales para fines determinados y legítimos, y su uso quedar limitado a esos fines;

c) Los datos deberán ser exactos, actuales y adecuados al fin para el que fueron registrados y no podrán conservarse por un plazo superior al necesario para cumplir con dicho fin;

d) Que la expresamente prohibido recolectar y conservar datos personales que directa o indirectamente revelen el origen racial, las convicciones, en especial las políticas y religiosas, el comportamiento sexual o el uso de estupefacientes, y los que se refieran a la comisión de delitos y a procesos o condenas criminales. En este último caso queda expresamente exceptuado el Registro Nacional de Reincidencias.

TÍTULO II

De los registros de datos

CAPÍTULO I

De la responsabilidad

Art. 4º — Quienes recolecten, elaboren o almacenen datos personales, son directamente responsables de los daños ocasionados, cuando la recolección y elaboración de datos no se ajuste a los términos prescritos en la presente ley.

Quedan por ese solo hecho obligados, para con las personas afectadas a adoptar las medidas adecuadas para evitar su destrucción o pérdida accidental y la difusión no autorizada de los mismos.

CAPÍTULO II

De las condiciones

Art. 5º — Los registros y/o bancos de datos privados destinados a proveer informes, deberán estar inscriptos en el registro especial que al efecto levantara la Comisión Nacional de Datos, como asimismo otorgar las garantías patrimoniales que la misma determine.

Art. 6º — Los registros y/o bancos de datos públicos sólo podrán llevar registro de aquellos datos personales que guarden estrecha relación con la consecución de los fines para los que han sido creados.

CAPÍTULO III

De las obligaciones

Art. 7º — Los registros y/o bancos de datos públicos y los privados destinados a proveer informes, deben notificar de modo fehaciente a las personas cuyos datos fueron recolectados por primera vez, salvo que se tratara de datos básicos o que estuviesen publicados en un registro público.

Art. 8º — La información contenida en los registros de datos personales deberá ser completada y corregida aun sin petición del particular interesado, cuando el responsable de los mismos tuviere conocimiento de que algún dato registrado no fuese exacto o estuviese incompleto.

Art. 9º — En toda recolección de datos personales deberá informarse a las personas que sean requeridas si la información es solicitada con carácter obligatorio o voluntario, las consecuencias de la falta de respuesta, el destino de los datos y la existencia del derecho de acceso, rectificación y/o ampliación de los mismos, la norma no se aplicará para el caso de infracciones, o delitos de cualquier índole, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

TÍTULO III

De la Comisión Nacional de Datos

CAPÍTULO I

Integración

Art. 10. — Créase la Comisión Nacional de Datos Personales, como organismo autónomo, integrada de la siguiente forma:

- a) Un miembro elegido por la Cámara de Diputados de la Nación;
- b) Un miembro elegido por el Senado de la Nación;
- c) Un miembro elegido por el Poder Ejecutivo nacional;
- d) Un miembro elegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación con rango no inferior a juez de cámara;
- e) Un miembro de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas elegido por su titular.

La comisión funcionará con fondos asignados en la Ley de Presupuesto de la Nación, con cargo al Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO II

Funciones

Art. 11. — Son funciones de la comisión:

- a) Dictar su propio reglamento;
- b) Llevar el registro de todos los bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes existentes en el país;
- c) Determinar los requisitos y garantías que deberán reunir los registros y/o centros y/o bancos de datos privados destinados a suministrar informes para obtener la correspondiente inscripción;
- d) Observar la aplicación de la presente ley, para lo cual ante la petición de cualquier interesado, un miembro de la comisión verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º.

En su caso la comisión dispondrá que el banco de datos correspondiente efectúe las rectificaciones que fueren necesarias informando al interesado si se ha procedido o no a la rectificación dentro de los plazos que determine la reglamentación.

CAPÍTULO III

Sanciones y recursos

Art. 12. — En caso de incumplimiento por parte de los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes de las medidas dispuestas en el artículo anterior, la comisión estará facultada a aplicar sanciones las que podrán consistir en:

- a) Apercibimiento;
- b) Multa;
- c) Revocación de la autorización para funcionar.

Art. 13. — Las resoluciones de la comisión podrán ser apeladas dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de que han sido notificadas por ante la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda.

En la Capital Federal, será competente la justicia nacional en lo Contencioso Administrativo.

TÍTULO IV

Derechos de los particulares

Art. 14. — Toda persona que acredite su identidad, tiene derecho frente al titular de un registro de datos personales a:

- a) Conocer los fines del registro;
- b) Ser informado en un plazo de 48 horas y de manera inteligible acerca de cualquier dato que le concierna;
- c) Oponerse al registro de cualquier dato relativo a su persona;
- d) Obtener respuesta escrita a las peticiones relativas a los incisos precedentes.

Art. 15. — Cuando la información contenga datos falsos y/o discriminatorios, el solicitante podrá requerir al registro su supresión, rectificación, ampliación, o bien la confidencialidad de los mismos, en el plazo perentorio de 48 horas.

Vencido éste sin haber obtenido respuesta deberá efectuar la pertinente denuncia por ante la Comisión Nacional de Datos a efectos que ésta tome intervención en los términos previstos en los artículos 11, inciso d) y 12.

TÍTULO V

Acción de hábeas data

Art. 16. — *Procedencia.* La acción de *hábeas data* es una garantía constitucional que se ejerce a través de un procedimiento de excepción. Procederá siempre que se proba haber cumplido con lo prescrito en el artículo anterior.

Art. 17. — *Organo judicial competente.* Será competente el juez del lugar en el que el acto u omisión se exteriorizase o pudiere tener efecto.

Deberán entender los jueces federales cuando la acción de *hábeas data* procediere contra un registro y/o

entro y/o banco de datos públicos, en la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Art. 18. — *Legitimación activa.* Estarán legitimados para interponer la acción de *habeas data* a que se refiere el apartado 3º del artículo 43 de la Constitución Nacional; toda persona física o jurídica, que haya sido afectada de manera personal y directa.

Art. 19. — *Trámite.* La acción de *habeas data* tramitará por las disposiciones del juicio sumarísimo contempladas en el artículo 498 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación.

Art. 20. — *Sentencia. Alcances.* Contestada la demanda y producida en su caso la prueba, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro del tercer día. En la misma, de admitirse la demanda, el juez especificará concretamente, si correspondieren, la conducta a seguir por el accionado, fijando para ello un plazo de cumplimiento, como requisito de validez de pronunciamiento.

TITULO VI

Disposiciones generales

Art. 21. — Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los datos personales con fines estadísticos o de investigación científica, siempre que no haya riesgo de perjuicio a la vida privada de las personas interesadas y los resultados sean presentados sin identificación de personas determinadas.

Art. 22. — Tampoco serán aplicables cuando se afectare el secreto de las fuentes de información periodística.

Art. 23. — Los bancos de datos públicos se podrán negar a revelar información existentes en sus archivos en los siguientes casos:

- a) Cuando haya sido suministrada en forma confidencial por el gobierno de otro país o por una organización internacional de derecho público legalmente reconocida. Sólo podrá revelarse la información si tales entes dieran su consentimiento;
- b) Cuando la información pudiera ser lesiva para la conducción de las negociaciones diplomáticas de la Nación Argentina, la defensa nacional o la investigación y prevención de actividades criminales o favoreciere la realización de actos hostiles contra los intereses argentinos en el exterior;
- c) Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio para el que recibe la información.

Art. 24. — Sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de esta ley, la Comisión Nacional de Datos

deberá autorizar en cada caso en particular, la transferencia de determinada categoría de datos personales al exterior, siempre que el país de destino de los mismos conceda una protección equivalente a la prevista en esta ley.

Art. 25. — Invítase a las provincias a adherir a lo dispuesto en esta ley en relación con los archivos dependientes de las entidades públicas de su jurisdicción.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alcides H. López.

Texto del proyecto presentado
por el senador Berhongaray

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas

Artículo 1º — La presente ley tiene por finalidad la preservación de los derechos de los particulares en relación al almacenamiento, transmisión, modificación y destrucción de datos.

Tendrá carácter de convenio, en todo cuanto concierne al establecimiento de procedimientos y órganos fuera de la jurisdicción nacional, con la finalidad de asegurar el modo eficaz goce de los derechos y garantías reconocidos en la presente a los particulares, en todo el territorio nacional.

Art. 2º — Establécese que ninguna decisión judicial que implique apreciación sobre una conducta humana podrá estar fundada exclusivamente en un tratamiento computarizado de informaciones que suministren una definición del perfil o de la personalidad del afectado.

Asimismo, ninguna resolución administrativa o privada que implique valoración sobre conductas humanas podrá tener por fundamento único un tratamiento computarizado de informaciones que suministren una definición del perfil o de la personalidad del interesado.

Art. 3º — A los fines de la presente ley, se asigna a los términos más abajo mencionados, el significado que a continuación se expresa:

1. *Datos de índole personal.* Cualquier información concerniente a personas físicas determinadas determinables.
2. *Almacenamiento.* La obtención, toma o custodia en su soporte, de datos, con miras a su posterior utilización.
3. *Transmisión.* Dar a conocer datos almacenados u obtenidos de modo directo, ya sea que los datos sean suministrados por la entidad almacenadora o bien puestos a disposición de otros.
4. *Disociación.* Procedimiento consistente en tornar datos no vinculables a persona o entidad alguna.
5. *Entidad almacenadora.* Toda persona física o jurídica que almacene datos por sí, o los haga almacenar por terceros;

6. *Fichero de datos.* Conjunto organizado de datos de carácter personal.
7. *Tratamiento de datos.* Operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la obtención, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo o cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
8. *Registro de datos.* Inclusión de datos en un fichero de datos de carácter personal.
9. *Cesión de datos.* Transferencia a terceros de un fichero de datos de carácter personal, o de un conjunto de datos de esa índole.
10. *Comunicación de datos.* Puesta en conocimiento de una persona o personas determinadas, de uno o más datos de carácter personal.
11. *Difusión de datos.* Posibilitar del acceso o puesta en conocimiento de un número no determinado de personas, de datos de carácter personal.
12. *Responsable del fichero.* Persona física, técnicamente idónea, que asuma la responsabilidad de asegurar, respecto de determinados ficheros de datos, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y sus normas complementarias, en las operaciones de obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión de datos, que sean efectuadas por la persona o entidad a quien pertenezca el fichero de datos, o por encargo de la misma.
13. *Titular del fichero de datos.* Persona física o representante legal de la entidad a quien pertenezca un fichero de datos de carácter personal.
14. *Afectado.* Persona física titular de los datos que sean objeto de obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión.

Art. 4º — Integran el ámbito de aplicación de la presente ley, todos los datos de carácter personal que fueren almacenados en ficheros de datos, o de cualquier otra forma, modificados, transmitidos o destruidos por cualquier medio, automatizado o no, poseídos o utilizados por sujetos públicos o privados, para cualquier finalidad propia o ajena, excepción hecha de los referidos en el artículo siguiente.

Art. 5º — No se encuentran comprendidos en la presente ley, los siguientes ficheros de datos:

1. Los ficheros de datos mantenidos por personas físicas con fines de exclusivo uso personal, en tanto continúen en tal situación y sus datos no sean comunicados, cedidos, transmitidos ni difundidos en forma alguna, ni se realicen aprestos o tentativas para hacerlo.
2. Los ficheros de datos que exclusivamente reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales.
3. Los ficheros de informática jurídica accesibles al público, en la medida en que se limiten a

reproducir disposiciones o resoluciones judiciales publicadas en periódicos o repertorios oficiales.

4. Los ficheros mantenidos por los partidos políticos y entidades sindicales y religiosas, en cuanto los datos se refieran a sus asociados y miembros actuales o anteriores, y no sean cedidos, transmitidos, comunicados ni difundidos a terceros.
5. Los ficheros mantenidos por periodistas u órganos periodísticos y dedicados a la función periodística, en tanto no sean empleados para otra función, y sus datos no sean cedidos, transmitidos, comunicados ni difundidos a terceros distintos de los titulares y personal a su cargo, o del público a través del medio periodístico titular o de otros pertenecientes a la misma persona o entidad.

Art. 6º — Se regirán por sus disposiciones específicas y, supletoriamente, por lo establecido en la presente ley, los siguientes ficheros de datos:

1. Los regulados por la legislación electoral.
2. Los correspondientes al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y al Registro de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcearia.
3. Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos.
4. Los ficheros elaborados por las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y organismos de inteligencia, relativos a sus miembros.

TITULO II

De la protección de los datos

Art. 7º — La obtención de datos de carácter personal para su inclusión en ficheros de datos, así como su posterior tratamiento, sólo podrá tener lugar para el exclusivo cumplimiento de finalidades legítimas, y siempre que los mismos y su tratamiento sean adecuados, pertinentes y necesarios para el cumplimiento de tales finalidades, cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en la presente ley.

Deberán ser exactos y estar permanentemente actualizados, de suerte de responder con veracidad a la situación actual del afectado.

Serán almacenados de forma de permitir el ejercicio del derecho de acceso por parte de los interesados.

Art. 8º — Deberán ser cancelados los datos de carácter personal contenidos en ficheros de datos:

1. Cuando hayan dejado de ser adecuados, pertinentes y necesarios para la finalidad que determinó su obtención. En este supuesto sólo podrán ser conservados, en caso que adopten una forma que impida la identificación de los afectados; o bien si poseyeran valor histórico conforme lo disponga la legislación específica, y no se lesionaren derechos de aquéllos.

2. Cuando se demostrara su carácter inexacto en todo o en parte o incompleto, salvo que fueran actualizados o completados, según el caso.
3. Se declararán no accesibles los datos de carácter personal cuando el interesado impugne su exactitud y no fuere posible determinarla, en tanto tal imposibilidad subsista.

Art. 9º — Queda prohibida la obtención de datos por medios fraudulentos, subrepticios o contrarios a las normas en vigencia al momento de la obtención.

Art. 10. — Quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, no podrán aplicar o utilizar los datos obtenidos a un fin distinto del que figure en el respectivo contrato de servicios, ni cederlos a otras personas.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que permanecieran en poder de quien suministrara datos deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios, por presumirse razonablemente la posibilidad de continuación posterior de la prestación. En tal supuesto, podrán almacenarse los datos con las debidas condiciones de seguridad por un período de tres años.

TITULO III

De los derechos de los afectados

Art. 11. — Constituirán derechos de los afectados:

1. Recibir información, de un modo expreso, preciso e inequívoco, sobre la existencia de un fichero de datos conteniendo datos de carácter personal relativos a ellos, así como sobre la finalidad de la obtención de los datos, y sobre los destinatarios de la información.

2. Acceder a sus datos personales que se encuentren en ficheros de datos, siendo informado sobre la finalidad del registro de tales datos.

El acceso podrá consistir en la consulta visual de los datos, o bien en su reproducción escrita, copia magnética o fotocopia, a elección del afectado.

El mismo, y la información referida, deberá otorgarse por el titular o responsable del fichero de datos, dentro de los diez días de ser requerido fehacientemente a hacerlo.

3. Recibir información, del modo indicado en el inciso 10.1, en oportunidad de ser solicitados datos de carácter personal, acerca de:

a) La existencia, en su caso, de un fichero de datos de carácter personal al que los datos que se les requieren están destinados, de la finalidad de la obtención de datos y de los destinatarios de la información;

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta, y, en el primer supuesto, de las normas jurídicas en que se funda la obliga-

toriedad, en su caso, o de tratarse de solicitud formulada en el marco de una relación contractual o laboral, de las consecuencias de su negativa a suministrarlos;

- c) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación; y de la identidad y domicilio del responsable del fichero;

- d) También deberán ser informados los afectados la primera vez que se almacenen datos personales referentes a sus personas, a menos que ya hubieren tenido conocimiento de ello por otro conducto.

Podrán los afectados en tal caso pedir información sobre los datos almacenados acerca de ellos.

Si los datos fueren objeto de transmisión regular a terceros, podrá el afectado requerir nombre y domicilio de las personas y las entidades que fueran destinatarios de la misma.

Se exceptuarán de la aplicación del presente inciso, aquellos supuestos en los cuales los datos personales en cuestión hubiesen sido obtenidos directamente de fuentes de acceso general.

4. A la corrección o actualización de los datos almacenados sobre ellos mismos, cuando fueren inexactos o desactualizados.

Dentro de los treinta días de formulada una solicitud fehacientemente en tal sentido por el afectado, el titular o responsable del fichero de datos deberá proceder a corregir o actualizar según los casos los datos personales del solicitante.

En el supuesto de no poder determinarse la inexactitud o desactualización de los datos personales de que se tratare, el titular o responsable del fichero de datos deberá tornar inaccesibles los mismos, con comunicación al afectado, por el término de noventa días, en que deberá aquél promover la correspondiente acción judicial.

5. A la destrucción de los datos almacenados acerca de ellos mismos, de oficio o dentro de los diez días de la solicitud fehaciente en tal sentido formulada por el afectado, cuando hubieran desaparecido los supuestos de hecho originariamente existentes para el almacenamiento, cuando el almacenamiento fuere ilícito o, en los restantes supuestos contemplados en el artículo 8º, salvo que fueran sometidos a un tratamiento de disociación.

La cancelación no procederá cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación de conservar los datos.

En el supuesto en que los datos que deban rectificarse o cancelarse hayan sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá no-

tificar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario.

Ante el incumplimiento, por negativa o silencio, de las obligaciones que impone el presente artículo a los titulares y responsables de ficheros de datos, los afectados podrán ocurrir ante el defensor del pueblo de la Nación, o ante el órgano que designe o cree cada provincia, pudiendo además ejercitar las vías recursivas previstas en el artículo 28, o bien deducir acción de amparo, conforme prevé en este último caso el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, invocando las circunstancias a que se alude en los casos previstos en el artículo 52 de la presente.

Art. 12. — La obtención, tratamiento, registro, cesión, comunicación y difusión de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento del afectado, salvo disposición legal en contrario.

Dicho consentimiento deberá otorgarse por escrito, pudiendo comprender todas las etapas antes citadas.

No será necesario el consentimiento del afectado:

- a) Cuando los datos de carácter personal fueran obtenidos de fuentes accesibles al público;
- b) Cuando fueran obtenidos por órganos estatales en ejercicio de sus competencias, y se cumpliera lo establecido en la presente ley, y en las normas modificatorias y complementarias de la misma, respecto de tales órganos;
- c) Cuando se refieran a personas vinculadas al titular del fichero de datos al que están destinados, por una relación contractual o laboral, y fueren necesarios para el adecuado cumplimiento de la aludida relación; siempre que en ello fueran respetados los límites y modalidades establecidos en la presente.

Art. 13. — No podrá exigirse al afectado el suministro de datos de carácter personal sobre sus ideas en materia política o social, sobre su afiliación o ideas en materia sindical, así como sobre sus creencias religiosas.

El tratamiento de datos de la índole referida sólo podrá tener lugar previo consentimiento expreso y por escrito del afectado, que deberá ser advertido de su derecho a negarse.

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser requeridos, tratados, registrados, comunicados, y difundidos, transmitidos o cedidos, cuando por razones de interés general así lo dispusiera una ley, o bien cuando el afectado lo consintiera expresamente.

Queda prohibida la formación y existencia de ficheros de datos creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen ideas y legítima participación en materia política y sindical, creencias religiosas, origen racial o vida sexual.

Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, así como los relativos a la salud, sólo podrán ser incluidos en los ficheros de datos de los organismos públicos competen-

tes para ello, en los casos en los que así lo autorizan las normas que reglan el accionar de los mismos, y sujetos a los límites y modalidades establecidos en la presente ley.

Art. 14. — Queda prohibida a los titulares o a los responsables de ficheros de datos, o a quienes intervengan en cualquier etapa del tratamiento de datos, toda revelación, autorización de acceso a terceras personas o utilización alguna de datos de índole personal, para finalidad diversa a aquella que determinó la creación del fichero, y que fuera denunciada oportunamente.

Dichas personas deberán guardar secreto respecto de los datos, así como proteger dicho secreto. Tales obligaciones subsistirán incluso después de finalizada su actividad.

Art. 15. — Los titulares o responsables de ficheros de datos, o bien quienes por encargo o bajo dependencia de los mismos realizaren tratamiento de datos de índole personal, deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas indispensables para asegurar la observancia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá tales medidas en la reglamentación de la misma, debiendo actualizarlas conforme a la evolución que experimente la técnica.

Sin perjuicio de lo normado precedentemente, establece que tales medidas deberán incluir:

1. Impedir a personas extrañas el acceso a las instalaciones en las que se encuentren ficheros de datos, o en las cuales se esté efectuando tratamiento de datos (control de acceso).
2. Impedir a toda persona ocupada en el tratamiento de datos personales que se lleve consigo los soportes de esos datos (control de salida).
3. Impedir el acceso no autorizado al dispositivo almacenador, así como el conocimiento, modificación o destrucción no autorizados de datos personales almacenados (control de almacenador).
4. Impedir la utilización, por personas no autorizadas, de sistemas de tratamiento de datos desde los cuales o a los cuales se transmitan datos de índole personal (control de utilización).
5. Garantizar que las personas habilitadas para la utilización de un sistema determinado de tratamiento de datos por conducto de establecimientos independientes, sólo puedan tener acceso a los datos personales comprendidos en su ámbito de habilitación (control de acceso a datos).
6. Asegurar que se pueda comprobar y determinar a qué entidades se pueden transmitir datos de índole personal, directamente o por conducto de institutos independientes (control de transmisión).
7. Asegurar que se pueda comprobar y determinar con posterioridad qué datos de índole personal y en qué momento y por quién han sido introducidos en los sistemas de tratamiento de datos (control de introducción).

8. Asegurar que determinados datos de índole personal que se están tratando por encargo, sólo pueden tratarse informáticamente conforme a las instrucciones del mandante (control de encargos).
9. Asegurar que en la transmisión de datos de índole personal, así como en el transporte de los soportes correspondientes de datos, éstos no pueden ser leídos, modificados ni destruidos por persona no autorizada (control de transporte).
10. Conformar la organización interna jerárquica y funcional de las empresas o entidades que sean titulares de ficheros de datos, de tal modo que responda a las exigencias especiales de la protección de datos (control de organización).

Art. 16. — Los datos de carácter personal que sean o que vayan a ser objeto de tratamiento, sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento expreso y por escrito del afectado, quien deberá tener conocimiento concreto de la identidad del cesionario.

El cesionario quedará por el hecho de la cesión, plenamente obligado al cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

No será necesario el consentimiento precedentemente aludido:

- a) Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes accesibles al público;
- b) Cuando el establecimiento del fichero de datos responda a la existencia de una relación jurídica libremente aceptada que implique necesariamente la conexión de dicho fichero con ficheros de terceros, siempre que la cesión se limite a la finalidad que la justifique, y el afectado haya sido oportunamente advertido de la existencia de la mentada relación jurídica;
- c) Cuando la cesión sea efectuada a un órgano judicial, o al ministerio público, para el cumplimiento de las funciones atribuidas a los mismos;
- d) Cuando se trate de datos de carácter personal relativos a salud y su cesión sea efectuada para enfrentar una grave urgencia sanitaria determinada por la autoridad competente;
- e) Cuando exista disposición legal que autorice la cesión.

El consentimiento en cuestión será revocable.

Art. 17. — Los datos de índole personal que estén sujetos a secretos o reserva establecidos por ley o reglamento, y que hayan sido transmitidos por la persona obligada al secreto o reserva, en el desempeño de su deber profesional u oficial, no podrán ser retransmitidos por el receptor.

Art. 18. — No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal, con destino a países que no proporcionan un nivel de protección de datos comparable al otorgado por esta ley.

Exceptuánse aquellos supuestos en los cuales el defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que designe o cree cada provincia autorice la transferencia, lo que sólo podrá efectuarse en el supuesto en que los destinatarios brinden adecuadas garantías.

También serán exceptuados de la aplicación de esta disposición, quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

- a) En aquellos supuestos en los cuales la transferencia haya sido dispuesta en el marco de tratados internacionales en los cuales la Argentina sea parte;
- b) Cuando la transferencia se efectúe con la exclusiva finalidad de prestar cooperación judicial internacional;
- c) Cuando tenga por objeto el intercambio de datos de carácter médico entre facultativos o instituciones sanitarias, cuando lo requiriera el tratamiento del afectado, o la prevención o lucha contra epidemias;
- d) Cuando se tratara de transferencias financieras, siempre que se diera cumplimiento a la legislación vigente a este respecto.

Art. 19. — Las personas o entidades públicas o privadas que posean y administren ficheros de datos de carácter personal o que efectúen para terceros obtención o tratamiento de datos de ese carácter, deberán, dentro de los diez días del comienzo de su actividad, designar por escrito un responsable de la protección de datos.

Podrá ser designado en tal carácter exclusivamente quien posea para el desempeño de su misión, adecuados conocimientos, y que no posea antecedentes penales.

La designación deberá ser efectuada dentro de los diez días de establecido un fichero de datos de carácter personal.

Deberá ser notificada fehacientemente al defensor del pueblo de la Nación, o, en jurisdicción provincial, al órgano que designe o cree cada provincia.

El responsable de la protección de datos poseerá en relación a la persona física o a los directores y administradores de la entidad privada propietaria del fichero de datos que se trate, plena autonomía técnica, no pudiendo ser objeto de instrucciones en la materia.

Art. 20. — El responsable de la protección de datos tendrá por misión asegurar respecto del o los ficheros de carácter personal en que ostente tal carácter, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, así como en otras disposiciones sobre protección de datos.

Mantendrá comunicación con el defensor del pueblo de la Nación, o bien con el órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, con quien deberá evacuar todas las dudas que se le presentaren y de quien recibirá instrucciones en todos los aspectos relativos a la protección de datos.

Además, deberá:

1. Llevar un libro especial del que surjan la clase de los datos personales almacenados, el objeto del fichero de datos de que se trata, el objeto de las actividades de la persona física o bien el objeto de la entidad que lo posee, así como sus

receptores habituales y sobre la clase de las instalaciones automatizadas de tratamiento de datos, en su caso.

2. Supervisar la aplicación correcta de los programas de tratamiento de datos con cuya ayuda se hayan de tratar informáticamente los datos personales, en su caso.
3. Intervenir con su asesoramiento en la selección de las personas que hayan de ocuparse de tratar informáticamente datos de índole personal.
4. Instruir a las personas aludidas precedentemente sobre los preceptos de la presente ley, así como sobre otras disposiciones en materia de protección de datos.

TÍTULO IV

De los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública

Art. 21. — La creación, modificación o supresión de ficheros de datos propiedad total o mayoritariamente del Estado nacional, de las provincias, municipios, y sus entes descentralizados, deberá efectuarse a través de ley, reglamento o acto administrativo publicado en el Boletín Oficial, o en el órgano de publicaciones oficiales de las provincias respectivas.

Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros de datos deberán contener:

- a) Finalidad del fichero de datos, y usos previstos para el mismo;
- b) Personas o categorías de personas sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal;
- c) Procedimiento de obtención de los datos de índole personal y obligación, en su caso, de las personas a suministrarlos.
- d) Estructura básica del fichero de datos, y descripción de los datos a ser incluidos en el mismo;
- e) Responsable del fichero de datos;
- f) Organos y sede de los mismos, ante los cuales podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación;
- g) Las cesiones o transmisiones de datos de carácter personal que se prevea realizar, en sus casos; así como nombre y domicilio de los entes a los cuales los entes almacenadores envíen regularmente datos de índole personal, y categoría de los datos que se han de transmitir.

En las disposiciones que se dicten para la supresión de ficheros de datos se establecerá el destino de los mismos, o, en su caso, los procedimientos que se adopten para su destrucción.

Sólo podrán crearse o modificarse ficheros de datos de carácter personal por parte de los entes previstos en este título, cuando ello fuere necesario para el regular cumplimiento de las funciones que integran la competencia de la entidad almacenadora.

La disposición deberá asimismo notificarse al defensor del pueblo de la Nación, o al órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, con miras a la inclusión del fichero en el Registro de Ficheros de Datos de Carácter Personal, conteniendo las indicaciones cuya publicación es requerida.

Art. 22. — Serán exceptuados de la publicación prevista en el artículo anterior:

1. El Ministerio de Defensa y a las fuerzas armadas, en el supuesto en que dicha publicación pueda afectar gravemente a la defensa nacional.
2. Los organismos de inteligencia, en el caso en que tal publicación pudiere afectar gravemente a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado.
3. Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, si la publicación pudiere afectar gravemente la defensa nacional o la seguridad interior, así como la seguridad interior en las provincias.
4. Los ficheros de datos correspondientes a registros establecidos por ley, u otros que deban llevarse en virtud de disposiciones legales o de normas administrativas publicadas.

La decisión relativa al otorgamiento de la excepción prevista en los puntos 1, 2 y 3 precedentes, será adoptada en forma fundada por el presidente de la Nación o gobernador según el caso.

Deberán, no obstante, en tales casos, realizar la notificación prevista en el último párrafo del artículo precedente.

Art. 23. — La creación de los ficheros a que se alude en el presente título requerirá dictamen previo del defensor del pueblo de la Nación, o del órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial.

El mismo será requerido con carácter previo al envío por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso, de todo proyecto de ley que prevea la creación de un fichero de datos, o del dictado de un reglamento o acto administrativo relativo a dicha creación.

El aludido funcionario verificará la presentación de proyectos de ley en ambas Cámaras con dichas previsiones, haciendo conocer sus observaciones a los legisladores firmantes y a las comisiones a las que se le hubiera conferido intervención.

Las provincias, dentro de sus respectivas jurisdicciones, adoptarán las medidas que aseguren la intervención previa de sus órganos de protección de datos, con anterioridad a la sanción de una ley o emisión de reglamento o acto administrativo, que establezca un fichero de datos en una entidad oficial.

Art. 24. — Los datos de carácter personal obtenidos o tratados por los entes a que se refiere el presente título no podrán ser cedidos o transmitidos, excepción hecha de que la cesión o transmisión fuera efectuada para otro ente del mismo carácter para el ejercicio de idénticas competencias, o de competencias que versen sobre las mismas materias, o cuando la cesión o transmisión hubiera sido prevista en las normas sobre crea-

ción del fichero y que la cesión fuera necesaria para el legal cumplimiento de las funciones incluidas en la competencia del ente transmisor o de quien reciba esos datos.

Fuera de los casos previstos precedentemente, podrán cederse o transmitirse datos de carácter personal entre entidades de las contempladas en este título, cuando los datos hubieran sido obtenidos por cuenta o encargo del ente cesionario, y la transmisión se efectúe a éste.

Si los datos de carácter personal en cuestión tuvieren carácter secreto en virtud de disposición legal o reglamentaria vigente, y hubieren sido transmitidos al ente cedente o transmisor por la persona sometida a deber de secreto en el ejercicio de sus deberes profesionales u oficiales, será indispensable, además, que el receptor necesite los datos para el cumplimiento de la misma finalidad para la cual los hubiere obtenido el ente transmisor.

Art. 25. — Los ficheros de datos creados por las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, estarán comprendidos en el régimen del presente título.

Establécese por otra parte para la obtención y almacenamiento de datos por parte de los aludidos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con fines policiales, que las mismas estarán limitadas a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad interior o para la represión de infracciones penales concretas, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto.

Queda prohibida la formación de ficheros policiales o de inteligencia, de datos relativos a los habitantes del país, sobre su raza, fe religiosa u opinión política, o su adhesión a principios de movimientos sindicales, cooperativos, asistenciales y culturales, así como a la legítima actividad que desarrollen como integrantes de organizaciones que actúen legalmente en los sectores antes indicados.

Art. 26. — En lo relativo a los derechos de acceso, rectificación y cancelación, regirán para las entidades públicas con los alcances previstos en el título precedente, con las modalidades siguientes:

1. Los titulares de los ficheros de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y organismos de inteligencia, podrán denegar el acceso, la rectificación y la cancelación de los datos de carácter personal obrantes en los mismos, en el supuesto en que tales acciones puedan ocasionar un daño significativo a la defensa nacional o a la seguridad interior del Estado.

No obstante, deberán en cualquier caso permitir el acceso:

- a) Al particular que estuviera sujeto a experimentar restricciones actuales en sus derechos, como consecuencia de los datos obrantes en los ficheros en cuestión; con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso, supuesto éste en que deberá brindarse tal acceso en oportunidad en

que el afectado deba ejercer su derecho de defensa;

- b) A cualquiera de los miembros de las comisiones de Defensa Nacional del Congreso de la Nación, Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia, o comisión o comisiones que la sucedieran con facultades de fiscalización de los expresados órganos y actividades, en aquellos aspectos que constituyan materia de la competencia de tal comisión o comisiones.

2. También los responsables de ficheros de datos de la Dirección General Impositiva u órgano que la sucediera podrán denegar el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo anterior, en el supuesto en que dicho ejercicio sea susceptible de causar un daño cierto e inminente al legítimo ejercicio de sus funciones por parte de dicho órgano; y, con carácter general, toda vez que el afectado esté siendo objeto de inspección, verificación o investigación de carácter impositiva.

Deberá, no obstante, brindarse pleno acceso a los registros en cuestión, en la oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.

Todos los supuestos de denegatoria del ejercicio de los derechos aludidos precedentemente por parte del titular de un fichero de datos aludidos en el presente título, deberán ser notificados al afectado.

Este podrá interponer dentro del décimo día, para ante el defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que se designe o cree en las provincias, en el supuesto de tratarse de ficheros dependientes de aquéllas o de los municipios, recurso administrativo, que deberá ser fundado en el mismo término.

La aludida Dirección requerirá las actuaciones al órgano que hubiera formulado la denegatoria, debiendo emitir resolución fundada en el término de treinta días de interpuesto el recurso.

Dicha decisión podrá ser impugnada por el afectado por medio de recurso judicial directo para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante el órgano judicial referido, en el término de quince días.

Regirán supletoriamente las normas establecidas para el procedimiento en segunda instancia en el recurso de apelación connotado libremente, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

3. El organismo requerido podrá fijar una tasa para el ejercicio de los derechos aludidos precedentemente, que no podrá ser superior al costo que le represente la respectiva tramitación.

4. En cualquier supuesto, se procederá a la cancelación de los datos cuando su conocimiento ya no resulte indispensable para el ejercicio de las funciones del ente almacenador.

Exceptuase el supuesto en que los datos en cuestión sean indispensables para fines científicos, o por cualquiera otra razón de interés preponderante del propio ente almacenante o del propio afectado.

Art. 27. — Los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo nacional, los titulares de entes descentralizados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los gobernadores y ministros provinciales, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los titulares de los municipios —los cuatro últimos, en la medida en que las respectivas provincias y ciudad adhieran a la presente ley— serán personal y directamente responsables, política, administrativa y patrimonialmente, por el cumplimiento de la presente ley y por la efectiva vigencia para los afectados de los derechos que ésta les reconoce, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TITULO V

Ficheros de titularidad privada

Art. 28. — Las personas físicas y jurídicas privadas, podrán ser titulares de ficheros de datos que contengan datos de carácter personal, cuando ello resulte necesario para el desarrollo de las actividades legítimas de las mismas, no se perjudiquen derechos de los afectados, y se dé cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley.

Serán asimismo aplicables los preceptos de esta sección a la actividad de las personas o entidades que traten datos de índole personal por encargo de personas o entidades comprendidas en el presente título.

Art. 29. — Toda persona o entidad privada que cree un fichero de datos que en todo o en parte tengan carácter personal, deberá notificarlo previamente al defensor del pueblo de la Nación, u órgano que designe o cree cada provincia, en jurisdicción provincial.

Art. 30. — La notificación deberá contener:

1. Nombre, domicilio o razón social de la persona o entidad propietaria del fichero, y nombre y domicilio de los integrantes de los órganos de dirección y administración de la entidad, en su caso.
2. Actividad a que se dedican las personas físicas, u objeto social del ente, y finalidades para las que establecen el fichero de datos.
3. Características de las instalaciones y tipo de máquinas que habrán de emplearse para el funcionamiento del fichero y tratamiento de los datos, en el supuesto de tratarse de un fichero de datos automatizado.
4. Nombre del responsable de la protección de los datos, y medidas de seguridad a aplicarse a los fines de tal protección.

5. Tipo de datos personales almacenados por la persona o entidad, o por encargo de ella; el ente o por encargo de él.
6. En el supuesto en que el fichero de datos habrá de transmitir regularmente datos de índole personal, el receptor y el tipo de datos objeto de transmisión.
7. Si se prevén realizar cesiones de datos de carácter personal, se informará nombre y domicilio del cesionario, así como datos que habrán de constituir objeto de la cesión.
8. Las personas, o categorías de personas, sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal.
9. Las oficinas a las cuales podrán dirigirse los afectados a los fines del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Art. 31. — Regirán para los ficheros de datos pertenecientes a entidades privadas, los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación.

En caso de denegatoria u omisión de tales entidades en hacer efectivo el ejercicio de tales derechos, dentro de los términos establecidos en el artículo 11, el afectado podrá ejercer las vías recursivas contempladas en el artículo 26.

Art. 32. — Los números de los teléfonos y demás servicios de telecomunicación, junto con datos complementarios, podrán figurar en los repertorios de abonados de acceso al público, pero el afectado podrá exigir su exclusión de los mismos.

Art. 33. — Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial, antecedentes comerciales e industriales, y crédito, sólo podrán poseer ficheros de datos obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el afectado personalmente o con su consentimiento.

Podrán incluirse, igualmente, datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

En el caso referido precedentemente, se notificará a los afectados respecto de quienes se hayan registrado tales datos, para que realicen las verificaciones que crean oportunas respecto de la exactitud de los mismos, haciendo conocer los resultados a la entidad almacenadora; así como de su derecho a tomar conocimiento de la totalidad de los datos de índole personal existentes en los respectivos ficheros, y a formular respecto de la exactitud de los mismos las observaciones y a acompañar las probanzas y elementos de juicio que consideren necesarias.

La entidad almacenadora deberá tomar en cuenta las observaciones formuladas por los afectados que resulten exactas; debiendo, en caso de duda, tomar indisponibles los datos respectivos.

Art. 34. — Las personas o entidades que se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, pu-

blicidad y venta directa y otras actividades similares, sólo podrán confeccionar ficheros de datos de carácter personal utilizando datos que figuren en documentos accesibles al público, o cuando tales datos hayan sido facilitados por los propios afectados u obtenidos con su consentimiento.

Al dirigir la correspondencia o realizar el reparto, la entidad almacenadora o la cesionaria de la misma o quien realizara el envío de correspondencia o reparto en base a los datos aludidos, deberá poner en conocimiento de los afectados el origen de los datos de carácter personal utilizados, pudiendo éstos requerir ser dados de baja del fichero, y la destrucción de sus datos.

Art. 35. — Sólo podrán ser utilizados datos de carácter personal en la realización de encuestas de opinión, trabajos de estudio de mercado, investigación científica y técnica y actividades similares, cuando los datos hubieran sido obtenidos con el consentimiento de los afectados.

Tales datos no podrán ser utilizados con finalidades distintas a aquellas para las que fueron solicitados, ni cedidos sin ser previamente disociados.

TITULO VI

Del órgano de aplicación de la presente ley

Art. 36. — Asignase al defensor del pueblo de la Nación, la función de constituir órgano de aplicación de la presente ley.

Sin perjuicio de la misión y funciones que le son asignadas por las leyes 24.284 y 24.379, constituirá misión del defensor del pueblo de la Nación, en tanto órgano de aplicación de la presente ley, la de asegurar dentro de la jurisdicción nacional la estricta observancia de la presente ley, de la que constituirá órgano de aplicación; y particularmente de los derechos y garantías que la misma confiere a los particulares.

Serán sus funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las restantes normas legales y reglamentarias que existan en materia de protección de datos, y controlar su aplicación;
- b) Asegurar la vigencia de los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de datos, así como de los restantes previstos en la presente ley y en las restantes normas que rijan en la materia;
- c) Dictar las instrucciones y reglamentos que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de su misión y vigencia de las garantías reconocidas a los administrados, conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes en la materia y a los reglamentos que en sus consecuencias dicte el Poder Ejecutivo nacional;
- d) Atender las peticiones y reclamaciones que formulen los afectados, así como los titulares y responsables de ficheros de datos, debiendo resolver los mismos a través de la emisión del pertinente acto administrativo;

- e) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de ficheros de datos de índole personal, ya sea a solicitud o por propia iniciativa, a través de la pertinente publicidad;
- f) Ordenar la cancelación y destrucción de datos de índole personal y/o de los respectivos ficheros, ante incumplimientos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos;
- g) Ejercer las potestades sancionatorias previstas en el título VII de la presente;
- h) Dictaminar con carácter necesario, en forma previa a la remisión por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación, de todo proyecto de ley relativo a protección de datos de carácter nacional, así como al dictado por parte del órgano referido en primer término de todo decreto vinculado con la materia que nos ocupa;
- i) Requerir de los responsables de ficheros de datos de índole personal, todos los datos que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido;
- j) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad de la existencia de ficheros de índole personal, a cuyo fin y sin perjuicio de las inspecciones y verificaciones que estime pertinentes, procederá a dar a publicidad en forma periódica una relación con los nombres de tales ficheros, incluyendo los de sus titulares y responsables.

Llevará, asimismo, el Registro de Ficheros de Datos de Carácter Personal, en el que constará la nómina de los ficheros de dicha naturaleza correspondientes a su jurisdicción, ya sea de titularidad pública o privada, con las excepciones establecidas en la presente ley; sus sedes, nombre y domicilio de los titulares y responsables de los mismos, naturaleza de los datos personales que contienen, y el horario y formalidades establecidas para su consulta.

Como consecuencia de la adhesión de las provincias a la presente ley, o a través de otros convenios con esas provincias, procurará incorporar la nómina de los ficheros de datos de carácter personal existentes en aquellas, facilitando asimismo a las mismas la nómina de los existentes en su jurisdicción, con las excepciones que la reglamentación determine.

Dichos registros estarán a disposición de los interesados para su consulta.

- k) Emitir sendos informes anuales que remitirá al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo nacional, describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos, y proponiendo los cambios legislativos y reglamentarios que requiera el mejor desempeño de su cometido; así como todos los informes que les requieran los órganos Ejecutivo y Legislativo nacional, y los gobiernos provinciales, sobre las materias de su competencia;

- l) Controlar y otorgar las autorizaciones necesarias, en caso de que ello resulte procedente, con relación a las transferencias internacionales de datos de carácter personal;
- m) Vincularse con los organismos de protección de datos de carácter personal inexistentes en otros países, a fin del intercambio de experiencias y la implementación de la cooperación internacional en materia de protección de datos de carácter personal;
- n) Velar juntamente con los órganos que tengan a su cargo la aplicación de las leyes respectivas, por el cumplimiento de las leyes que contengan normas especiales en materia de protección de datos de carácter internacional;
- o) Impartir recomendaciones a los organismos públicos y a personas y entidades privadas, tendientes a la mejora de la protección de datos;
- p) Asesorar al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo nacional y a los ministros individualmente, así como, a su requerimiento, al Poder Judicial de la Nación y a las autoridades provinciales o municipales, con relación a la protección de datos de carácter personal;
- q) Requerir informes a todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, así como a entidades privadas, los que deberán suministrarlos;
- r) Promover investigaciones; realizar pericias; y citar y hacer comparecer testigos, con intervención del Poder Judicial;
- s) Las restantes funciones que se le confieren en la presente ley, o que le otorguen las normas legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro en materia de protección de datos de carácter personal.

Art. 37. — Integrarán la jurisdicción del defensor del pueblo de la Nación, a los fines de la aplicación de la presente ley:

1. Los ficheros de datos pertenecientes a entes estatales nacionales.
2. Los ficheros de datos destinados a contener datos de carácter personal de habitantes de más de una jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires o de otros países, o que sean llevados en más de una jurisdicción, o que estén destinados a transmitir o que transmitan, cedan comuniquen o difundan datos de una jurisdicción provincial o de la ciudad de Buenos Aires, a otra jurisdicción, o fuera del país.
3. Los ficheros de datos correspondientes a las personas físicas o entidades privadas dedicadas al comercio interjurisdiccional en cualquiera de sus formas (transporte, comunicaciones, servicios públicos, etcétera)
4. Las cesiones o transferencias de datos interjurisdiccionales.

Los restantes ficheros de datos serán de jurisdicción provincial.

Art. 38. — El defensor del pueblo de la Nación, o el órgano que designe o cree cada provincia en jurisdicción provincial, y los funcionarios de la Defensoría y de los restantes órganos aludidos que cuenten con mandato escrito de los mismos al efecto estarán facultados, cuando fuere necesario para el cumplimiento de su misión, a entrar con autorización judicial en lugares pertenecientes u ocupados por la entidad almacenadora, sea ésta pública o privada; a realizar en ellos comprobaciones e inspecciones y a examinar los documentos comerciales.

Especialmente controlarán el libro especial que llevará el responsable de la protección de datos conforme dispone el artículo 19 del presente, así como los datos almacenados de índole personal, los programas de tratamiento de datos, y los equipos utilizados para el almacenamiento y tratamiento de los mismos.

Los órganos de aplicación aludidos podrán también requerir la exhibición o envío de documentos y datos, si no optare por examinarlos en el lugar en que se encuentran.

La exhibición de datos y documentos o los registros en las sedes de las entidades públicas almacenadoras de datos no tendrán lugar, cuando el presidente de la Nación o el ministro del Poder Ejecutivo nacional competente se opusieran fundadamente a ellas, por entender que su realización es susceptible de poner en peligro la defensa nacional o la seguridad interior de la República Argentina.

En tales supuestos, deberá informar los motivos a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Estas podrán disponer por resolución conjunta que la diligencia se realice, pudiendo encomendarla según los casos a las comisiones de Defensa de ambas Cámaras, o bien a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia u órgano que las reemplace.

Art. 39. — En jurisdicción provincial, el cumplimiento de las funciones encomendadas en la presente ley al defensor del pueblo de la Nación, será encomendado al órgano administrativo que disponga cada provincia, por decisión de la autoridad que resulte al efecto competente en ella.

Art. 40. — En lo relativo al ejercicio de las competencias que la presente ley le reconoce, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, no dependerá de ninguna autoridad.

Art. 41. — Cualquier persona podrá dirigirse al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, cuando estime que se han lesionado sus derechos, con ocasión de la obtención, tratamiento o registro de datos suyos de índole personal o por encargo de los titulares de ficheros de datos de índole personal públicos o privados.

El referido funcionario deberá proceder a efectuar las pertinentes investigaciones, tendientes a establecer la veracidad de los extremos denunciados.

También promoverá la investigación de aquellas irregularidades que advirtiera *prima facie* como consecuencia de las inspecciones y determinaciones que practicara.

Se aplicará en todo lo no previsto en la presente ley el Reglamento de Investigaciones vigente para la administración pública nacional.

TITULO VII

Régimen sancionatorio

Art. 42. — Los titulares y responsables de ficheros privados de datos de índole personal estarán sujetos al régimen sancionatorio previsto en el presente título.

Constituirán infracciones al presente régimen de protección de datos de índole persona:

- a) No efectuar los registros en la forma prescrita, o no realizar las comunicaciones establecidas, o no realizar la gestión del fichero de datos de índole personal de que se trate en el modo determinado, en los procedimientos y normas dictados por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, si se trata de faltas exclusivamente formales, y no constituyeran otra infracción prevista en el presente título;
- b) No cumplir las instrucciones impartidas por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, o de funcionarios dependientes de los mismos facultados para ello, si el hecho no constituyera otra infracción o delito;
- c) Mantener ficheros de datos de índole personal u obtener, tratar, difundir o ceder datos de esa índole, sin las condiciones y medidas de seguridad establecidas en la presente ley, su reglamentación y en las instrucciones y reglamentos emitidos por el defensor del pueblo de la Nación o por el órgano que cada provincia designe o cree, en jurisdicción provincial;
- d) No proporcionar al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, o a funcionario competente dependiente de los mismos, la información que éstos solicitaran, al momento o, de no ser posible por causas justificadas, dentro de los quince días de serle requerida;
- e) No proceder, de oficio o a solicitud de los afectados o de las personas o entidades facultadas para ello, a la cancelación de datos de índole personal, cuando hubieren desaparecido los motivos que determinaron su obtención, tratamiento o registro;
- f) No proceder a la rectificación, actualización o cancelación de datos erróneos, desactualizados o incompletos;
- g) No proceder a tornar indisponibles datos de índole personal cuya exactitud hubiera sido cuestionada por el afectado o por persona o entidad facultada para hacerlo;

- h) Proceder a la creación de ficheros de datos de índole personal sin recabar las autorizaciones establecidas para ello, o sin efectuar las publicaciones prescritas, o sin designar responsable de la protección de datos;
- i) Proceder a la obtención de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de los afectados, en los casos en que éste sea exigible, o sin proporcionarles la información prevista en la presente ley;
- j) Proceder a la creación de ficheros de datos de carácter personal o a la obtención de datos de dicha índole, con finalidades diversas a las denunciadas a la autoridad competente, o las manifestadas a los afectados;
- k) Efectuar el tratamiento de datos de índole personal, o utilizarlos, difundirlos o cederlos, conculcando los derechos y garantías establecidos en favor de los afectados en la presente ley;
- l) Impedir o dificultar el ejercicio del derecho de acceso, y no proporcionar la información a los afectados prevista en la presente ley, en su reglamentación, o en los reglamentos establecidos por el defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, en la forma y en el término allí dispuestos, que no podrá exceder de treinta (30) días posteriores al requerimiento efectuado por medio fehaciente;
- m) Mantener datos de carácter personal inexactos o desactualizados o con posterioridad a la cesación del motivo que determinó su obtención, cuando con ello resultaren conculcados los derechos de los afectados amparados por la presente ley;
- n) No guardar el secreto, cuando el mismo es exigible por disposiciones de la presente ley, o de otras normas jurídicas vigentes;
- o) No remitir al defensor del pueblo de la Nación o al órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, las notificaciones requeridas por la presente ley, su reglamentación, o las instrucciones y reglamentos expedidos por el funcionario arriba referido, cuando ello dificultare o impidiera al mismo el cumplimiento de sus atribuciones; así como los documentos e informaciones que el mismo requiriere;
- p) Obstruir, dificultar o impedir las inspecciones que dispusiere el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial;
- q) Obtener datos de índole personal con fraude o engaño, o en forma contraria a lo establecido en las normas vigentes al momento de hacerlo, si el hecho no constituyera delito o infracción más severamente penada;
- r) Difundir, comunicar o ceder datos de índole personal, fuera de los supuestos en que ello es permitido por la presente ley;

- s) Incumplir las prohibiciones sobre la obtención, tratamiento, registro, comunicación o difusión de datos de determinado carácter, establecidas en la presente ley, o en otras normas legales en vigencia;
- t) No cesar en el uso ilegítimo de datos de carácter personal, cuando ello le fuere requerido por el defensor del pueblo de la Nación u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, o por funcionarios competentes dependientes de los mismos;
- u) Ceder, comunicar o difundir datos de índole personal con destino a países que no proporcionen garantías equivalentes a los afectados, sin autorización del defensor del pueblo de la Nación, u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial;
- v) Obtener o tratar datos de carácter personal en forma ilegítima o con propósitos ilegítimos, o violando los derechos y garantías establecidas en la presente ley o en otras normas aplicables, cuando ello se traduzca en menoscabo o desconocimiento de los derechos y garantías reconocidos a los habitantes por la Constitución Nacional.

Art. 43. — Determinada la comisión de cualquiera de las infracciones referidas en los puntos precedentes, y sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de la Auditoría General de la Nación, y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, según correspondiere, así como de formular las denuncias penales pertinentes en el supuesto de entender que los mismos podrán constituir un ilícito penal, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, aplicará a los responsables y titulares de ficheros de datos de índole personal, las sanciones siguientes:

1. Apercibimiento;
2. Suspensión de un mes a dos años, del funcionamiento del fichero de datos de que se trata, con la correlativa inhabilitación para su titular, de poseer otro;
3. Suspensión de un mes a dos años en el carácter de responsable del fichero de datos de que se trate y de todo otro, así como en el ejercicio de toda profesión vinculada con la informática, el registro o tratamiento de datos.
4. Clausura definitiva del fichero de datos de que se trata, con inhabilitación perpetua para ser titular de ficheros de datos de índole personal.
5. Cesación definitiva en el carácter de responsable del fichero de datos de que se trate y de todo otro, con inhabilitación perpetua para ser titular o responsable de ficheros de datos de índole personal, así como de toda profesión vinculada a la informática, a la obtención o al tratamiento de datos.
6. Multa de pesos cincuenta mil (50.000) o un millón (1.000.000) que podrá imponerse como

pena principal o accesoria a las previstas en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del presente.

Las sanciones establecidas en los puntos 1, 2 y 3 precedentes, serán aplicables a las infracciones contempladas en los apartados a), b), c), d), e), f) y g).

En el supuesto de reiterarse en dos oportunidades la comisión de la infracción, serán aplicables cualesquiera de las restantes sanciones previstas en el presente artículo.

Serán aplicables las sanciones establecidas en los puntos 2 y 3 del presente artículo, a las infracciones contempladas en los apartados h), i), j), k), l), m) y n) del artículo precedente.

En caso de reiterarse en una o más oportunidades la comisión de la infracción, podrá aplicarse cualesquiera de las restantes sanciones previstas en este artículo.

Con relación a las infracciones previstas en los apartados o), p), q), r), s), t), u), y v) del artículo precedente, serán aplicables las sanciones establecidas en los puntos 4, 5 y 6 del presente artículo.

No serán aplicables las sanciones previstas en este artículo, a los responsables que con anterioridad a la intervención del defensor del pueblo de la Nación u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, hubieran puesto en conocimiento del funcionario aludido o de los funcionarios competentes dependientes de él los hechos constitutivos de infracción, y hubieran brindado su colaboración tendiente a disminuir o a suprimir los efectos de éstos.

Las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables en caso de tratarse de ficheros de datos de carácter personal pertenecientes a entidades estatales, excepción hecha de las previstas en los puntos 2 y 4 del presente artículo.

En cuanto a las multas previstas en el mismo, las mismas serán aplicadas a los funcionarios que se desempeñen como titular de la dirección nacional o general o ente descentralizado a que pertenece el fichero, y a quien actúe como responsable del mismo.

Corresponderá asimismo a los funcionarios previstos en el apartado precedente, la aplicación de la sanción de exoneración, siendo además responsables patrimonialmente por los daños que su conducta cause a los afectados y a la administración.

Art. 44. — Prescribirán a los tres años, las infracciones contempladas en el artículo precedente.

Art. 45. — Las decisiones que en materia de investigación y determinación de infracciones adopte el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, podrán ser impugnadas a través de recurso judicial directo, que tramitará para ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso deberá interponerse y fundarse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la decisión respectiva, en la referida Cámara Nacional.

Esta procederá a requerir las actuaciones del defensor del pueblo de la Nación, y a dictar sentencia dentro de los cuarenta y cinco días de concluida la sustanciación del recurso con el pertinente traslado a conferirse del

mismo al funcionario precedentemente referido, o bien de concluirse la producción de prueba, en el caso de disponer el tribunal la producción de la misma.

Se aplicarán supletoriamente las normas relativas al recurso de apelación concedido libremente, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el supuesto de impugnarse en jurisdicción provincial la decisión de un órgano provincial que constituya órgano de aplicación de la presente ley, intervendrá el tribunal competente conforme a las normas procesales vigentes en dicha jurisdicción, aplicándose el procedimiento que se disponga en la ley de adhesión provincial.

TITULO VIII

Normas penales

Art. 46. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el titular o responsable de un fichero de datos, de carácter personal, o quien interviniera en cualquier etapa del tratamiento de datos, que ilegalmente revelare a terceros tales datos, facultara o posibilitara a terceras personas el acceso o utilización de los mismos, o que no guardan secreto con relación a ellos, aun luego de concluida la relación que lo ligara a dicho fichero.

Art. 47. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente penado, quien habiendo sido objeto de inhabilitación por decisión firme del defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, para desempeñarse como titular o responsable de ficheros de datos de carácter personal, o en el desempeño de profesiones vinculadas con la informática, la obtención o el tratamiento de datos, quebrantara por sí o por interpósita persona tal inhabilitación.

Art. 48. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, el titular y el responsable de un fichero de datos de carácter personal clausurado por decisión firme del defensor del pueblo de la Nación, u órgano que se designe o cree en jurisdicción provincial, que pese a lo dispuesto por dicha decisión continuaran gestionando el fichero, o la obtención, tratamiento, y registro de datos para el mismo, por sí o por medio de terceros; o que cedieran, comunicaran o difundieran los datos contenidos en el mismo.

Art. 49. — En aquellos casos en los cuales con motivo de la investigación de las infracciones previstas precedentemente, se advirtieran serios y graves indicios de utilización o cesión ilícita de datos de carácter personal, con lesión de derechos y garantías constitucionales, el defensor del pueblo de la Nación o el órgano que cada provincia designe o cree en jurisdicción provincial, podrá disponer con carácter cautelar y por resolución fundada la suspensión del funcionamiento e inmovilización de los datos de uno o más ficheros de datos de carácter personal.

TITULO IX

Del ejercicio de la acción de amparo para obtener el acceso, modificación, supresión, rectificación y confidencialidad de los datos referidos a las personas

Art. 50. — Toda persona podrá interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos referidos a ella y de su finalidad, que consten en registros o ficheros de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.

En los casos a que alude el presente artículo, la expresada acción podrá ser deducida en lugar de los procedimientos administrativos y acciones judiciales previstos en la presente.

La sustitución de las vías judiciales previstas por el ejercicio de la acción de amparo, requerirá exclusivamente que el particular invoque fundadamente circunstancias conforme a las cuales tales acciones judiciales no constituyen un remedio idóneo para dar satisfacción a su pretensión.

TITULO X

Disposiciones transitorias y complementarias.

Art. 51. — La presente ley entrará en vigencia en el orden nacional, al día siguiente de su publicación.

Sin perjuicio de hacerlo en forma inmediata respecto de los ficheros de datos a que se alude en el artículo 37, respecto de los restantes entrará en vigencia para cada una de las provincias que adhieran a la misma, en el momento que disponga la respectiva ley provincial de adhesión.

Art. 56. — Dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser efectuadas las notificaciones y publicaciones previstas en la misma, con relación a los ficheros de datos de carácter personal preexistentes a su entrada en vigencia, y realizarse las adaptaciones y modificaciones técnicas tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la misma.

Art. 57. — El Poder Ejecutivo nacional procederá dentro de los ciento ochenta días de sancionada la presente a reglamentarla.

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán tomados de los ingresos producidos por la tasa que se crea en el artículo 40; y, en cuanto la misma no los cubriera, de "Rentas generales" con imputación a la misma, hasta la inclusión de las partidas respectivas en la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional correspondiente al próximo ejercicio.

Art. 58. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray.

Texto del proyecto presentado por
el senador Romero Feris

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Toda persona física o jurídica podrá requerir de los registros y/o centros y/o bancos de datos públicos o privados destinados a suministrar información una constancia de la que surjan los datos sobre dicha persona allí registrados, cualquiera fuere la índole de los mismos.

Art. 2º — El registro deberá proporcionar la información requerida en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas. Vencido el mismo, el requirente podrá recurrir a la vía judicial para que se le entregue dicha información.

Art. 3º — Cuando la información contenga datos falsos y/o discriminatorios, el solicitante podrá requerir al registro que los mismos sean rectificados en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas. Vencido el mismo podrá exigir judicialmente la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos.

Art. 4º — La acción judicial tramitará por las normas del proceso sumarísimo establecidas en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 5º — Quedan exceptuados de las disposiciones de la presente ley aquellos registros que no provean información a terceros, así como también cuando se afectare el secreto de las fuentes de información periodística.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José A. Romero Feris.

Texto del proyecto presentado por
el senador Alasino

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Cualquier persona estará habilitada para iniciar la acción de amparo especial de *habeas data* cuando los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer información se nieguen a:

- a) Mostrar los datos que consten sobre el interesado;
- b) Informar sobre la finalidad de los datos recabados;
- c) Suprimir, rectificar, dar confidencialidad o actualizar los datos en caso de que éstos sean falsos, inexactos, discriminatorios o hayan sido obtenidos ilícitamente.

Art. 2º — El interesado tendrá un plazo de 30 días para iniciar la acción el que se contará desde la negativa del registro o banco de datos a hacer lugar a los requerimientos indicados en los incisos a), b) y c) del artículo anterior.

Art. 3º — Serán competentes los jueces federales cuando la acción de amparo especial de *habeas data* se interponga contra un registro o banco de datos público.

Art. 4º — Será competente para entender en la acción de amparo especial de *habeas data*, el juez del domicilio del actor o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

Art. 5º — Se aplicará a esta acción el procedimiento previsto para la acción de amparo de todo lo que no esté modificado por la presente ley.

Art. 6º — El trámite de la acción de amparo especial de *habeas data* será el correspondiente al proceso sumarísimo.

Art. 7º — En los casos en que el actor solicite la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos, deberá adecuarse el procedimiento con la finalidad de facilitar la prueba.

Art. 8º — La acción de amparo especial de *habeas data* se interpondrá por escrito y la presentación deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Individualizar el nombre y domicilio del registro o banco de datos demandado;
- b) Alegar las razones por las cuales el interesado entiende que en el registro o banco de datos individualizado existe información referida a su persona y el perjuicio actual o inminente que tal situación le acarree;
- c) En su caso, alegar las razones por las que el interesado considera que la información que le atañe ha sido ilícitamente recabada o resulta falsa, inexacta o discriminatoria;
- d) Ofrecer la prueba, acompañando la documental que se encuentre en poder del interesado. El número de testigos no podrá exceder de dos (2).

Art. 9º — El juez previo a toda actuación deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción.

Art. 10. — Admitida la acción, el juez requerirá al registro o banco de datos demandado, la remisión de la información concerniente al actor, y en su caso el soporte de tales datos, la documentación que sirvió de sostén para su inclusión en el banco o registro de datos o cualquier otro aspecto que resulte conducente, acompañando copia del escrito de inicio.

Art. 11. — El registro o banco de datos demandado no podrá alegar la confidencialidad de la información solicitada para negarse a cumplir el pedido del juez.

Art. 12. — Los registros o bancos de datos públicos y privados sólo podrán excusarse de informar en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se afecte el secreto de las fuentes de información periodística. En este caso, el registro o banco de datos podrá negarse a revelar la identidad del autor de la información;
- b) Cuando se aleguen razones que afecten a la defensa nacional o alto interés del Estado. En este caso se deberá fundar y probar debidamente la afectación alegada.

Art. 13. — El registro o banco de datos requerido deberá contestar el pedido del juez en el plazo establecido, acompañando toda la información que tuviera

sobre el requerido y en su caso, la documentación que sirva de sostén a la información incluida en el registro o banco de datos y alegar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada.

Al contestar el informe, el registro o banco de datos podrá ofrecer prueba en los términos establecidos en el artículo 8º.

Art. 14. — Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y habiendo sido producida, en su caso, la prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día.

Si se declarara procedente la acción, y en caso de que corresponda, la sentencia ordenará al registro o banco de datos demandado la supresión, rectificación, actualización o declaración de confidencialidad de la información, estableciendo un plazo para su cumplimiento.

Art. 15. — Si el registro o banco de datos no cumpliera con la sentencia, el juez a pedido de parte, podrá:

- a) Aplicar astringentes, si el condenado fuera un registro o banco de datos privado;
- b) Aplicar multas, si el condenado fuera un registro o banco de datos público.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Alasino.

**Texto corregido de la sanción de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(5 de junio de 1996)**

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto la salvaguarda de los datos personales tanto de las personas físicas como jurídicas tratados en registros o bancos de datos, automatizados o no, de los sectores públicos o privados, o registrados en soporte físico susceptible de tratamiento automatizado o no, o mediante otras técnicas, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Art. 2º —

1. El régimen de la presente ley no será de aplicación:

- a) A los registros o bancos de datos de titularidad pública cuyo objeto, legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para su publicidad con carácter general;
- b) A los registros o bancos de datos mantenidos por personas físicas con fines exclusivamente personales;
- c) A los registros o bancos de datos de información judicial, científica, tecnológica o comercial, que reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales;

d) A los registros o bancos de datos mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas reconocidos, en relación a sus afiliados, asociados, miembros y ex miembros, y sólo en cuanto estén referidas a una finalidad específica, sin perjuicio de la cesión de datos que queda sometida a lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley, salvo que resultare de aplicación el artículo 11 por tratarse de datos de índole personalísimo;

e) Los registros o bancos de datos de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad periodística por cualquier medio de comunicación social. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes ni pretender que las mismas sean reveladas.

2. Se regirán por sus disposiciones específicas:

- a) Los registros o bancos de datos pertenecientes al Registro Nacional de Reiniciencia y Estadística Criminal y al Registro Nacional de las Personas;
- b) Los registros o bancos de datos regulados por la legislación sobre régimen electoral.

Art. 3º — A los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) *Datos de carácter personal.* Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables sobre características propias o informaciones objetivas;
- b) *Registro o banco de datos.* Todo conjunto organizado de datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado o no, cualquiera fuera la forma o modalidad de su creación y organización, y que estuviere debidamente registrado;
- c) *Tratamiento de datos.* Operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan almacenar, grabar, elaborar, modificar, resguardar, disociar y eliminar datos de carácter personal, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias;
- d) *Responsable del registro o banco de datos.* Persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, titular del registro o banco de datos;
- e) *Titular de los datos.* Persona física o jurídica, interesada o afectada, a la que se refieren los datos que fueran objeto de tratamiento conforme la definición contenida en el apartado c) del presente artículo;
- f) *Procedimiento de disociación de datos.* Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda

asociarse a persona determinada o determinable;

- g) *Almacenamiento de datos.* La obtención, toma o custodia de datos, en registros o bancos de datos para su utilización posterior.
- h) *Cesión de datos.* Dar a conocer los datos tratados a terceros, en forma tal que los mismos sean suministrados por el responsable del registro o banco de datos;
- i) *Modificación de datos.* Todo cambio en el contenido de datos almacenados en registros o bancos de datos;
- j) *Eliminación de datos.* Destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, automatizados o no, sea cual fuere el procedimiento empleado para ello.

TÍTULO II

Principios generales para la protección de datos

Art. 4º — Calidad de datos.

1. Sólo podrán recogerse datos de carácter personal para su tratamiento, cuando tales datos fueran adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad legítimas para las que se hubieran obtenido.
2. No podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieren sido recogidos los datos de carácter personal objeto de tratamiento.
3. Dichos datos serán exactos y actualizados de forma tal que respondan con veracidad a la situación real del interesado.
4. Si los datos de carácter personal, sometidos a tratamiento, resultaren ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, el responsable del registro o banco de datos procederá a eliminarlos o sustituirlos por la información rectificada o completada, sin perjuicio de las facultades que a los efectos reconoce el artículo 15 de la presente ley.
5. Los datos de carácter personal deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios a los fines para los cuales hubieran sido recabados.

Los datos no serán conservados de forma que permitan la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido tratados.

El procedimiento por el cual se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos será regulado por vía reglamentaria. El régimen será de excepción e interpretación restrictiva.

6. Los datos serán almacenados de forma que permitan el ejercicio de su acceso por parte del interesado.

Art. 5º — *Comisión Bicameral de Seguimiento de Protección de Datos.* Créase en el ámbito del Congreso Nacional, la Comisión Bicameral de Protección Legislativa de Datos a los fines de posibilitar, en general, la salvaguarda y protección de los derechos tutelados por la presente ley, sin perjuicio de las facultades propias del Poder Judicial.

La misma será integrada por cinco diputados y cinco senadores pertenecientes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General cuyo reglamento será dictado por sus propios miembros y con representación de las minorías.

Art. 6º — *Consentimiento del interesado.* El tratamiento de datos de carácter personal, requerirá el consentimiento expreso por escrito del titular, salvo que una ley disponga lo contrario.

Art. 7º — No será preciso el consentimiento cuando:

- a) Los datos de carácter personal se obtengan de fuentes accesibles al público;
- b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia;
- c) Se refieren a personas vinculadas por un negocio jurídico, una relación laboral, una relación administrativa y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.

Art. 8º — El consentimiento podrá ser revocado, sin poder atribuirle efectos retroactivos.

Art. 9º — *De la ilicitud del tratamiento de datos.* El tratamiento de datos de índole personal, protegido por la presente ley, será ilícito, cuando el interesado no hubiere prestado su consentimiento por escrito.

Si el consentimiento se otorgara juntamente con otras declaraciones se deberá informar de ello expresamente, por escrito al interesado y en instrumento separado.

Art. 10. — *Derecho de información en la recolección de datos.*

1. Los interesados a los que se solicitaran datos de carácter personal deberán ser previamente informados de manera expresa, precisa e inequívoca:
 - a) De la existencia de un registro de datos de carácter personal, de la finalidad de la recolección, del tratamiento y de los destinatarios de dicha información. Así como de la imposibilidad de modificar su finalidad y los destinatarios de la misma;
 - b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean formuladas en el sector público, y del carácter facultativo en el caso del sector privado;
 - c) De la posibilidad de ejercer los derechos presentes en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional;

- d) De la identidad y domicilio del responsable del registro o banco de datos, y la referencia del órgano de aplicación.

Art. 11. — Datos especialmente protegidos.

1. No podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen ideología, raza, religión, hábitos personales y comportamiento sexual.
2. No podrán ser objeto de tratamiento, los datos de carácter personal que revelen estado de salud, situación patrimonial y obligaciones tributarias, salvo que mediaren razones de interés general, y así lo disponga una ley o exista consentimiento del interesado.
3. Los datos de carácter personal relativos a procesos penales o infracciones administrativas, sólo podrán ser incluidos en registros o bancos de datos pertenecientes a las administraciones públicas competentes, en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

Art. 12. — Datos relativos a la salud. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 sobre cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes, podrán tratar datos de carácter personal relativos a la salud de personas que a ellos consulten o que hubieran de ser tratados por los mismos.

Art. 13. — Seguridad de los datos. El responsable del registro o banco de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su adulteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología aplicada, la naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estuvieren expuestos, sean provenientes de la acción humana o del medio físico natural.

Art. 14. — Deber de secreto. El responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardar dicho secreto, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el responsable del registro o banco de datos.

Art. 15. — Cesión de datos.

1. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario con el previo consentimiento por escrito del interesado. Será nula la cesión si no constase con claridad la finalidad de la misma.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será necesario cuando:
 - a) Una ley disponga lo contrario;

- b) Se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público;

- c) La cesión tenga por destinatarios a los magistrados del Poder Judicial, al defensor del pueblo, o al ministerio público, en ejercicio de las funciones propias de sus competencias;

- d) La cesión se produzca entre las administraciones públicas en los supuestos previstos en el artículo 24;

- e) La cesión de datos de carácter personal relativos a la salud, que sea necesaria para solucionar una urgencia, sin que para ello hubiera otro medio más idóneo y se requiera acceder a un registro o banco de datos, o para realizar estudios epidemiológicos previa disociación.

3. Siempre podrá ser revocado el consentimiento para la cesión de datos de carácter personal y el mismo no tendrá efectos retroactivos.

4. El cesionario de datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la cesión a la observancia de las disposiciones de la presente ley.

5. Si la cesión se efectuase previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores.

TITULO III

Transmisión de datos al extranjero

Art. 16. — Tratamiento internacional de datos de carácter personal. Queda prohibida la cesión o transmisión internacional de datos entre la República Argentina y otros Estados, o con organismos internacionales o supranacionales que no aseguren una protección equivalente de los datos de carácter personal.

TITULO IV

Derechos de los titulares

Art. 17. — Impugnación de las valoraciones basadas exclusivamente en el tratamiento de datos de carácter personal. El titular podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que tengan por único fundamento la valoración que de su persona se haga a partir del tratamiento de datos de carácter personal.

Art. 18. — Derecho de información. Cualquier persona podrá conocer la existencia de registros o bancos de datos de carácter personal, su finalidad y la identidad del responsable. Esta información deberá ser suministrada por el Registro General de Protección de Datos que será de consulta pública.

Art. 19. — Derecho de acceso.

1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter

personal que consten en registros o bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes, así como de quienes han solicitado información sobre una persona.

2. La información podrá consistir en la mera consulta de los registros o bancos de datos, por medio de su visualización, o en la comunicación de la misma mediante escrito inteligible, aun cuando tengan sistemas de claves o códigos convencionales que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerlo en cualquier momento.

Art. 20. — *Derecho de rectificación, eliminación y conservación.*

1. El responsable del registro o banco de datos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación, actualización o eliminación en el plazo máximo de cinco días hábiles.
2. Los datos de carácter personal que resulten inexactos, incompletos o discriminatorios serán rectificadas o eliminados, respectivamente.
3. Si los datos rectificados o eliminados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del registro o banco de datos deberá notificar la rectificación o eliminación efectuada al cesionario, dentro del tercer día hábil de realizado el tratamiento de datos por el responsable.
4. La eliminación de datos incompletos no procederá cuando pudiese causar perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros, o cuando existiese una obligación de conservar los datos, pudiéndose completar los mismos.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable del registro o banco de datos y el interesado, y mientras subsista la finalidad que lo justifique.

Art. 21. — *Procedimiento de acceso.* A los efectos de la presente ley no se exigirá contraprestación alguna por el acceso, por la rectificación, actualización o eliminación de los datos de carácter personal inexactos, incompletos o discriminatorios.

Art. 22. — *Tutela de los derechos.*

1. Deberán ser indemnizados los afectados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley por parte del responsable del registro o banco de datos, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos.
2. Cuando se negase el acceso al dato o a su rectificación o eliminación, total o parcial, el afectado

podrá solicitar la tutela de sus derechos promoviendo acción de amparo, en los términos del artículo 36 de la presente.

3. En los casos de registros o bancos de datos de titularidad pública o privada, la responsabilidad por daño se exigirá por medio de acción sumaria ante los órganos de jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes.

TITULO V

Disposiciones sectoriales.

Registros o bancos de datos de la administración pública nacional

Art. 23. — *Creación, modificación o eliminación.*

1. La creación, modificación o eliminación de registros o bancos de datos de la administración pública nacional sólo podrán hacerse por medio de acto legislativo o administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Nación y anotado en el correspondiente Registro General de Protección de Datos, el cual funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Oficial.
2. Dichos datos deberán indicar:
 - a) La finalidad del registro o banco de datos y usos previstos para los mismos;
 - b) Las personas sobre las que se pretenda obtener datos de carácter personal que resulten obligadas a suministrarlos;
 - c) El procedimiento empleado o a emplearse para el tratamiento de datos de carácter personal;
 - d) La estructura básica del registro o banco de datos y la descripción de los datos de carácter personal en ellos contenidos;
 - e) Las cesiones de datos de carácter personal que, en su caso, se prevean;
 - f) Los órganos de la administración responsables de los registros o banco de datos;
 - g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, información, rectificación, actualización o eliminación de datos de carácter personal.

3. En las disposiciones que se dicten para la eliminación de registros se establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para aquélla.

Art. 24. — *Cesión de datos entre administraciones públicas.*

1. Los datos de carácter personal sometidos a tratamiento por parte de las administraciones públicas

blicas en el ejercicio de sus atribuciones, no serán cedidos a otras administraciones públicas para el desempeño de competencias diferentes o que versen sobre materias distintas, salvo cuando la cesión hubiese sido prevista por las normas de creación del registro o banco de datos o por disposición posterior de igual o superior rango.

2. Podrán ser objeto de cesión los datos de carácter personal que una administración pública obtenga con destino a otra.

Art. 25. — *Cesión de datos a registros o bancos de datos privados.* No obstante lo dispuesto en el artículo 15, inciso 2, apartado b), la cesión de datos almacenados en fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a registros o bancos de datos de titularidad privada sino con el consentimiento del interesado o cuando una ley así lo disponga.

Art. 26. — *Registros o bancos de datos de defensa y seguridad nacional.*

1. Los registros o bancos de datos de las fuerzas armadas y organismos de seguridad e inteligencia que contengan datos de carácter personal, que, por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, quedarán sujetos al régimen general de la presente ley.
2. El tratamiento de datos de carácter personal con fines de defensa nacional por parte de las fuerzas armadas y organismos de seguridad e inteligencia sin consentimiento de los afectados, quedarán limitados a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real y cierto, para la defensa nacional, debiendo ser tratados en registros o bancos de datos específicos y establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
3. Los datos de carácter personal registrados con fines policiales serán eliminados cuando dejen de ser necesarios para las averiguaciones que motivaron su tratamiento.

A estos efectos se considerará especialmente la edad del interesado, el carácter de los datos tratados, la necesidad de mantener dichos datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, indulto, amnistía, rehabilitación y prescripción de la responsabilidad.

Art. 27. — *Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y eliminación de datos.*

1. Los responsables de los registros o bancos de datos que contengan la información referida en el apartado 2 del artículo anterior podrán denegar

por resolución motivada, el acceso, la rectificación o la eliminación de datos de carácter personal en función de los peligros que pudieran amenazar la defensa nacional, la protección de los derechos de terceros y las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

2. Los responsables de los registros o bancos de datos de la hacienda pública podrán igualmente denegar por resolución motivada, el ejercicio de los derechos mencionados en el apartado anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando el afectado estuviere siendo objeto de inspección e investigación con su conocimiento.
3. El afectado al que se le niegue arbitrariamente, en forma total o parcial, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del defensor del pueblo, o promover acción de amparo.

TITULO VI

Registros de titularidad privada

Art. 28. — *Creación.* Podrán crearse registros o bancos de datos de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento de la actividad u objeto legítimo de la persona física o jurídica titular y se respeten las garantías que esta ley establece para la protección de los derechos en ella consagrados. Estos registros o bancos de datos deberán inscribirse en el Registro General de Protección de Datos al que se refiere el artículo 23 de la presente.

Art. 29. — *Comunicación de la cesión de datos.*

1. El responsable del registro o banco de datos privados que efectúe cesión de datos, deberá informar de ello a los interesados, indicando la finalidad del registro o banco de datos, la naturaleza de los datos que han sido cedidos, y el nombre y domicilio del cesionario, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, debiendo contar con el consentimiento previsto en el mismo.
2. No existirá obligación en comunicar la cesión de datos cuando la misma sea impuesta por ley.

Art. 30. — *Datos sobre los abonados al servicio de telecomunicaciones.* Los números de teléfonos y demás servicios prestados por empresas de telecomunicaciones, junto con otros datos complementarios, podrán figurar en los repertorios de abonados de acceso al público, siempre que el interesado no hubiere exigido su exclusión.

Art. 31. — *Prestación del servicio de tratamiento de datos.*

1. Quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, no podrán tratar los datos obtenidos con un fin di-

ferente al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a terceros ni aun para su conservación.

2. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados, deberán ser eliminados salvo que mediare autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios, en cuyo caso se podrán tratar con las debidas condiciones de seguridad por un período de cinco años.

Art. 32. — Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito.

1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de fuentes accesibles al público, o del propio interesado.

2. Podrán tratarse igualmente datos de carácter personal relativos al cumplimiento o no de obligaciones, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta e interés.

En ambos casos, se notificará en el término de diez días al afectado respecto del tratamiento de dichos datos, y del registro o banco de datos donde consten los mismos.

3. Cuando el interesado lo solicitara, el responsable del registro o banco de datos le comunicará los datos, evaluaciones o apreciaciones que sobre el mismo hubieren sido elaboradas dentro del plazo máximo de cinco días.
4. Sólo se podrán tratar datos de carácter personal que sean determinantes para evaluar y apreciar la solvencia patrimonial y el crédito de su titular, con una antigüedad no mayor de cinco años.

Art. 33. — Registros o bancos de datos con fines publicitarios o análogos. Quienes se dediquen al tratamiento de datos de carácter personal, con domicilios, reparto de documentación, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, podrán utilizar listas tratadas automatizadamente o no, cuando aquellos datos fueran accesibles al público o hubieren sido obtenidos directamente del interesado.

Art. 34. — Registros o bancos de datos relativos a encuestas o investigaciones. Sólo se utilizarán datos de carácter personal en las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercado, investigaciones científicas o de otras actividades, siempre que el interesado hubiera prestado libremente su consentimiento a tal efecto. Estos datos no podrán ser utilizados con finalidades distintas ni cedidos, salvo que se los disociara antes de su cesión.

Art. 35. — Código tipo. Mediante acuerdos, los responsables de los registros o bancos de datos de titularidad privada podrán formular códigos tipo, los que podrán establecer las condiciones de organización, funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad, programas o equipos, obligaciones de las partes intervinientes en el tratamiento de datos, garantías para el ejercicio de los derechos de los titulares de los mis-

mos, con pleno respeto de lo previsto en la presente ley y su correspondiente reglamentación con recurso ante el defensor del pueblo como autoridad de aplicación.

TITULO VII

Procedimiento

Art. 36. — La acción de amparo prescrita por el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional deberá tramitarse por proceso sumarísimo y según el procedimiento establecido por el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez interviniente dictará sentencia que haga lugar o deniegue dicho amparo. La sentencia que lo conceda ordenará la rectificación, actualización o eliminación de los datos de carácter personal según sea el caso, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder. En caso de deducirse recurso de apelación, éste tendrá sólo carácter devolutivo.

Art. 37. — Rechazo de la acción de amparo. El rechazo de la acción de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante, pudiendo el afectado promover las acciones correspondientes.

TITULO VIII

Sanciones

Art. 38. — Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes de los daños y perjuicios ocasionados al afectado y de las sanciones penales a que hubieran dado lugar los delitos cometidos, las personas responsables de los registros o bancos de datos que infringieran esta ley, serán pasibles de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos (\$ 1.000) a cien mil pesos (\$ 100.000), eliminación o clausura de los registros o bancos de datos por parte del defensor del pueblo, que será órgano de aplicación de acuerdo a la reglamentación que al efecto dicte la comisión bicameral creada por el artículo 5º.

Las multas que se apliquen se destinarán a la capacitación del órgano de control, que es el defensor del pueblo.

TITULO IX

Alcance federal

Art. 39. — Se invita a las provincias a crear sus registros de bancos de datos provinciales y a establecer sus órganos de aplicación. La jurisdicción provincial en el marco del artículo 5º de la Constitución Nacional deberá tener una acción sumarísima para la defensa de los derechos establecidos en la presente ley y en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional. La ausencia de reglamentación procesal no impedirá la tramitación de la acción sumarísima prevista en el artículo 43.

Art. 40. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

NOTA

Los fundamentos de los proyectos presentados por los señores senadores no se publican, se deja constancia que los mismos se hallan impresos en los Diarios de Asuntos Entrados según el siguiente detalle: S.-1.384/95 DAE N° 113/95; S.-2.006/95 DAE N° 166/96; S.-111/96 DAE N° 10/96; S.-230/96 DAE N° 17/96; S.-563/96 DAE N° 40/96; S.-773/96 DAE N° 52/96; C.D.-30/96 DAE N° 71/96; y se encuentran a disposición de los señores senadores en el expediente original.

Buenos Aires, 3 de octubre de 1996.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Carlos F. Ruckauf.

S/D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar la inclusión de mi firma en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre hábeas data (expedientes S.-111/96, S.-230/96, S.-563/96, S.-773/96, S.-1.384/95, S.-2.006/95 y C.D.-30/96). Hago expresa reserva de mi disidencia parcial al mismo.

Saludo a usted atentamente.

Horacio D. Usandizaga.

Disidencia parcial del senador nacional doctor Horacio D. Usandizaga, al proyecto venido en revisión sobre regulación del hábeas data (Expediente C.D.-30/96)

Señor presidente:

El *hábeas data* es una modalidad de amparo según rige el artículo 43 de la Constitución Nacional.

El bien jurídico tutelado es el derecho a la privacidad (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y 1.071 del Código Civil).

Desde el Estado, el *hábeas data* puede convertirse en un procedimiento de mejora cualitativa de la información contenida en sus registros, aspecto sumamente útil para facilitar la toma de decisiones.¹

Al tiempo que debe reconocerse su carácter condicionante del secreto de Estado.²

El instituto protege el derecho a informarnos sobre nuestros datos personales que se encuentran almacenados en bancos de datos, así como el derecho a requerir su supresión, modificación o actualización cuando la información registrada resulte discriminatoria o de alguna manera inexacta.

La información puede estar contenida en soportes de diversa índole: prontuarios, fichas, legajos, archivos, soporte magnético o cualquier clase de documento.

Pero no es el simple almacenamiento lo que preocupa, sino el hecho de que los avances tecnológicos permiten que la información procesada acerca de una

persona pueda ser transmitida a terceros en segundos, tanto dentro como fuera del país.

Nos desvela entonces la posibilidad de que los datos sean manipulados por otras personas, otros organismos, otras entidades y que puedan ser utilizados en contra de su titular,³ máxime cuando se trate de datos inexactos, incompletos o desactualizados.

Del mal uso de los datos puede derivar un daño severo al honor, la intimidad, al derecho de propiedad (patentes y modelos de utilidad), a la propia imagen⁴. Y, aún más, al derecho a la identidad personal, es decir a la "personalidad cultural, dinámica, que se forma desde que nacemos y que alteramos, agrandamos, achicamos, cambiamos a lo largo de nuestra vida, según nuestros sentimientos, ideas religiosas, estudios científicos, etcétera."⁵

Hasta los datos más inofensivos pueden resultar por su tratamiento en informaciones que afecten la intimidad del interesado.⁶

En consecuencia, frente al enorme poder de quien posee la información —Estado o entidades privadas—, debe pensarse en una regulación que proteja al individuo.

Regulación

A partir de este análisis surge la voluntad de regular la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos públicos o privados destinados a brindar informes y el acceso a la información por medio del recurso de amparo del *hábeas data*.

La tarea no es sencilla ya que en el tema interactúan principalmente dos cuestiones a proteger: la "privacidad" y la "libertad de información".

A raíz de estas consideraciones Gregorio Badeni se ha permitido expresar que en particular en "el ejercicio del *hábeas data*... se producirá la inevitable colisión con la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados, la seguridad del Estado y el sistema democrático constitucional, el secreto profesional, el secreto comercial, el secreto industrial y otras manifestaciones de la vida humana que disfrutan de expresa o implícita protección constitucional en salvaguarda del valor fundamental de la Constitución: la libertad"⁷.

³ Jorge Reinaldo Vanossi en "El *hábeas data*: no puede ni debe contraponerse a la libertad y los medios de prensa", "El Derecho", tomo 159, páginas 949-954.

⁴ Conforme Alberto Bianchi en *Hábeas data y derecho a la privacidad*, "El Derecho", tomo 161, página 866.

⁵ La preservación de la privacidad frente al desafío tecnológico en I Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la Información, Presidencia de la Nación, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Subsecretaría de Informática y Desarrollo, 1995, página 35.

⁶ Conf.: Alcides López, proyecto de ley de regulación del *hábeas data*, expediente 563/96.

⁷ Reforma constitucional e instituciones políticas, página 254.

¹ Alvin Toffler, en *Hábeas data*, Oscar Andrés de Masi, "La Ley", Actualidad, 16 de junio de 1994.

² Francisco Delich, Convención Constituyente, 1994.

Mientras que en la regulación de la protección de los datos personales se deberá atender muy especialmente al carácter de bien económico que ha adquirido la información, en tanto genera riqueza y es objeto de transacciones⁸.

Por esas razones, la regulación integral de la protección de datos personales y el recurso de *habeas data* ha de respetar mínimamente las siguientes pautas⁹.

1º) Que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos.

2º) Que se actualicen los datos atrasados.

3º) Que se asegure la confidencialidad, impidiendo que ciertos datos se transfieran ilegítimamente a terceros.

4º) Que se rectifiquen los datos inexactos.

5º) Prohibir el registro de información sensible, relativa a religión, conducta sexual, raza, ideas políticas, en la medida que ello importe discriminación.

Sujetos de la norma

Especial consideración se debe otorgar a los sujetos intervinientes y sus diferentes intereses en la formación de archivos y el tratamiento de datos:

a) El titular de los datos: persona física, ciudadano o extranjero o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país;

b) El operador de los datos: regulando su acceso a los datos y distinguiendo aquellos datos vacantes (públicos) a los que todos tienen llegada en un Estado de derecho que reconoce el pluralismo de la información y la libre investigación científica del especial tratamiento de los datos privados y la prohibición de operar datos sensibles;

c) El distribuidor, cuyo derecho a proporcionar información está más limitado. Las excepciones a la libertad de expendio de información están relacionadas con datos que está prohibido almacenar, datos registrables pero que sólo pueden ser utilizados por determinados sujetos en supuestos específicos (juez) y datos que nunca pueden proporcionarse (portador de HIV);

d) Los usuarios: para quienes si el banco de datos es público el acceso es libre, si es privado, el acceso se verá restringido.

Así como a los sujetos del *habeas data*:

a) El sujeto activo: toda persona física, ciudadano o extranjero con residencia legal o persona de existencia ideal con domicilio legal en el mismo. No es una acción popular; ha de articularla el afectado. (Sagües);

⁸ Conf.: Rodolfo Iribarne en *La información como bien económico en un mundo globalizado*, Primer Seminario sobre Protección de Datos y Acceso a la Información, Presidencia de la Nación, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Información y Desarrollo, 1995, página 35.

⁹ Conf.: Ley inglesa de protección de datos personales, y autores nacionales como Sagües y Vanossi.

b) Sujeto pasivo: quien tiene bajo su custodia el "banco de datos"; persona física o de existencia ideal pública o privada.

El archivo privado es cuestionable por el *habeas data* si provee informes a terceros o si no los provee de hecho pero está destinado a hacerlo (Sagües).

El doctor Iván Cullen mocionó en la Convención Constituyente la incorporación de la frase "proveer informes de uso público" para dejar a salvo el secreto profesional de abogados, contadores, etcétera.

Análisis en general del dictamen

A partir de las apreciaciones expuestas, puntualizamos nuestra disidencia parcial con el dictamen.

En primer lugar, hubiésemos preferido que se legislara sobre la acción de amparo por *habeas data* sólo con el alcance que la Constitución le asigna en el párrafo tercero del artículo 43:

"Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, certificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes periodísticas".

Sostenemos con el doctor Vanossi que: "el secreto del *habeas data* está en su sencillez. Si al *habeas data* se lo convierte en un mecanismo complejo demasiado sofisticado y demasiado articulado, no va a ser captado y entendido por los propios interesados, es decir por los ciudadanos o por los habitantes que van a encontrar dificultades en el acceso al mismo para poderlo esgrimir y utilizar como una herramienta protectora. La suerte del *habeas data* va a correr paralela con lo que históricamente fue la suerte de los famosos writs del derecho inglés, que primero lograron afianzarse a través de ese desenvolvimiento natural de la equidad y recién después, el legislador les dio el perfil con que hoy los conocemos en el derecho comparado".

En cuanto a una ley de protección de datos personales ella ha de requerir un debate intenso y una consulta prudente a la legislación comparada y su práctica de años (Data Protection Act de Inglaterra de 1984, Privacy Act de Estados Unidos de 1974, legislación europea de la década del '70 —Alemania, Austria, Dinamarca y Francia—, Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, que desarrolla los llamados "datos sensibles" y directiva sobre "Protección de Datos Personales" del Parlamento y Consejo de la Unión Europea, octubre de 1995).

El tema es sumamente complejo y requiere de normas ponderadas y razonables que equilibren el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

La enorme casuística que presenta el proyecto en cuanto a la temática de protección de datos (artículos 1º a 32 inclusive), seguramente habrá de generar conflictos en un futuro cercano, ante el avance tecnológico que se anuncia en materia de sistemas más sofisticados de almacenamiento de datos, transmisión instantánea de los mismos y sobre todo de excepcionales métodos de tratamiento de imágenes.

El exceso de normas también dificulta la interpretación, en tanto se repiten iguales conceptos en distintas oportunidades, se incurre en contradicciones y redundancias y se resta valor a las definiciones del artículo 2º.

Así, se define el "tratamiento de datos" en el artículo 2º y se comprende en su enunciado a la "cesión". Luego, se continúa la regulación diferenciando dichos conceptos: "tratamiento" en el artículo 5º y "cesión" en los artículos 11 y 12.

Por otra parte, el artículo 5º, inciso 2 establece que no será necesario el consentimiento del titular para proceder al tratamiento de datos personales, en determinados supuestos. En igual sentido se expresa la norma al regular la "cesión" en el artículo 11, y consigna la exención del consentimiento remitido a los supuestos previstos en el artículo 5º, inciso 2 y agregando otros. Entre estos últimos figura en el inciso d) el caso de la cesión entre dependencias de los órganos del Estado, ya incluido en el inciso 2 del mismo artículo y en el artículo 5º, inciso 2, si nos guiamos por la definición de tratamiento de datos.

Además, el supuesto d) del artículo 5º, inciso 2 repite el contenido del inciso c) del artículo 11.

En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la norma requiere de un esfuerzo de comprensión. Indudablemente se trata de archivos públicos y de privados destinados a brindar informes, tal como lo dispone la Constitución Nacional, y no se comprenden los registros mantenidos con fines exclusivamente personales y los dedicados a la actividad periodística.

Tampoco se especifica la regulación de los registros pertenecientes al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y al Registro Nacional de las Personas, así como los registros electorales.

La consideración de las personas jurídicas como titulares del derecho de privacidad y sujetos de la norma, no condice con la legislación comparada más actualizada europea y norteamericana. Creemos hubiese sido conveniente excluir de las disposiciones de la ley a los bancos de datos en cuanto contengan información referida a personas jurídicas (artículo 1º, segundo párrafo, artículo 33, inciso 3).

En tercer lugar, nos preocupa la protección desmedida que se brinda al Estado en cuanto al tratamiento de datos personales y en especial las posibilidades de su cesión entre organismos. Circunstancia ésta que no refleja la tendencia legislativa comparada más moderna, ni las fuentes que dieron origen al proyecto originario del diputado nacional doctor César Arias, sobre el que trabajó la sanción de la Cámara de Diputados.

Numerosas normas se resuelven en desmedro de los derechos del titular de los datos, sujeto principal de protección de la norma constitucional.

Entre ellas cabe citarse:

Artículo 5º, punto 2, inciso b) no exige el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia. Disposición que se vincula estrechamente con el artículo 11, punto 2 d), al disponer que el consentimiento para la cesión no es exigido cuando se reali-

ce entre dependencias de los órganos del Estado en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Por su parte, la disposición del artículo 17 determina la posibilidad de denegar el acceso, la rectificación y cancelación de datos de carácter personal obrantes en los mismos en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden, la seguridad públicos o de la protección de derechos e intereses de terceros.

Asimismo, se autoriza a denegar la información sobre datos de carácter personal, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas.

El *habeas data* es un instrumento para que el ciudadano afirme sus propios derechos individuales y ello a su vez afirme la propia legitimidad del Estado. Las limitaciones a su ejercicio deben ser excepcionales y en todos los casos notificadas debidamente al afectado.

Correspondería en estos supuestos optar por una redacción como la propuesta por el proyecto del senador Berhongaray (S.-773/96, artículo 26) y permitir el acceso a los particulares que estuvieran sujetos a experimentar restricciones actuales en sus derechos como consecuencia de los datos obrantes en los ficheros en cuestión, con la única excepción de investigaciones policiales o judiciales en curso, supuesto en que deberá brindarse tal acceso en oportunidad en que el afectado deba ejercer su derecho de defensa.

En cuarto lugar, nos preocupa la indefinición del proyecto acerca de quién será el órgano de control, ya que la misma viene precedida de antecedentes poco aceptables.

Así, la sanción de diputados instituyó en tal función al ombudsman, desconociendo que por su ley de creación, 24.284, el Defensor del Pueblo sólo puede formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes legales y funcionales y propuesta para la adopción de nuevas medidas y no es competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas (artículos 27 y 28).

Tal vez la solución más prudente sería pensar en la creación de un ombudsman o comisionado especializado en la protección de datos (tal como establece la legislación alemana y el proyecto del diputado Alfredo Bravo).

Tampoco parece aconsejable pensar en un órgano de control multitudinario, y de proceder burocrático, a partir de lo expresado *ut supra* sobre la necesidad de sencillez en el diseño del procedimiento y austeridad en las normas.

Análisis en particular del dictamen

En lo particular observamos los siguientes artículos:
Artículo 1º — Creemos necesario formular dos comentarios al artículo 1º del dictamen:

a) El bien jurídico tutelado por el conjunto de las disposiciones contenidas en el dictamen es derecho indi-

vidual personalísimo, el derecho a la intimidad del artículo 19 de la Constitución Nacional.¹⁰

Dicho derecho se vulnera cuando se difunden hechos relativos a la vida privada de una persona o a su familia, se divulgan expresiones o hechos concernientes al titular que lo mortifiquen en sus sentimientos, se atente contra la privacidad del domicilio, la reserva de las comunicaciones y se emplazan aparatos para grabar, filmar, etcétera.

En su ámbito se protege también al sujeto de toda intromisión en su personalidad psicológica y se determina que la acumulación de datos por los sistemas de informática debe respetar el derecho del sujeto a respetar su amplitud y tenor y permitirle corregir y actualizar los mismos, limitando su utilidad para la finalidad para la que fueron elegidos.¹¹

Anexo a ese derecho se ubica el derecho al honor, comprensivo de la protección de la propia estima y el buen nombre externo.

El *habeas data* pasa de una visión pasiva a una visión activa de los derechos, ofrece al ciudadano una herramienta que le permitirá afirmar su propio derecho.¹²

La redacción elegida no expresa claramente lo antedicho y podría confundir en la interpretación. En ese sentido proponemos lo siguiente:

"Artículo 1º: Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral del derecho a la intimidad de las personas en cuanto pueda ser vulnerada por el tratamiento y cesión de sus datos personales contenidos en archivos públicos y privados destinados a prestar informes públicos.

"Asimismo, reglamenta el derecho de acceso del titular de los datos a la información que sobre él se registre en conformidad a lo establecido en el 43, párrafo 3º de la Constitución Nacional."

b) El eje central del proyecto gira en torno a la protección del derecho a la intimidad frente a la acumulación y tratamiento informático de datos propiamente dicho. La caracterización de los archivos o registros son conceptos principales a desarrollar.

Siguiendo al convencional constituyente doctor Iván Cullen, proponemos se indiquen con mayor precisión las características que diferencian los registros públicos de los privados, y se señale que estos últimos son comprendidos por la norma en tanto se encuentren destinados a brindar informes públicos.

Quedan así perfectamente excluidos los archivos específicamente personales, los científicos y los periodísticos.¹³

¹⁰ CnCiv, sala H, mayo 19/1995, "Rossetti c/Dun y Bradstreet S.R.L.", "La Ley", tomo 1995, E.

¹¹ Proyectos de ley de regulación de los derechos personalísimos de los diputados (m. c.) Ortiz Pellegrini y otros; y Parente.

¹² Francisco J. Delich; Convención Nacional Constituyente; citado en Bidart Campos, G.: *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Buenos Aires, 1995, página 643.

¹³ Idem propuesta convencional Adelina de Viola.

A su vez, a partir de la norma constitucional y de las enseñanzas del doctor Humberto Quiroga Lavié, por registros públicos debería precisarse que se entiende se trata de los de carácter administrativo, los de la administración centralizada o descentralizada, existentes tanto en organismos civiles como militares o de seguridad.¹⁴

Art. 2º— Se propone la inclusión de la definición sobre "registro o banco de datos público" y la de "registro o banco de datos privado destinados a brindar informes públicos".

La falta de normas claras conduce a la confusión en varios supuestos, a saber:

Artículo 7º, inciso 3: En la prohibición de formación de archivos de datos sensibles, ¿se comprende a ambos archivos?

Artículo 21: En la inscripción en el registro que habilita el órgano de aplicación, ¿se incluyen ambos archivos o sólo los privados?

Artículo 22, inciso 4: La mención de "datos almacenados en fuentes accesibles al público", ¿indica archivos públicos? En tal caso, contradice la excepción de consentimiento del artículo 5º, inciso 2 y el 11, inciso 3 a).

En particular y con respecto al inciso a) del artículo en análisis se propone una descripción más completa que distinga entre datos:

— Objetivos, comprensivos del nombre, domicilio, profesión, documento de identidad.

— Reservados, como los referidos a estado civil, patrimonio, hobbies, instrumentos de pago, hábitos de compra, etcétera, y los

— Sensibles, relativos a la ideología, religión o creencia, salud, conducta sexual, delitos e infracciones.

Con respecto a los datos objetivos y reservados rige el derecho de acceso y en especial las normas del artículo 25 sobre prestación de servicios informatizados de carácter personal, del artículo 26 sobre prestación de servicios de información crediticia y del 27 sobre archivos de datos con fines de publicidad. En este último caso debe respetarse la opción del titular de los datos de salir del sistema (artículo 27, inciso 3).

En cambio, el almacenamiento de datos sensibles ha de requerir una regulación más restrictiva prohibiéndose la creación de registros exclusivamente con esos datos, y advirtiéndose al titular que puede negarse a suministrar dicha información sobre su persona.¹⁵

Artículo 4º, inciso 5º: Para mayor claridad de la norma, la referencia a la cancelación o sustitución "de

¹⁴ Humberto Quiroga Lavié: *El amparo, el habeas data y el habeas corpus*, en "La reforma de la Constitución explicada por los miembros de la comisión de redacción"; Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1994, página 158.

¹⁵ Conf.: Alberto Bianchi en: *Habeas data y derecho a la privacidad*, "El Derecho", tomo 161, página 866, y Ley Orgánica 5/92, completada por el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, España, real decreto 428/93.

oficio" de los datos inexactos, debería reemplazarse por la indicación de que tales cometidos corresponden al "titular del registro o banco de datos".

Artículo 7º, inciso 3º: Si la norma es genérica y aplicable a todo archivo, aun los privados que no suministran informes al público, en la excepción a la prohibición de tratar datos sensibles sobre la persona deberían mencionarse otras asociaciones como las homosexuales, las de enfermos de sida, cáncer, etcétera.

Artículo 7º, inciso 4º: La información sobre antecedentes contravencionales, es tratada por las empresas de prestación de servicios informatizados en otros países y utilizada para el cálculo de las primas de seguros de accidentes de automóviles. Una legislación de ese tipo sería beneficiosa en el futuro para nuestro país y obligaría a la reforma de esta disposición.

Artículo 10, inciso 2º: No expresa quién permite el relevamiento del "deber de confidencialidad". Se propone que se autorice por resolución judicial.

Artículo 14, inciso 3º: Limita el ejercicio del derecho de acceso del titular a sus datos a intervalos no inferiores a seis meses. No fue ésa la intención de los convencionales constituyentes al pensar y diseñar el instituto del *habeas data* y particularmente al consagrar la libertad de información. Debe suprimirse.

Artículo 15, inciso 3º: La amplitud de medios por los que el titular puede requerir informes sobre sus datos al banco o archivo (por escrito, telefónico, electrónico, etcétera) parece excesiva y puede resultar costosa. Debería obligarse al titular del registro a informar por escrito y en su caso a ofrecer otro medio, siempre que contare con el consentimiento del requiriente.

Artículo 21, inciso e): Deben incluirse como destinatarios de la transmisión de datos a las personas físicas además de las personas jurídicas, únicas comprendidas en el término "entidades" que contiene la norma.

Artículo 31, inciso 1º: Su redacción no es clara, tratándose posiblemente de un defecto en la transcripción, el que debe ser subsanado.

Artículo 31, inciso 2º: Las sanciones deberían ser tipificadas y reguladas con mayor precisión en la norma y no derivadas tan ampliamente a la reglamentación.

Artículo 33, inciso 1º: Debería encabezarse de la siguiente manera: "la acción de *habeas data*".

Artículo 38, inciso 2º: El plazo para contestar el informe debe ser determinado con precisión y no librado a la decisión del juez.

Horacio D. Usandizaga.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Sobre este tema?

Hay lista de oradores.

Sr. Losada. — Quiero ser escuchado y, después, por supuesto, que continúe la lista de oradores. Es una cuestión, a mi juicio, de suma importancia. Por eso estoy pidiendo la palabra con prioridad.

Sr. Presidente. — Muy bien. Hay asentimiento de sus colegas, así que tiene la palabra, señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: lo que voy a reclamar es, sin duda, una cuestión muy grave y delicada.

En este proyecto aparece el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Derechos y Garantías. Lo grave y lo delicado es que a la Comisión de Derechos y Garantías no fue ni siquiera girado el proyecto para su consideración.

Se puede discutir si le correspondía o no a la Comisión de Derechos y Garantías abordar este tema. Lo que no puedo aceptar, por ser presidente de esta comisión, motivo por el cual estaría en falta en cuanto a mi responsabilidad de convocar a sus integrantes para dictaminar, es que aparezcamos dictaminando.

Sr. Presidente. — Seguro.

Sr. Losada. — Entonces, hay dos caminos, señor presidente: que este proyecto vuelva a comisión para que se cumplimente la tarea de la Comisión de Derechos y Garantías; o, si esto no es aceptado por el bloque de la mayoría, que dicha comisión sea excluida como dictaminante. Pero no podemos aparecer en un dictamen en el que no tenemos parte y en el que, obviamente, tenemos derecho a opinar. En mi caso particular, no coincido con el dictamen en mayoría, en el que aparece como dictaminando la Comisión de Derechos y Garantías.

Creo que esto hace a una cuestión de respeto y consideración de este cuerpo.

Sr. Presidente. — Sin duda.

Sr. Losada. — Van a decir, seguramente, que hay integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías que han firmado el dictamen. Pero he hecho averiguaciones y los integrantes de la comisión que lo firmaron lo hicieron por pertenecer a otras comisiones que sí dictaminaron.

Por ese motivo, solicito que este proyecto vaya a la Comisión de Derechos y Garantías para que establezca su propio dictamen. Si esto no es aceptado, pido que sea excluida como dictaminante.

Sr. Presidente. — En primer lugar, encuentro razón al planteo. Deberá expedirse el miembro informante del tema acerca de si acepta la vuelta a comisión incluyendo a la de Derechos y Garantías, o si habría que testar del texto definitivo a la comisión que no ha dictaminado.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Puede haber otras soluciones para superar el inconveniente formal porque, evidentemente, como se plantea esto, muchos de los senadores que somos miembros de la Co-

misión de Derechos y Garantías —entre los que me incluyo— también integramos otras comisiones y hemos suscripto el dictamen.

Para tratar de superar el inconveniente meramente formal —y no excluyo a la Comisión de Derechos y Garantías—, tal vez reglamentariamente se podría hacer algún tratamiento paralelo, en el sentido de mantener constituida en comisión a la Cámara, darle el tratamiento en comisión, incluidas las tres comisiones y, después, hacer la votación...

Sr. Presidente. — Eso no tiene nada de reglamentario, senador Alasino.

Creo que acá se presentan los dos caminos que planteó el senador Losada: o excluimos la parte donde dice que se expidió la comisión, o volvemos el tema a comisión.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: considero que lo más atinado sería excluir del texto a la Comisión de Derechos y Garantías.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: es algo novedoso que se “puentea” a una comisión. Es el colmo que ocurra esto. No creo en la mala fe. Quiero pensar de la mejor manera posible, pero sin duda es muy grave es lo que estamos analizando.

Es muy grave, y no quiero ser apocalíptico ni generar un nuevo debate, pero es un tema delicado. No es un tema menor lo que estamos por discutir. Esta comisión tiene una responsabilidad específica en una cuestión que estamos por discutir, por eso es que realmente me sorprende la ligereza con que se dictamina, y mucho más la ligereza con la cual se incluye a una comisión sin haber tenido la mínima consideración de derivar a ella el asunto. Porque hasta podrían decir que nos demoramos en el dictamen, pero no hemos sido siquiera informados. Por eso le reclamo a la comisión cabecera el no derivar el tema a la de Derechos y Garantías.

En primer lugar, señor presidente, creo que lo lógico, lo natural, es que este dictamen vuelva a comisión. Evidentemente, es una mala solución, pero mucho peor es la que se propone ahora de que aparezca dictaminando pero no involucrada.

Sr. Presidente. — Me acaba de informar el señor secretario parlamentario que el giro a la comisión existió. En consecuencia, no podemos excluirla. Existió el giro a la Comisión de Derechos y Garantías.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador por La Rioja. Quisiera abreviar un poco en la experiencia del señor senador Menem, a ver si nos puede iluminar.

Sr. Menem. — Señor presidente: lamentablemente, no los puedo iluminar ni tengo condiciones para hacerlo. Lo que sí me parece es que son injustas algunas de las expresiones del señor senador por Misiones en el sentido de que lo han “puenteado”, o que se ha querido excluir a su comisión.

Yo no creo que alguien haya querido “puentea” a una comisión. ¿A título de qué? Yo formo parte de las dos comisiones y nunca se dijo que había que “puentea” a la de Derechos y Garantías. Yo creo que en todo caso el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, comisión a la que fue derivado, es el que tenía que reclamar la participación de su comisión.

No es tampoco un cargo al presidente de la comisión, porque a cualquiera se le puede pasar. Pero una cosa es que a uno se le pase y otra muy distinta es que se adjudiquen propósitos de haber querido “puentea” a una comisión. Además, el propio Reglamento establece que cuando un tema es girado a más de una comisión, éstas actuarán en conjunto.

Con esto quiero expresar que los presidentes de las comisiones son los que deben encargarse de que su respectiva comisión tenga participación en las deliberaciones sobre la cuestión que se trate, máxime cuando aquí hay dos circunstancias muy importantes. En primer lugar, se trata de un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, o sea que no es nada sorpresivo ni mucho menos. Y en segundo lugar, es un tema que está en tratamiento desde hace varios meses.

En consecuencia, nadie en este cuerpo puede decir que no sabía que el hábeas data estaba siendo tratado. Y nadie puede decir que se ha “puenteado” a la Comisión de Derechos y Garantías. En todo caso, debemos atribuirlo a un olvido, omisión o a cualquier otra cosa.

No adjudiquemos malas intenciones sobre un tema respecto del cual yo creo que todos estamos de acuerdo, esto es, que se debe reglamentar una de las más modernas garantías constitucionales, como lo es el hábeas data.

En cuanto a la solución concreta, creo que si hay acuerdo en este cuerpo, hoy se puede tratar el tema, dejando constancia de que no intervino la Comisión de Derechos y Garantías, aunque sus miembros pueden expresarse y participar del debate.

Sr. Presidente. — Informa el doctor Piuizzi que figuran todas las firmas de los miembros de la comisión, menos la del señor senador Losada.

Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: en primer lugar, no fue la Comisión de Derechos y Garantías la que remitió las firmas. Si está firmado por otro lado, entiendo que es una tarea que habrá hecho la Secretaría Parlamentaria.

Por otra parte, le voy a solicitar al señor senador por La Rioja que no se transforme en un intérprete de lo que he dicho. Por lo menos, que me deje decir lo que yo creo que dije. No acusé de "puentear"; dije que no quería suponer que fuimos "puenteados". Por favor, no nos convirtamos acá en intérpretes de nuestras palabras.

En segundo lugar, el asunto no fue girado a la Comisión de Derechos y Garantías. Pido que me demuestren que, efectivamente, fue girado a la comisión. Eso no sucedió, y el señor secretario parlamentario lo sabe. En la Comisión de Derechos y Garantías no figura, motivo por el cual no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Veo que hay gestos que contradicen mis palabras, pero yo pido que me lo demuestren, porque no es cierto.

Por esta razón, señor presidente, la Comisión de Derechos y Garantías no pudo abocarse al tratamiento del tema en cuestión.

Señor presidente: como esto puede convertirse en un trabalenguas porque cada uno puede interpretarlo como le parece, en primer lugar, quiero que quede claro que el tema no llegó a la comisión, y si dicen que sí llegó, pido que me lo demuestren, cosa que no van a poder hacer. En segundo lugar, si no se admite que el asunto vuelva a comisión, que se permita que la Comisión de Derechos y Garantías no participe de este dictamen. Y hay dos razones para esto: primero, porque la comisión no lo discutió y, segundo, porque particularmente no comparto el dictamen de la mayoría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: no se ha hecho mención a un hecho que considero importante en torno a este tema.

En la reunión de labor parlamentaria de hace dos semanas, al momento de considerarse el *hábeas data*, planteé que el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías me había manifestado que no se giró el proyecto y, por lo tanto, no tuvo oportunidad de estudiarlo y emitir dictamen.

Sr. Presidente. — Efectivamente, así lo planteó.

Sr. Genoud. — Se me explicó en esa oportunidad que había sido girado solamente a Asuntos Constitucionales y que con ello se consideraba cubierta la responsabilidad del tratamiento del tema.

Recuerdo haber dicho que esto significaba una superposición de competencias de las comisiones, que era consecuencia de su proliferación y que, inevitablemente, se producirían este tipo de problemas de jurisdicción.

Señalo esto, señor presidente, porque sobre este conflicto ya estaban advertidos los presidentes de los bloques. De tal modo que el episodio no es nuevo y, en ese sentido, nuestra bancada es solidaria con la postura del presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el senador por Misiones, Mario Losada. Además, entendemos que este tema debe ser resuelto mediante una correcta interpretación reglamentaria, toda vez que no podemos dejar que se sienta el precedente de que un expediente sea despachado por una comisión y luego, sin su correspondiente dictamen, quede habilitado para su tratamiento en el recinto.

En función de que no puede quedar sentado este antecedente, muy grave en el caso de que no haya coincidencias, es que planteamos que el tema sea resuelto como corresponde.

Sr. Presidente. — ¿"Resuelto como corresponde" significa...?

Sr. Genoud. — Perdón. Es un solo dictamen, pero se hace con el concurso de todas las comisiones que deben intervenir.

Sr. Presidente. — La pregunta de la Presidencia es la siguiente: ¿qué opina el bloque radical sobre este asunto? ¿Quieren que vuelva a comisión y se integre la restante, o que se excluya el concepto?

Sr. Losada. — La alternativa de máxima, o la correcta, es que vuelva a comisión.

Si existe la decisión de discutir este proyecto, que en esta oportunidad no figure la Comisión de Derechos y Garantías dictaminando en el tema.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: si se tratase de un proyecto de ley con un alto nivel de conflicto, quizás las suspicacias serían abundantes en este aparente problema que tenemos. Pero se trata de todo lo contrario, de un proyecto de ley con altísimo nivel de consenso de los bloques políticos. Y eso lo da la firma del dictamen, con al-

gunas disidencias, muchas de las cuales ya han sido contempladas por la comisión. Esas modificaciones van a ser aceptadas en el momento del tratamiento en particular. Es decir que con esto despejamos toda duda de algún tipo de "puenteo" o actitud de mala fe o intencionada de parte de los senadores o de la comisión cabecera, que es la de Asuntos Constitucionales.

El segundo aspecto es que el giro de un proyecto, obviamente, lo da la Secretaría Parlamentaria. Y tal cual afirma la Presidencia, ya ha sido realizado. Normalmente, es costumbre en este cuerpo que cuando se pronuncia una comisión cabecera, luego se recolectan las firmas de los integrantes del resto de las comisiones y no hay un tratamiento específico del tema; se computan las firmas y se espera en el resto de las comisiones el pronunciamiento de la comisión cabecera. Esto es lo que sucedió. Lo que falta en todo caso es alguna reunión formal de la Comisión de Derechos y Garantías donde en el orden del día de esa comisión figure el tratamiento del expediente. Pero no hubo una anomalía en el trámite que se le dio a la firma del dictamen. Por eso este dictamen es correcto, y lo es también hasta la inclusión de la Comisión de Derechos y Garantías, si es cierto que ha sido girado.

Voy a proponer...

Sr. Presidente. — Senador Yoma: antes de que proponga algo, tal cual lo adelantó el senador Menem al comienzo, hago notar que llevamos cuatro horas y media de sesión. Preveo, por lógica, que el desarrollo del *habeas data* no va a cubrirse en la sesión de hoy. Entonces, ¿no es más lógico a esta altura que se pongan de acuerdo, hagan un dictamen y la semana que viene tratemos el tema del *habeas data*?

Sr. Yoma. — Ya está hecho el dictamen.

Sr. Presidente. — Un dictamen donde el presidente de la comisión está planteando un tema reglamentario.

Sr. Yoma. — Señor presidente: lo único que falta, tal cual lo dijo la Presidencia, es que el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías suscriba el dictamen o haga uno en disidencia. No falta otra cosa porque el resto de los integrantes de la comisión ya lo firmaron, ya hay dictamen.

Lo que no tiene sentido es que vuelva a comisión un tema que tiene un alto nivel de consenso y además, falta muy poco para la finalización del período y todavía tenemos que mandar el proyecto a Diputados. Obviamente que en esta sesión no vamos a poder tratar este tema, pero lo que falta es que el senador Losada haga un despacho en minoría.

Sr. Presidente. — Senador Yoma: le quiero decir lo siguiente. Efectivamente, todo el mundo sabe del uso y costumbre. El uso y costumbre no modifica el reglamento. Creo que acá todos actuaron de muy buena fe; eso está muy claro. Para cualquier observador imparcial, como es mi caso, todo el mundo ha actuado como es de uso y costumbre. Ahora bien, el señor senador Losada preside la comisión respectiva y siente que el tema no ha sido tratado adecuadamente.

Además, con todo lo que ya ocurrió aquí, podría haberse encontrado una solución para la próxima sesión.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — El senador por Entre Ríos me pidió permiso para hablar primero.

Sr. Alasino. — Señor presidente: con todo respeto y simpatía le señalo que usted descalificó mi moción inicial, pero es la única que a mi juicio soluciona el problema.

Sr. Presidente. — Sí, tranquilamente podemos hacer eso.

Sr. Alasino. — Si constituimos la Cámara en comisión, lo único que perdemos es la unidad de debate. ¿Qué quiere decir esto? Que el debate es libre y no está restringido por las normas con que se discute en la sesión. En ese sentido se otorga al cuerpo la característica de comisión.

Si el señor senador Losada quiere que se supere el hecho de que su comisión no ha intervenido, constituyamos el cuerpo en comisión y él podrá proponer las modificaciones que crea convenientes, con lo cual se va a suplir la deficiencia que tuvo el trámite.

Si actuamos así podemos empezar con el tratamiento del tema y, si tenemos suerte, agotar el debate y quizá votar en general.

Las alternativas de excluir a una comisión o dejarla sin que opine son sumamente novedosas, razón por la cual reitero que lo único que está más cerca de la solución es constituir el cuerpo en comisión.

Sr. Losada. — No sigan buscando la firma de la comisión porque no la van a encontrar.

¿Me da la palabra, señor presidente?

Sr. Presidente. — Dado que el tema tiene gran importancia, quiero dejar aclarado qué pasó. No es una cuestión menor dilucidar si el asunto se giró a la comisión o no, y si fue recibido o no.

El secretario parlamentario dice que el proyecto fue girado y recibido. Explíquelo usted, señor secretario.

Sr. Secretario (Piuze). — El proyecto C.D.-30/96 sancionado por la Cámara de Diputados

fue recibido y girado desde un principio a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como comisión cabecera, y luego a las comisiones de Legislación General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías. Acá consta la fecha y la recepción por parte de la Comisión de Derechos y Garantías de cada uno de los proyectos sobre los cuales se dictaminó: senadores López, Fernández Meijide, Menem, Berhongaray y Romero Feris, aparte de la sanción de Diputados.

Sr. Alasino. — No leyó el mío.

Sr. Secretario (Piuzzi). — Sí, está. Todos han sido tenidos en cuenta por la comisión cabecera, que es la de Asuntos Constitucionales.

Informo al señor presidente de la comisión que este orden del día que viene con seis firmas de la comisión...

Sr. Presidente. — Pero ésa no es la cuestión en discusión. El tema es si ustedes remitieron...

Sr. Losada. — No busque, señor secretario, porque a la comisión no fue. Firmaron los senadores que la integran, pero no como integrantes de la comisión, sino como miembros de las otras comisiones.

Sr. Presidente. — Eso está claro desde su punto de vista. Pero el doctor Piuzzi dice que el asunto fue girado a su comisión.

Sr. Losada. — No es así. Que no lo busquen porque no fue girado.

¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente. — Se le girará luego fotocopia...

Sr. Losada. — Señor presidente: éste no es un problema del senador Losada, sino de la comisión, y no se trata de que yo dictamine. Yo no puedo dictaminar por la comisión porque mi opinión respecto de este tema es en minoría. Es probable que en la comisión haya mayoría que piense distinto de lo que pienso yo. Entonces no puedo ponerme en propietario de la comisión.

De todos modos, quiero resguardar la identidad y la entidad de la Comisión de Derechos y Garantías. Esta es la cuestión. No es un capricho.

Si hay decisión y consenso en tratar el tema, pediría que como solución se excluya a la Comisión de Derechos y Garantías como dictaminante y que se vote de esa forma.

Sr. Presidente. — No es posible, señor senador, toda vez que el asunto le fue girado.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Si algo le faltaba a esta sesión para naufragar, es esto.

Me llama la atención, señor presidente, que esperen justo el día en que se está por tratar un proyecto que hace tanto tiempo que está en estudio, más precisamente en el momento en que se le está por dar la palabra al miembro informante, para darse cuenta de que no fue girado a la Comisión de Derechos y Garantías. Me parece que esto no es serio.

Ayer el presidente del bloque radical aceptó la inclusión del tema en el plan de labor para la sesión de hoy.

¿Por qué no hizo la cuestión ayer? ¿Por qué no la hicieron antes? Recién hoy se dan cuenta.

Sr. Genoud. — Lo hice hace dos semanas.

Sr. Menem. — Me parece que la importancia del tema exige un tratamiento mucho más responsable. Si realmente no quieren tratar este proyecto, que lo digan. Pero que no se diga que no puede ser tratado porque falta una firma o porque no ha sido girado a una comisión. Yo creo que Secretaría sí hizo ese giro. Puede ser que el expediente se haya traspapelado en la comisión. Puede que haya ocurrido eso y no es culpa de nadie. Pero no hagamos una cuestión de Estado del hecho de que no haya intervenido una comisión.

Cuando yo firmé el dicamen era consciente de que lo hacía en mi doble carácter de miembro de las dos comisiones.

Entonces, no puedo venir ahora que no firmé el dictamen como integrante de la Comisión de Derechos y Garantías.

Por eso, pido que nos sinceremos y digamos que no queremos tratar hoy este proyecto sino en la próxima sesión. Pero considero que no es el procedimiento correcto volver el asunto a comisión después de haber estado tanto tiempo estudiándose.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — No puedo darle cuatro veces la palabra al mismo senador. Yo tengo mucha elasticidad para dirigir el debate, pero...

Sr. Genoud. — Pido la palabra para hacer una propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: siguiendo la sugerencia del señor senador por Misiones de mi bancada, aceptamos la propuesta del senador Alasino para constituir la Cámara en comisión para tratar el proyecto y de ese modo solucionar en esta sesión el problema planteado. Acep-

tamos esta solución reglamentaria para que no quede el precedente para futuros casos.

Sr. Presidente. — Como no hay quórum, se va a llamar para votar por diez minutos. Si no se consigue quórum en ese lapso, voy a levantar la sesión.

— Se llama para votar.

Sr. Presidente. — Como ha transcurrido el plazo y no hay quórum, queda levantada la sesión.

— Son las 21 y 49

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.